

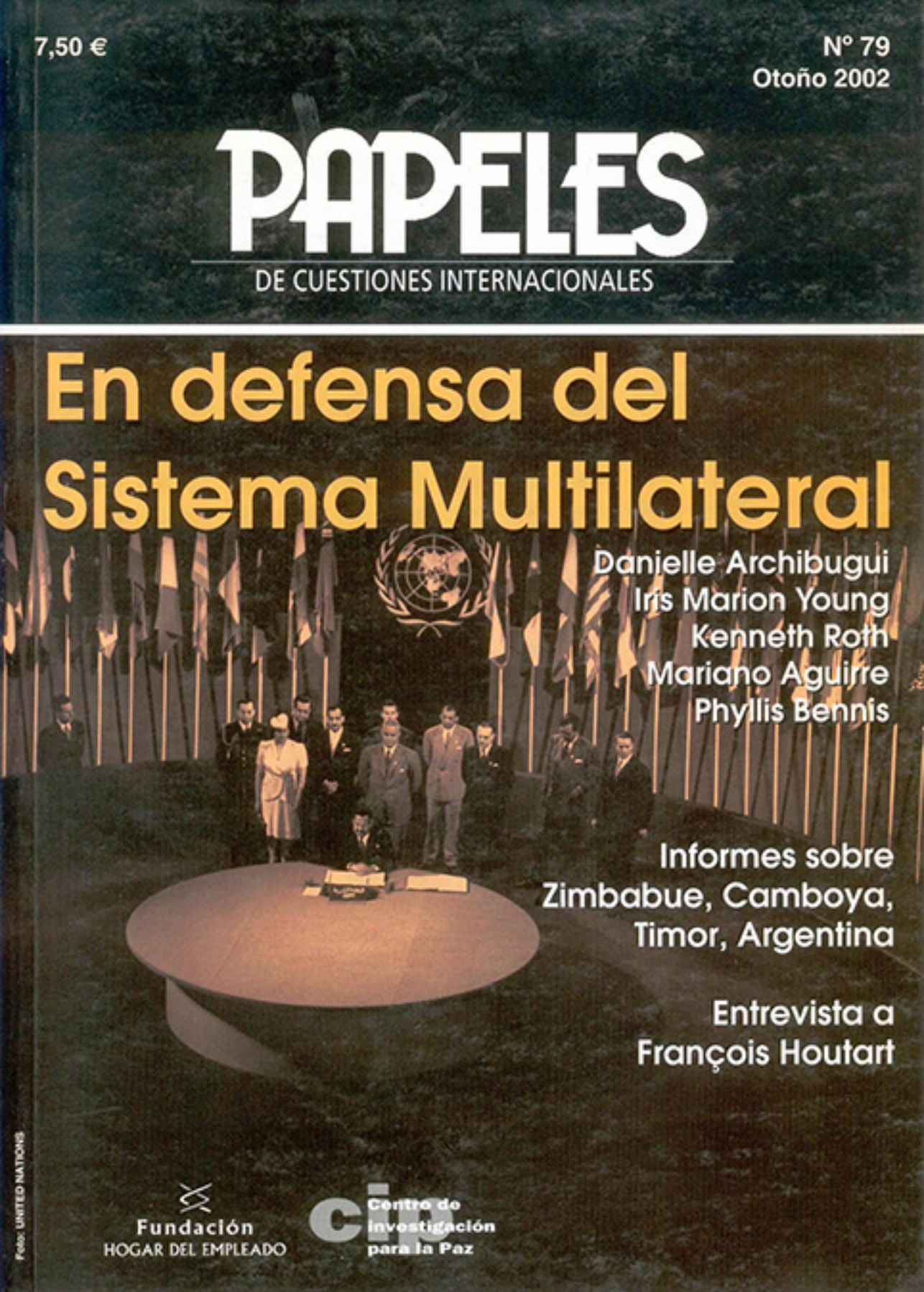
7,50 €

Nº 79
Otoño 2002

PAPELES

DE CUESTIONES INTERNACIONALES

En defensa del Sistema Multilateral



Danielle Archibugui
Iris Marion Young
Kenneth Roth
Mariano Aguirre
Phyllis Bennis

Informes sobre
Zimbabue, Camboya,
Timor, Argentina

Entrevista a
François Houtart


Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO

 **cip**
Centro de
investigación
para la Paz

PAPELES n^o 79 - 2002

De cuestiones internacionales

Director

Mariano Aguirre

Consejo de Redacción

Julián C. Carranza, Teresa Filesi, Vicenç Fisas, Manuela Mesa,
Alberto Piris, Francisco Rey, José María Tortosa

Coordinación y edición

Nieves Zúñiga García-Falces

Distribución

Rosa Vaquero

Colaboradores habituales y asesores

Jesús M. Alemany, Ana Alonso, Lucía Alonso, Patrick Costello, Javier Díaz Malledo, Alfonso Dubois, Johan Galtung, Vicente Garrido, Susan George, Xabier Gorostiaga, Fred Halliday, Michael T. Klare, Saul Landau, Robert Matthews, Maxine Molyneux, José M. M. Medem, Roberto Montoya, Ignacio Ramonet, Francisco Rojas Aravena, Pedro Sáez, José A. Sanahuja, Dan Smith, Joe Stork, Berna Wang

Papeles es una publicación trimestral del Centro de Investigación para la Paz (CIP), que forma parte de la Fundación Hogar del Empleado

El CIP realiza diversas actividades sobre paz, seguridad y desarrollo.

Información sobre las actividades de la Fundación Hogar del Empleado y el CIP pueden solicitarse a Duque de Sesto, 40, 28009 Madrid.

Tel.: (91) 576 32 99. Fax: (91) 577 47 26.

Correo electrónico: cip@fuhem.es

Web: www.cip.fuhem.es

Documentación: cd@fuhem.es

Diseño de portada: Pedro Arjona

Diseño interior: Marian Cao

I.S.S.N.: 0214-8072

Depósito legal: M- 30.281 - 1993

Foto de portada: Conferencia de San Francisco (1945) en la que se acordó crear la Carta de Naciones Unidas. Foto cedida por la Oficina de Información de Naciones Unidas en España.

Las opiniones de los artículos publicados no reflejan necesariamente las del Centro de Investigación para la Paz y son responsabilidad de los autores.

Impresa en papel ecológico.

Copyright: Fundación Hogar del Empleado. Todos los derechos reservados. Para solicitar autorización de reproducción de artículos, escribir al Centro de Investigación para la Paz.

INTRODUCCIÓN	5
<hr/>	
TEORÍA	
Hacia un Estado de Derecho global	9
<i>Daniele Archibugi e Iris Marion Young</i>	
<hr/>	
ACTUALIDAD	
Guerra contra Irak	23
<i>Mariano Aguirre</i>	
La guerra contra Irak será ilegal y equivocada	29
<i>Phyllis Bennis</i>	
Consenso de Monterrey: ¿avance o retroceso?	37
<i>Juan Pablo Prado Lallande</i>	
El G8 tras la cumbre de Kananaskis	45
<i>Kimberley Wise y José Guimón</i>	
Estrategias civiles frente a la crisis argentina	55
<i>Rodrigo Sosa</i>	
Proceso de retorno de los refugiados camboyanos	63
<i>Ana García Rodicio</i>	
Timor Oriental: ¿el fin de la opresión?	73
<i>Mónica Rafael Simões</i>	
El Movimiento Sin Tierra y el “ecomunitarismo”	83
<i>Sirio López Velasco</i>	
Anexo: Movimiento social sin tierra	91
<i>Marta Harnecker</i>	
<hr/>	
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS	
Conflicto en Zimbabue	97
<i>Carolina María Rudas Gómez</i>	
<hr/>	
EDUCACIÓN	
Comunicación social y pensamiento único desde la pedagogía crítica	113
<i>Eric Jalaín Fernández</i>	
LECTURAS SOBRE EDUCACIÓN	
Libros sobre violencia en la escuela	120
<i>Paulina Fajardo</i>	
<hr/>	
DERECHOS HUMANOS	
El rechazo de EEUU al Tribunal Penal Internacional	127
<i>Kenneth Roth</i>	

TESTIMONIO

- Regreso a Chicken Street** 139
Jordi Raich
-

ENTREVISTA

- Entrevista a François Houtart: Otras formas de pensar el mundo** 151
Ana Belén Martín Vázquez
-

RESEÑAS DE LIBROS

- Guerra y olvido. La Unión Europea y la prevención de conflictos en África Subsahariana, de Mariano Aguirre y Cecilia Bruhn/ Alerta 2002. Informe sobre derechos humanos, conflictos armados y transferencia de armas, de Universidad Autónoma de Barcelona/ La situación del mundo 2002, de Worldwatch Institute** 159
Carolina María Rudas Gómez
- El juego global, de José María Tortosa** 164
Alberto Piris
- Guerras profanas. Afganistán, Estados Unidos y el terrorismo internacional, de John K. Cooley** 167
Cesar Docampo
- La debacle de Argentina: una Argentina que muere y otra que bosteza, de Carlos Gabetta** 169
Hernando Perdomo Blanco
- A agenda perdida da reconstrução pós-bélica: o caso de Timor Leste, de Mónica Rafael Simões** 171
Claudia Clavijo
- Guerras que yo he visto, de varias autoras / Bombas de risa, de Pat Carra** 173
Elsa Velasco
- El debate humanitario, de Francisco Rey Marcos y Víctor de Currea-Lugo** 174
Elizabeth Rodríguez
-

BIBLIOGRAFÍA

- Tribunal Penal Internacional** 179
Susana Fernández Herrero

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, se han producido diversos e importantes cambios en el sistema internacional. Estos hacen referencia a cuatro ejes fundamentales: el recorte de las libertades interiores; el ataque al sistema multilateral de acuerdos; el aumento de la represión y el autoritarismo desde Israel hasta Zimbabue, pasando por Colombia y otros países; y la tendencia al uso de la fuerza. La atención de los medios de comunicación en la conmemoración del primer aniversario de los atentados de septiembre, ha estado centrada especialmente en aspectos anecdóticos pero, además de la vida de las víctimas, el drama para el conjunto de la sociedad global es que se están adoptando medidas de extrema gravedad que deterioran un sistema multilateral que ha sido muy difícil de construir.

Para abordar esta guerra contra el multilateralismo, en este número de *Papeles de Cuestiones Internacionales*, Daniele Archibugi e Iris Marion Young critican la respuesta de EEUU ante el terrorismo basada en la fuerza y proponen una alternativa que se asiente en los instrumentos multilaterales del sistema internacional. Por su parte, Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, analiza la peligrosa ideología autoritaria de EEUU y su rechazo a instituciones multilaterales como el Tribunal Penal Internacional. Por otro lado, Mariano Aguirre advierte de la peligrosidad de una guerra contra Irak y del ataque al sistema multilateral de Naciones Unidas que supone la actitud del Gobierno de Bush. Así mismo, se publica el texto que la investigadora del Institute for Policy Studies de Washington, Phyllis Bennis, preparó para presentar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense sobre Irak, sin finalmente permitirle su intervención. Los autores de estos textos alertan, de una u otra forma, sobre los peligros de acabar o deteriorar un sistema internacional que funcione sobre la base de acuerdos, y temen que una de las consecuencias más graves del 11 de septiembre sea un regreso al unilateralismo agresivo por mucho tiempo.

En este número de *Papeles* se abordan también otros temas como los desafíos del nuevo Gobierno de Timor tras su independencia el 20 de

mayo de 2002, el proceso de retorno de los refugiados camboyanos o las estrategias de supervivencia desarrolladas por la sociedad civil argentina ante la crisis económica. José Guimón y Kimberley Wise analizan la credibilidad y legitimidad del G8 tras la cumbre de Kananaskis y Carolina María Rudas informa sobre el conflicto en Zimbabue.

En una entrevista con François Houtart, director de la revista *Alternatives Sud*, (publicada en castellano por el Centro de Investigación para la Paz/Fundación Hogar del Empleado), se analizan las relaciones Norte-Sur y las alternativas a la globalización. También presentamos una visión de la comunicación social y crítica del neoliberalismo desde el campo de la pedagogía crítica y un análisis del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Un fragmento del libro *Afganistán también existe* de nuestro colaborador Jordi Raich cruza información cotidiana con análisis político. Las reseñas de una serie de libros importantes sobre la realidad actual completan este número.

Nieves Zúñiga García-Falces
Coordinadora

DANIELE ARCHIBUGI E IRIS MARION YOUNG

Hacia un Estado de Derecho global¹

Los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en septiembre de 2001, se pueden interpretar de dos formas distintas. Según la primera interpretación, serían ataques contra EEUU como Estado y contra su población. La segunda los percibiría como crímenes contra la humanidad. La diferencia no es meramente técnica sino política, y cada una implica diferentes estrategias de reacción. Aunque tras los atentados algunos personajes públicos se decantaron por la segunda interpretación, ha prevalecido la primera. Los autores ponen en tela de juicio la respuesta estatista a los ataques terroristas y ofrecen alguna perspectiva sobre cómo EEUU y otros actores globales podrían considerar algunas actuaciones alternativas mediante una interpretación más cosmopolita de la situación.

El Gobierno de Bush definió los ataques como un acto bélico contra EEUU, ante el cual la represalia militar era la respuesta apropiada. Esto implicaba encontrar un Estado o Estados contra quienes emprender una guerra, y EEUU eligió Afganistán bajo el pretexto de que el Gobierno de los talibán cobijaba y apoyaba a Al Qaeda. EEUU también ha señalado a Irán, Irak y Corea del Norte como Estados contra los que podría tener lugar una intervención militar. No obstante, situar la reacción a los ataques terroristas en el marco de un conflicto militar entre Estados nunca ha encajado demasiado bien. Que Afganistán permitiera que los líderes de Al Qaeda establecieran sus campos de entrenamiento en su territorio es una justificación poco sólida como para emprender una guerra contra ese país y derrocar su Gobierno. Consciente de esa debilidad, EEUU cambió las razones esgrimidas para justificar la guerra contra los talibán de la legítima defensa a la defensa del derecho humanitario, con el propósito declarado de liberar al pueblo afgano, y sobre

¹ Este texto es una versión revisada de "Toward a global rule of law", *Dissent*, primavera 2002, pp. 27-32.

Daniele Archibugi es miembro del Consejo Nacional de Investigación de Italia en Roma. Iris Marion Young enseña Teoría Política en la Universidad de Chicago

Traducción:
Leandro Nagore

todo a las mujeres, de la opresión. Esta justificación nos parece cínica y oportunista ya que, anteriormente, ni el Gobierno de Clinton ni el de Bush se habían mostrado públicamente interesados en el destino de los afganos.

Responder a los ataques terroristas en el marco del sistema de Estados y, por ello, declarar la guerra a un país, no encaja con este caso específico, ni ha logrado crear un mundo más seguro. Aunque la guerra haya destruido algunas bases de Al Qaeda, y EEUU haya logrado capturar miembros de esta organización, nada indica que alguno de ellos esté conectado de forma concreta a uno de los diecinueve terroristas suicidas del 11 de septiembre. Ciertas estimaciones sitúan la cifra de muertes civiles en Afganistán entre un mínimo de 1.000 y un máximo de 3.700, además de los cientos que aún morirán por culpa de bombas sin explotar.² Todavía se desconoce el número de soldados y personal armado que han muerto, pero algunas informaciones, entre las que destaca la masacre de cientos de prisioneros talibán en la prisión de Mazar-i-Sharif, han levantado importantes consideraciones sobre la legalidad con la que se han desarrollado las operaciones militares.³ La cifra de refugiados que sufren la hambruna y el frío a causa de la guerra es imposible de calcular. Tampoco hay motivos para considerar que el conflicto haya disuadido a algún terrorista. Sin embargo, la guerra incluso puede haber contribuido a desestabilizar Asia Central con consecuencias que aún están por ver.

Aunque EEUU no actuó solo en el desarrollo del conflicto, sí lo lideró. Decidió con quién cooperar y distribuyó a su antojo las distintas funciones entre los demás actores. Es difícil no interpretar la política de EEUU en los últimos meses como un esfuerzo para consolidar, aún más, su posición hegemónica en el mundo. Mientras muchos estadounidenses consideran que esto es positivo, la existencia de una sola potencia militar global que pretende hacer cumplir su voluntad es censurable en una cultura democrática y un obstáculo a los esfuerzos para promover la paz. En la última década, EEUU ha recurrido a la fuerza militar en el Golfo Pérsico, Somalia, Panamá, los Balcanes y en muchos otros lugares. En todos los casos, las intervenciones han causado víctimas, pero pocas han sido estadounidenses. La magnitud del poder militar y económico estadounidense, junto con su voluntad para hacer uso de él de forma asimétrica y sólo aparentemente multilateral, produce reacciones hostiles en todo el mundo, incluso entre sus aliados. Una encuesta realizada en diciembre de 2001 por el Pew Research Centre y el *International Herald Tribune* a 275 líderes económicos y políticos, constató que la mayoría de los encuestados no estadounidenses consideraban que EEUU abusa de su poder, y que algunas de sus políticas son responsables de las crecientes desigualdades globales en el bienestar.⁴ Como respuesta a esta hegemonía, nos parece imprescindible que todos los líderes y ciudadanos se centren en una visión del mundo

² Project on Defense Alternatives y Marc Herold, Universidad de New Hampshire. http://www.cursor.org/stories/civilian_deaths.htm

³ Richard Falk, "In defense of 'Just War' thinking", *The Nation*, 24 de diciembre de 2001, pp. 23-25.

⁴ Brian Knowlton, "How the world sees the US: and sept. 11", *International Herald Tribune*, 20 de diciembre de 2001.

basada en el imperio global de la ley, y que intenten presionar y avergonzar a EEUU para que actúe de manera más acorde con esta visión.

Una visión alternativa

El anhelo por lograr una sociedad global gobernada con normas justas se debería incluir entre las víctimas del 11 de septiembre. La caída del muro de Berlín dio esperanzas de llegar a construir un orden mundial basado en la legalidad internacional y con organizaciones de cooperación internacional reforzadas. Los debates recientes y las demostraciones contra las políticas y procedimientos de las organizaciones comerciales y financieras internacionales, han asumido la emergencia de una forma de gobierno más global. La cuestión es si los regímenes reguladores globales representarán únicamente los intereses de los actores más poderosos, o si incluirán también las opiniones y los intereses de la mayoría, a través de organizaciones transparentes y responsables.

La existencia de una respuesta alternativa al terrorismo la basamos en estos deseos de alcanzar un gobierno global justo y democrático. Hasta ahora, los debates sobre un Estado de Derecho Internacional y sobre los sistemas reguladores globales han otorgado menos atención a la prevención, investigación y enjuiciamiento de crímenes en un sistema internacional, que a asuntos como el comercio internacional, las inversiones o la protección del medio ambiente.

Proponemos dos premisas para imaginar lo que podría haber sido, y aún podría ser, una respuesta alternativa a los ataques terroristas del 11 de septiembre. En primer lugar, la situación debe posicionarse en el contexto de las relaciones entre individuos, y no tanto en términos interestatales.⁵ Los terroristas no actuaron como representantes de un Estado, sino como miembros de organizaciones privadas, del mismo modo que aquellos que fallecieron fueron, en gran medida, personas privadas de al menos setenta países diferentes. En segundo lugar, los acontecimientos se deberían tipificar como crímenes y no como hechos bélicos, por lo que la respuesta adecuada sería una investigación y un enjuiciamiento, dentro del marco del Estado de Derecho, además de medidas establecidas por la ley para prevenir y disuadir crímenes de este tipo. Por este motivo, no pensamos como algunos que el concepto de una “guerra justa” se puede aplicar a la reacción militar por parte de EEUU.⁶

Los Estados democráticos no suelen, y nunca deberían, reaccionar de forma arbitraria y mediante el uso del poder militar a ataques terroristas cometidos den-

*El anhelo por
lograr una
sociedad global
governada con
normas justas
se debería
incluir entre las
víctimas del 11
de septiembre*

⁵ David Held y Mary Kaldor, “Justice in a global age”, *Constellations*, marzo 2002, Vol. 9, N° 1.

⁶ No sorprende que la petición que apoyó el conflicto como una guerra justa, firmada por un número importante de intelectuales estadounidenses, en ningún momento hace mención a Afganistán. Ni siquiera el documento *What we’re fighting for*, Institute for American Values, febrero de 2002, disponible en http://www.propositionsonline.com/Fighting_for.html, pudo establecer una clara relación entre la acción (los ataques terroristas) y la reacción (la guerra contra Afganistán). Entre los firmantes se incluyen: Amitai Etzioni, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Robert Putnam y Michael Walzer.

tro de sus fronteras. España como respuesta a las amenazas del grupo terrorista vasco ETA, Italia haciendo frente a la Brigadas Rojas, EEUU como respuesta al ataque terrorista en Oklahoma City; todos movilizaron los recursos legales y el poder policial. Sobrepasar los límites de la legalidad, como hizo durante cierto tiempo el Gobierno español al autorizar que agentes estatales utilizaran medios extrajudiciales en la lucha antiterrorista, parece más bien producir el efecto contrario: aumentar el riesgo de tales ataques.

El mundo debería enfrentarse a las organizaciones terroristas internacionales según los mismos principios jurídicos que usan los Gobiernos para hacer frente a las amenazas terroristas internas. Responder a actos, amenazas y redes terroristas transnacionales según las normas del derecho, no implica que la actitud tomada sea "más blanda" para con los terroristas que mediante una reacción de Estado a Estado, bajo el liderazgo de un Estado hegemónico. Todo lo contrario, una respuesta verdaderamente global, basada en el uso de medidas favorables a la aplicación de la ley, sería más eficaz para identificar y apresar a los culpables, y para la prevención de ataques posteriores, además de que dañaría a menos personas y destruiría menos bienes que en la guerra contra Afganistán.

Propuestas para la política internacional

La creación de un orden mundial más justo y pacífico requiere cambios fundamentales en las organizaciones políticas, sociales y económicas. A continuación ofrecemos cinco principios que podrían servir de guía a la política internacional, con el fin de lograr respuestas significativas frente a problemas y amenazas mientras, al mismo tiempo, se produce dicha transformación.

1- Legítimar y fortalecer las instituciones internacionales

Las acciones y políticas que tratan al terrorismo y a las amenazas terroristas como si involucrasen a la población mundial, dentro del marco de la legalidad, deberían hacer uso de las organizaciones internacionales y de los instrumentos legales que están a su disposición. En este sentido, Naciones Unidas desempeña un papel primordial. Si bien existen numerosos defectos en sus proyectos y funcionamiento, que deberían ser enmendados, la ONU es la única organización transnacional que incluye a representantes de prácticamente todo el mundo. Además, las instituciones, políticas y convenciones de Naciones Unidas cubren la mayoría de los problemas más acuciantes del planeta.

La ONU se encuentra en una situación imposible. Por una parte, se le pide que intervenga sobre el terreno para restaurar la paz, construir Gobiernos e infraestructuras, ayudar a los refugiados, llevar a cabo campañas sanitarias y muchas más actividades, de forma simultánea, en múltiples regiones del mundo. Pero por otra, los Estados miembros continuamente le niegan los medios para desempeñar tales misiones al no proveerla de los fondos necesarios, pero también al restringir su autoridad. Cuando los esfuerzos de Naciones Unidas demuestran ser inadecuados,

cuados para resolver los problemas, lo que ocurre con cierta frecuencia, los líderes mundiales la degradan por no reaccionar a tiempo y por ser impotente. EEUU y otras potencias mundiales no pueden seguir cargándole a Naciones Unidas con las consecuencias de sus propias guerras y decisiones económicas, cuando al mismo tiempo están alentando el menosprecio hacia la organización.

La estructura actual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con sus cinco miembros permanentes, refleja la situación de la política internacional en 1945, y precisa de amplias reformas. Sin embargo, ese mismo Consejo de Seguridad aprobó dos resoluciones tras los ataques del 11 de septiembre: la Resolución 1368 (del 12 de septiembre) y la Resolución 1373 (del 28 de septiembre), que llaman a la cooperación entre todos los Estados miembros para disuadir e investigar las actividades terroristas y otros sucesos criminales transnacionales. Si los jefes de Gobierno se uniesen con los movimientos sociales, EEUU podría verse obligado a desarrollar esfuerzos de carácter multilateral en la lucha contra las redes criminales transnacionales, que otorgarían mayor poder decisorio a las naciones menos desarrolladas del planeta.

2- Coordinar instituciones de aplicación de la ley y de recogida de información de todo el mundo

En apariencia, el Congreso de EEUU tiene poco interés en investigar los motivos por los que dos de las organizaciones de información e investigación más sofisticadas del mundo —la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI)—, pudieron verse tan sorprendidas ante un crimen de tal magnitud. Una posible explicación radicaría en que la atención de ambas organizaciones estaba excesivamente centrada en el Estado, lo que también ocurre en la mayoría de las agencias estatales de recogida de información e investigación del mundo. Simultáneamente a las mejoras de la organización transnacional y de los movimientos internacionales de capitales, trabajo, tecnología y cultura, se produce el desarrollo de la organización del crimen transnacional. Ante esta situación, las organizaciones de información y aquellas cuyo objetivo es la aplicación de la ley van por detrás de esta realidad. La información sigue siendo principalmente un instrumento del Estado para ser usado contra otros Estados. En una cultura de espionaje, las agencias de un Estado realizan sus actividades encubiertas contra otros Estados, sin que exista una explícita confianza mutua. Por extensión, cada agencia interna de aplicación de la ley tiene sus propios sistemas que hacen que la comunicación y la cooperación a través de fronteras nacionales sean de gran complejidad. Los ataques del 11 de septiembre deberían servir como llamada de atención para empezar a revisar las estructuras de las agencias de recogida de información y de aplicación de la ley, de modo que se logre asegurar una mayor cooperación entre las agencias nacionales con el fin de proteger, no a los Estados, sino a los ciudadanos de todo el mundo.

Hay ciertos instrumentos internacionales que pueden servir para este propósito. La Organización Internacional de Policía (Interpol), que engloba a 179 Estados, lleva décadas trabajando en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el lavado

El Gobierno de EEUU fomenta un Estado más represivo internamente, al mismo tiempo que se torna más defensivo y cauto ante el exterior

de dinero, los “crímenes de cuello blanco”, los crímenes electrónicos, la falsificación, el crimen organizado y la trata de mujeres y niños. A pesar de que su presupuesto es limitado, minúsculo incluso, comparado con sus objetivos, mantiene amplias bases de datos sobre criminales, terroristas y sospechosos de tales actividades. Organiza datos sobre la falsificación de pasaportes y sobre cuentas de tarjetas de crédito robadas que pueden ser de gran utilidad para las agencias de aplicación de la ley de la gran mayoría de países del mundo. Sin embargo, las agencias de información estatales pocas veces trabajan con la organización ni utilizan sus bancos de datos para su trabajo.⁷

En su reunión del milenio, en noviembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención contra el Crimen Organizado Internacional, que hasta la fecha han firmado 140 Estados, incluyendo EEUU. Esta convención requiere que los Estados fortalezcan su legislación interna destinada al control del crimen organizado y les anima a que mejoren sus mecanismos de cooperación transnacional tanto en lo relativo a conocimientos legales, como sobre la extradición y la investigación criminal. De forma explícita, hace un llamamiento a favor de que se ayude a las naciones menos desarrolladas a mejorar y modernizar sus medios para hacer frente al crimen organizado. Aunque, de momento, esta convención no sea más que papel, como tantos otros tratados y convenciones de Naciones Unidas, puede servir como base para que tanto los líderes políticos como los movimientos sociales exijan instituciones y recursos que hagan realidad los principios enunciados.

EEUU, junto a otros Estados, pueden actuar para que la cooperación internacional avance en materia de aplicación de la ley, tanto en el ámbito nacional como internacional, y al mismo tiempo robustecer y crear agencias para la aplicación del derecho que sean de naturaleza global. Un esfuerzo colectivo para combatir el terrorismo con una mayor intervención de Naciones Unidas, sería beneficioso para EEUU pero implicaría que éste se comprometiera a ser más leal a la organización internacional. Como declaró el presidente de la Asociación de Naciones Unidas de EEUU:⁸ “para mantener el compromiso de los Estados miembros en esta nueva guerra (contra el terrorismo), y para acabar con las reticencias que surgen del resentimiento hacia ‘el doble rasero estadounidense’, Washington debe reafirmar aquello que el público estadounidense siempre ha reconocido, que el imperio de la ley se aplica tanto a los grandes como a los más pequeños”.⁹

Esto implicaría acabar con la distinción estatista entre las actividades policiales y de espionaje dirigidas hacia el interior y las orientadas hacia el exterior. La política actual de EEUU y otros Estados occidentales está encaminada en la dirección opuesta, y nubla esta distinción de la peor forma posible. Al permitir que la CIA y el FBI cooperen dentro del territorio estadounidense, el Gobierno fomenta la transformación a un Estado más represivo internamente, al mismo tiempo que se torna más defensivo y cauto ante el exterior. El incremento de la cooperación

⁷ David Zweshimo y Sebastian Rotella, “Interpol hopes terror investigators keep in touch”, *Los Angeles Times*, 23 de diciembre de 2001.

⁸ www.unausa.org

⁹ William H. Luers (ed.), *Combating terrorism: does the UN. Matter...and How*, ONU-EEUU, Nueva York, 2002, p. 5.

transnacional en la aplicación de la ley debería desarrollarse junto a la implantación de procedimientos de responsabilidad y transparencia con el fin de proteger los derechos de las personas.

3- Aumentar el control financiero

Una de las maneras más eficaces para atacar a las redes terroristas, y al crimen internacional en general, es cargar contra sus fondos financieros. No deja de sorprender que a pesar de que hacía varios años Osama Bin Laden era conocido como cabecilla y fuente financiera de diversas operaciones terroristas, Al Qaeda gozó de plena libertad para gestionar sus fondos. ¿Cómo es que nadie hasta ahora ha logrado hacer mella en sus finanzas? La respuesta se encuentra, en parte, en que los líderes financieros mundiales se resisten a toda regulación sobre las finanzas internacionales. A menudo las empresas mueven su dinero alrededor del mundo con la finalidad, por ejemplo, de eludir el pago de impuestos.

El seguimiento y la regulación de los movimientos de capitales podría cerrar el flujo de dinero dirigido a actividades criminales. Una guerra contra el libre movimiento de capitales no causaría “daños colaterales”, ni generaría refugiados, ni siquiera polucionaría el medio ambiente. EEUU ha ampliado su capacidad para investigar y regular los movimientos de capitales. En este aspecto, incluso la mayor potencia militar del mundo depende de la cooperación con otros Gobiernos, y sobre todo de aquellos a quienes no agrada la política exterior estadounidense. Esta cooperación, aunque necesaria, es difícil de sostener cuando son los mismos Gobiernos, o sus aliados, quienes deben enfrentarse a amenazas militares u operaciones encubiertas por EEUU.¹⁰

4- Utilizar los tribunales internacionales

EEUU ha llevado su respuesta a los ataques y amenaza terroristas al ámbito interestatal sólo hasta donde le interesa para alcanzar sus objetivos. Al negarse a tratar como prisioneros de guerra a los capturados durante la guerra en Afganistán, EEUU conduce la situación fuera de su estructura estatal. El Gobierno de Bush alega que los detenidos son combatientes ilegales, que no están cubiertos por el derecho internacional según se estipula en las Convenciones de Ginebra. Al mismo tiempo, ha decretado que no aplicará el principio legal, enmarcado en su sistema judicial, de asegurar las debidas garantías procesales a aquellos sospechosos no estadounidenses detenidos en EEUU o en cualquier otro lugar. De esta manera, EEUU proclama ante el mundo entero que no extenderá el amparo de la ley a aquellas personas que no tengan la ciudadanía estadounidense y que sean detenidas con el pretexto de estar rela-

¹⁰ Phil Williams, “Crime, illicit markets and money laundering”, en P.J. Simmons y Chantal de Jonge Oudraat (eds.), *Managing global issues: Lessons learned*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C, 2001, pp. 106-150.

cionadas con el terrorismo.¹¹ Esta postura es tan aberrante que, incluso dentro del Gobierno de Bush y de su más fiel aliado, Reino Unido, ha motivado quejas y rechazo. Como respuesta a este clamor, el Gobierno estadounidense ha alterado ligeramente su postura, pero no el trato dado a los prisioneros.

El vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, ha manifestado que “los terroristas no merecen gozar de las mismas garantías y salvaguardias legales que se aplicarían a los ciudadanos estadounidenses dentro del sistema judicial”.¹² Esta declaración revela el desprecio de Cheney hacia los más elementales principios del derecho a un proceso legal con todas las garantías. Presumiblemente, debería ser el propio proceso judicial el que determine quién es o no un criminal.

Si los ataques del 11 de septiembre se consideran crímenes contra la humanidad, más que contra EEUU, un tribunal internacional creado por Naciones Unidas, basado en los tribunales internacionales para Ruanda y ex Yugoslavia, con jueces procedentes tanto de países occidentales como de países árabes, sería lo apropiado. Un tribunal de estas características tendría la ventaja de plantear la controversia, no entre EEUU y el islam, sino entre un reducido grupo de criminales y la totalidad de la comunidad internacional. Al final, los tribunales *ad hoc* deberían ceder paso a un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente, aprobado por el Tratado de Roma en julio de 1998 y que empezó a implementarse el 12 de abril de 2002. EEUU han manifestado su intención de retirar su firma del mismo, un hecho sin precedentes. El experto internacional Greenwood destacó que “si el Tribunal Penal Internacional hubiese estado operativo y si los Estados pertinentes hubiesen sido partes del mismo, los responsables de las atrocidades del 11 de septiembre habrían sido juzgados por el Tribunal por crímenes contra la humanidad”.¹³

Hemos oído varios planteamientos en contra del uso de los tribunales internacionales para juzgar a individuos sospechosos de realizar o de contribuir de forma material a actos terroristas: que si es demasiado lento, demasiado caro, que si además da a los terroristas una plataforma para airear sus opiniones. Todos estos planeamientos son espurios. No tendría por qué ser más lento juzgar a una persona con las debidas garantías procesales a nivel internacional que nacional; la rapidez que pretende conseguir EEUU estaría reñida con la legalidad del procedimiento. Del mismo modo, no tendría por qué ser más caro pagar un juicio internacional que uno nacional, si ambos son justos. Finalmente, todo procedimiento de juicio público, a cualquier nivel, ofrece a los protagonistas una palestra para exponer sus opiniones sobre los crímenes en cuestión. Esta es precisamente una de sus razones de ser, y es obviamente el motivo por el cual los tribunales militares que tiene previsto constituir el Gobierno de Bush no estarán abiertos al escrutinio público.

¹¹ Christopher Greenwood, “International law and the War against Terrorism”, *International Affairs*, 2002, Vol. 78, Nº 2, pp. 301-317.

¹² *International Herald Tribune*, 16 de noviembre de 2001.

¹³ Christopher Greenwood, *op.cit.*, p. 317.

5- Reducir las desigualdades globales

Desde septiembre de 2001, muchos comentaristas han sugerido que las enormes desigualdades de riqueza y bienestar que existen entre las sociedades del hemisferio Norte, como EEUU, la Unión Europea o Japón por una parte, y Oriente Próximo y el Sudeste asiático, por otra, deben tenerse en cuenta para comprender lo que motiva y conduce a que individuos se unan o creen organizaciones terroristas. Estamos de acuerdo con aquellos que contestan que estas injusticias estructurales no justifican, ni excusan, ninguna actuación criminal. Estas circunstancias tampoco pueden explicar los actos terroristas, ya que hay numerosos lugares pobres en el mundo de los que no parecen surgir individuos que nutren las organizaciones terroristas internacionales.

De todas formas, gran parte de la población mundial vive en una espantosa pobreza.¹⁴ Tanto en las zonas más desarrolladas como en las menos desarrolladas del planeta, esta pobreza persiste, en parte, por las políticas de las naciones más prósperas, por las empresas privadas radicadas en estos Estados y por organizaciones internacionales en las que estas naciones tienen una cuota de poder desproporcionada. Incluso aquellos que acogen esta idea con escepticismo deberían condenar la aparente falta de voluntad de las sociedades y Gobiernos de EEUU, Europa y Japón para realizar significativas transferencias de capital, de capacidad tecnológica y de bienes para mejorar la calidad de vida de los más pobres. No hay duda de que tal indiferencia incita el resentimiento en numerosas partes del mundo y hace peligrar la paz y la prosperidad de muchos que viven alejados de las chabolas.

En otro momento trágico de la historia, con la derrota del fascismo y el final de la II Guerra Mundial, EEUU comprendió que su seguridad y su prosperidad dependían de la regeneración europea. Dedicó una enorme cantidad de recursos al Plan Marshall para reconstruir las infraestructuras de una Europa devastada. Desde entonces, ningún proyecto de ayuda al desarrollo ha tenido tal magnitud, tanto por los recursos invertidos como por los resultados logrados. Que esto haya funcionado una vez debería dar esperanzas de que, con la voluntad necesaria, exista la posibilidad de invertir en las sociedades más empobrecidas para ayudarlas a prosperar. Durante décadas, los movimientos sociales y los Gobiernos de los Estados menos desarrollados han pedido que los poderosos actores económicos mundiales dejen de explotar sus recursos naturales y humanos, y que empiecen a invertir en las infraestructuras y capital humano de dichos países. El mundo desarrollado sigue, por lo general, haciendo oídos sordos a estas plegarias. En 1998, la ayuda oficial al desarrollo de los países que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico supuso un 0,24% de sus productos nacionales brutos combinados, y la ayuda privada también es escasa. Las múltiples tentativas de la sociedad civil global por aumentar los recursos dirigidos hacia el desarrollo, hasta el momento, no se han visto recompensadas por acciones concretas.¹⁵

La indiferencia de EEUU, Europa y Japón incita el resentimiento en numerosas partes del mundo y hace peligrar la paz y la prosperidad de muchos que viven alejados de las chabolas

¹⁴ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, *Human Development Report 2001*, Oxford University Press, Nueva York, 2002; Thomas Pogge (ed.), *Global Justice*, Blackwell, Oxford, 2001.

¹⁵ Helmut Anheir, Marlies Glasius, Mary Kaldor (eds.), *Global civil society 2001*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Incluso el Gobierno de Bush no puede evitar reconocer esta exigencia moral. No logró ausentarse de la Conferencia para la Reconstrucción de Afganistán, patrocinada por Naciones Unidas, que tuvo lugar en enero de 2002, como lo había hecho retirándose de la Conferencia sobre el Racismo en agosto de 2001 y de la Conferencia sobre el Cambio Climático, en diciembre de 2001. En la conferencia de enero, EEUU sólo se comprometió a entregar unos 300 millones de dólares en el primer año, Japón y Europa por su parte se comprometieron a distribuir 500 millones cada uno en los primeros dos años y medio. El Banco Mundial estima que se necesitan por lo menos 4.900 millones de dólares durante los primeros dos años y medio para reconstruir lo mínimo imprescindible en Afganistán. Incluso en este momento de la crisis, las naciones más ricas siguen mostrando un egoísmo increíble ante las miradas de los pobres.

El mundo no será capaz de avanzar hacia una forma de gobierno global justa, inclusiva y efectiva, si no se efectúa una importante redistribución de capacidades económicas, tecnológicas y de organización para lograr reducir las disparidades actuales en términos de calidad de vida y de orden institucional. Para conseguir estos fines es preciso contar con organizaciones internacionales nuevas y fortalecidas que representen, de una manera más real, los puntos de vista y las perspectivas de la población del mundo entero, con un mayor potencial para promocionar la redistribución global de lo que son capaces las actuales instituciones financieras y de desarrollo internacionales como el Banco Mundial. Sin un equivalente global del Plan Marshall, incluso los esfuerzos cooperativos mejor diseñados para hacer frente al crimen organizado transnacional, sólo podrán ser de eficacia defensiva e intermitente.

¿Qué debería haber hecho EEUU?

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 supusieron un reto importante para EEUU, para sus aliados europeos y para el resto del mundo. El Gobierno de Bush y sus aliados decidieron tomar medidas contra un Estado en vez de castigar de forma individual a los responsables. Los que se opusieron al recurso a la guerra tuvieron que contestar en multitud de ocasiones a la siguiente pregunta: ¿y qué debería haber hecho EEUU? En este texto hemos enfocado la pregunta considerando que había medios alternativos con los que hacer frente al terrorismo. No pretendemos argüir que todos los culpables habrían sido capturados y enjuiciados, ni sugerimos que la implementación de las medidas que hemos esbozado habrían sido suficientes para acabar con unas redes asesinas organizadas de forma transnacional. Sin duda, la guerra tampoco ha logrado estos objetivos. Pero, estamos seguros que la cantidad de “víctimas colaterales” habría sido mucho menor si se hubiera seguido esta alternativa. Además, esta reacción habría mostrado a los pueblos del mundo que los líderes de las grandes potencias son capaces de respetar el imperio de la ley y los instrumentos de justicia, incluso más allá de sus fronteras.

Nuestras sugerencias deberían considerarse a largo plazo ya que no han perdido su valía después de pasada la parte más sangrienta de las operaciones

contra Afganistán. Derivan de una perspectiva general sobre la política internacional muy anterior a los ataques del 11 de septiembre. Resulta posible y necesario que se desarrollen instituciones globales y democráticas.¹⁶ Una gran amenaza global como es el terrorismo, a escala del ataque del 11 de septiembre, debería brindar la oportunidad para que los países democráticos del mundo tengan la posibilidad de fortalecer el imperio de la ley y evitar el choque de fundamentalismos.

¹⁶ David Held, *Democracy and the global order*, Polity Press, Cambridge, 1995; Richard Falk, *Law in an Emerging global village. A post westphalian perspective*, Transnational Publishers, Ardsley, 1998.

Guerra contra Irak	23
La guerra contra Irak será ilegal y equivocada	29
Consenso de Monterrey: ¿avance o retroceso?	37
El G8 tras la cumbre de Kananaskis	45
Estrategias civiles frente a la crisis argentina	55
Proceso de retorno de los refugiados camboyanos	63
Timor Oriental: ¿el fin de la opresión?	73
El Movimiento Sin Tierra y el “ecomunitarismo”	83
• Anexo: Movimiento social sin tierra	91

MARIANO AGUIRRE

Guerra contra Irak

El Gobierno de EEUU está decidido a atacar Irak y derrocar al Gobierno de Sadam Husein. Para este proyecto quiere contar con el apoyo y consenso de los aliados europeos, de los Estados árabes y del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque testimonios autorizados consideran que Irak no tiene armas de destrucción masiva, que no hay evidencias de que Bagdad haya tenido relaciones con el grupo Al Qaeda y que Sadam Husein no tiene intenciones de atacar EEUU ni a sus vecinos, Washington ha definido al régimen iraquí como su próximo objetivo en la guerra global contra el terrorismo.

En agosto y septiembre pasado se abrió un debate en la elite política de EEUU sobre si sería conveniente o no atacar a Irak, y, en caso de que se decidiese ir a la guerra, en qué condiciones. La mayor parte del debate quedó situado entre los que estaban a favor del ataque, aunque Washington tuviese que hacerlo en solitario, apoyando al presidente George Bush Jr. y a los miembros más belicistas de su gabinete, y los que optaban por esperar o lograr el apoyo de los aliados europeos y Naciones Unidas. El dilema se proyectó también entre EEUU y los aliados europeos, que han adoptado diferentes posiciones. Y alcanzó, por último, a Naciones Unidas.

El segundo paso para fijar el debate lo dio el Ejecutivo estadounidense al definir como objetivo destruir el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva que posee Irak, dar un golpe preventivo al terrorismo y acabar con el régimen dictatorial de Sadam Husein. Dos de estos tres objetivos suponen un serio y peligroso cambio en la política de la sociedad internacional hacia Irak y son amenazas a principios jurídicos del Derecho Internacional.

Podría discutirse si cuando un país no cumple resoluciones de la ONU puede ser objeto de represalias por parte de la comunidad internacional. Ningún Estado se encuentra autorizado para usar la fuerza contra otro que no cumple resoluciones. Solamente el Consejo de Seguridad, según lo establece la Carta de la ONU, puede autorizar que se utilice la coerción en caso de que todos los medios no militares se hayan agotado. Esto no ha ocurrido. La acción armada, además, debería

Mariano Aguirre es director del Centro de Investigación para la Paz/Fundación Hogar del Empleado (CIP/FUHEM) y de *Papeles de Cuestiones Internacionales*

ir unida al convencimiento de que el Estado en cuestión amenaza a la paz internacional. Pero de ser así, se abriría una lista de países muy amplia, empezando por Israel. Cambiar un Gobierno mediante la fuerza y dar golpes preventivos son cuestiones muy serias que reavivan pasados coloniales y sientan precedentes muy graves, respectivamente.

En definitiva, el debate promovido por EEUU y seguido por otros Estados y medios periodísticos no giró acerca de la legalidad o ilegalidad de atacar a Irak, sino cuándo, cómo y con qué consecuencias.

Arsenales destruidos

Desde el final de la guerra del Golfo, en 1991, Naciones Unidas impuso a Irak una serie de sanciones relacionadas con prohibirle la exportación masiva de petróleo y le obligó a dismantelar sus armas de destrucción masiva, los depósitos que tuviese y la infraestructura para fabricarlas. Durante una década ha habido una tensa relación entre los inspectores de la misión de la ONU encargados de imponer y verificar el cumplimiento de las resoluciones, el Gobierno iraquí, y los Ejecutivos de EEUU y Gran Bretaña.

Sadam Husein ha tratado de intercambiar las inspecciones por el progresivo levantamiento de las sanciones que no le permiten vender suficiente petróleo. Por otra parte, EEUU y Gran Bretaña han estado durante años bombardeando cada semana algunas áreas de este país. Naciones Unidas también impuso, después de la guerra del Golfo, dos zonas de exclusión aérea a Irak en su territorio.

La ONU encontró grandes dificultades para realizar su trabajo, pero los inspectores han concluido que Irak no tiene armas nucleares y hay pocas posibilidades de que cuente con otro tipo de armamento de destrucción masiva. El International Institute of Strategic Studies (IISS) considera que no posee armas nucleares y que tardaría años en desarrollarlas. Quizá, afirma, tenga almacenados componentes de armas químicas y biológicas que poseía con anterioridad a la guerra del Golfo. Sus misiles para lanzar estas armas, sin embargo, no tienen un alcance superior a 400 kilómetros.¹ Por su parte, la Agencia Internacional para la Energía Atómica considera que Irak ya no cuenta con un programa nuclear.

Algunos países europeos y árabes, además de Naciones Unidas y funcionarios internacionales, consideran que Irak ha cumplido con el programa de dismantelamiento de armas de destrucción masiva y de infraestructura que se le impuso. Además, las restricciones para exportar petróleo le han limitado los recursos para comprar armas y tecnología. Por otra parte, no existen datos de ninguna conexión del Gobierno iraquí con los ataques de septiembre de 2001, ni con la red Al Qaeda, ni con planes terroristas futuros.

El Gobierno de Sadam Husein invitó en agosto a la ONU a regresar y hacer inspecciones de verificación de sus infraestructuras militares. La condición que

¹ "Iraq's arsenal. Perhaps", *The Economist*, 14 de septiembre de 2002, p.42.

Irak exigía era que los funcionarios de la ONU fuesen acompañados de observadores europeos neutrales. En los últimos años Bagdad puso serias dificultades a Naciones Unidas alegando que oficiaba de espía para EEUU o que alguno de los jefes de la misión no era neutral. Pero, esencialmente, quiere que se levanten las sanciones.

En septiembre, Irak aceptó que volviesen los inspectores. EEUU manifestó de inmediato su escepticismo. El Gobierno de Bush y comentaristas creadores de opinión argumentan que tanto las armas como la infraestructura pueden ser ocultadas, y que las verificaciones no sirven para mucho. Hans von Sponeck, el coordinador de ayuda humanitaria de Naciones Unidas para Irak entre 1998 y el 2000, afirma que “el Departamento de Defensa de EEUU y la CIA saben perfectamente que actualmente Irak no es ninguna amenaza para la seguridad en la región, y menos para EEUU”.²

Este funcionario, al igual que Denis Halliday que tuvo el mismo cargo hasta que renunció en protesta por la política de EEUU, considera que toda la infraestructura de armas de destrucción masiva iraquí es inoperante y que en realidad lo que el Gobierno de Bush quiere es que no vaya ninguna misión de observación a Irak porque estropearía sus planes de ataque. El polémico ex jefe de la misión de UNSCOM (United Nations Special Commission), Scott Ritter, declaró en 2001 ante la pregunta de qué peligro representa Irak: “En términos de amenaza militar, absolutamente nada”. Asimismo, explicó que la misión había verificado la destrucción de alrededor del 90 al 95% del material. Y añadió: “Lo que deberíamos tratar es que entren los inspectores en Irak, así podremos saber exactamente qué es lo que pasa ahora en ese país en vez de estar adivinando”.³

La negativa de EEUU a la verificación es un disparo por elevación hacia el sistema multilateral de Naciones Unidas. En el último año y medio, la Casa Blanca se ha negado a firmar los acuerdos de Kyoto sobre medioambiente; ha debilitado el régimen contra la proliferación de armas nucleares y químicas; se negó a firmar un protocolo contra la tortura; atacó a Mary Robinson —la Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos— hasta que ésta ha decidido marcharse (no sin antes denunciar la política de obstrucción a su trabajo de Washington); y no sólo no ha ratificado la firma en el Tribunal Penal Internacional sino que está chantajeando a otros países para que se retiren o serán castigados por Washington.⁴ “Se trata de una visión peligrosamente corta”, escribe Kenneth Roth, director de Human Rights Watch. Es imposible para la superpotencia global rechazar las reglas internacionales para sí misma sin deteriorar esas normas para todos”.⁵

*La negativa
de EEUU a la
verificación
es un disparo
por elevación
hacia el
sistema
multilateral
de Naciones
Unidas*

² Hans von Sponeck, “Go on, Call Bush’s Bluff”, *The Guardian Weekly*, 25 de julio de 2002, p.13.

³ Stephen Zunes, “Seven Fallacies of US Plans to Invade Iraq”, en *Foreign Policy in Focus Policy Report*, agosto 2002. (www.fpiif.org/papers/iraq2_body.html)

⁴ Pierre Cones y Ilivier Lepick, “Desmantelamiento de la arquitectura internacional de seguridad”, *Le monde diplomatique*, ediciones en Francia, España y América Latina.

⁵ Ver artículo de Kenneth Roth, “El rechazo de EEUU al Tribunal Penal Internacional”, en este número de *Papeles de Cuestiones Internacionales*, p. 127.

Ataque preventivo

El presidente Bush Jr. identificó en junio de 2002 a una serie de países en un “eje del mal”, entre ellos Irak. A la vez, el Pentágono y el presidente han definido que la forma de luchar contra el terrorismo será preventiva, es decir, se atacará antes de que éste pueda actuar. En la medida que Washington considera que el régimen de Bagdad tiene armas de destrucción masiva y se especula con que podría atacar a EEUU o a Israel, entonces concluye que conviene aplicarle la estrategia preventiva.

Un ataque denominado “preventivo” violaría las normas internacionales en la medida que no hay una amenaza a la paz internacional como prevé la Carta de la ONU; no sería en respuesta a otro ataque en legítima defensa; ni se trata de una intervención humanitaria. Desde Bagdad no hay ningún indicio, ni posibilidad técnica ni racional (dado que Sadam Husein ha demostrado que su interés principal es mantenerse en el poder), de agredir a EEUU.

El 20 de septiembre, Washington dio a conocer su estrategia de guerra preventiva,⁶ inclusive en caso de duda. La nueva estrategia propone que EEUU sea la mayor potencia militar del mundo, y que no se someta a acuerdos internacionales.⁷ El Gobierno de Bush aceptó, sorpresivamente, en la segunda semana de septiembre canalizar la presión sobre Irak a través de la ONU. Esto se debió, en parte, a las opiniones de diplomáticos y ex funcionarios y políticos conservadores estadounidenses que se pronunciaron en esa dirección. Igualmente, a informes de algunos altos mandos militares, incluyendo a miembros del Comando Mayor Conjunto, que consideran que es mejor seguir con una política de contención que de guerra hacia Irak.⁸ Por último, el primer ministro británico Tony Blair habría influido sobre Bush dado que necesita pasar primero por Naciones Unidas antes de alinear a su país en un ataque a Irak. Pero también ha influido lo que indican las encuestas: el 81% de los estadounidenses están a favor de que se cuente con la ONU y el 86% que se tenga en cuenta a los aliados europeos.⁹

Jugar con todas las cartas

En el papel de la ONU, el Gobierno de EEUU también ha impuesto los términos del debate. Bush pasó de amenazar a Sadam a amenazar a la ONU. Ésta debe, según su versión, lograr que Irak abra las puertas a los inspectores, caso contrario está fracasando en su misión y, entonces, Washington hará el trabajo.

A mitad de septiembre, y en medio de las conmemoraciones por el 11 de septiembre de 2001, Bush habló en Naciones Unidas y dio un ultimátum a la organi-

⁶ *The National Security Strategy of the United States of America*, The White House Washington, septiembre 2002.

⁷ *El País*, 21 de septiembre de 2002.

⁸ “Some Top Military Brass Argue for Status Quo in Irak”, *The Guardian Weekly*, 1 de agosto de 2002, p. 27.

⁹ *The Guardian Weekly*, 5 de septiembre de 2002, p. 2.

zación para que logre que Irak cumpla las Resoluciones y permita la entrada de los inspectores. Pero, en las últimas semanas había planteado que la idea era, no solamente destruir la capacidad militar de Irak, sino “cambiar el régimen”.

Por lo tanto, Bush ha jugado todas las cartas: hacia la ONU adjudicándole un papel que depende, en realidad, de la voluntad de los miembros del Consejo de Seguridad, en particular Washington y Londres. Si el secretario general Kofi Annan logra un acuerdo con Sadam Husein para que entren los inspectores a cambio de ir eliminando las sanciones, puede ocurrir que EEUU y Gran Bretaña se nieguen. Si, además, mientras Annan negocia, el presidente Bush afirma que quiere “cambiar el régimen”, entonces Irak no aceptará ninguna negociación porque carecería de sentido.

Hacia los europeos, por otro lado, Bush les presiona para actuar más allá de la ONU si fuese preciso. Los Gobiernos británico y español han aceptado estos términos amenazantes. El presidente José María Aznar fue más allá y declaró el 10 de septiembre que le parecía “deseable” que se lograra el apoyo de la ONU hacia Irak, pero no “imprescindible”.¹⁰

La presión hacia Europa está siendo ejercida también por intelectuales estadounidenses que acusan al viejo continente de debilidad, de falta de compromiso y de dejar solo a EEUU en un momento en el que ha cambiado el orden internacional y la lucha contra el “eje del mal” es lo imprescindible.¹¹ Estos intelectuales le acusan de no ver los cambios que se han producido después del 11 de septiembre y de querer vivir bajo la protección militar de Washington, o sencillamente de ser un continente cobarde. Ante esta falta de colaboración, EEUU se guarda la opción de actuar en solitario.

La resolución que tome el Consejo de Seguridad de la ONU es importante porque reconoce que las decisiones sobre el uso de la fuerza entre Estados son de su competencia, pero puede ser fuertemente condicionada por Washington. Por un lado, Rusia podría aceptar una resolución que abra la vía para atacar Irak si EEUU le garantiza que puede actuar con mano libre en Chechenia, algo que el presidente Vladimir Putin ya ha avisado en una carta a la ONU indicando que podría dar golpes preventivos a los grupos chechenos.¹² Igualmente, China obtendría garantías similares para tratar con sus minorías y eventuales movimientos secesionistas. Francia se aferraría a que si hay una resolución de la ONU y una falta de cumplimiento, entonces, desgraciadamente, habrá que atacar. Gran Bretaña ya está con Bush. En definitiva, EEUU podría seguir con su línea, reafirmada en el último año, de debilitar el Derecho Internacional y el sistema multilateral y, a la vez, utilizarlo y manipularlo cuando le resulte conveniente.

*Intelectuales
estadouniden-
ses acusan a
Europa de
debilidad, de
falta de
compromiso y
de dejar solo
a EEUU en
un momento
en el que la
lucha contra
el “eje del
mal” es lo
imprescindi-
ble*

¹⁰ *El País*, 11 de septiembre de 2002, p. 3.

¹¹ Ver, por ejemplo, Francis Fukuyama, “Occidente puede resquebrajarse”, *El País*, 17 de agosto de 2002; Robert Kagan, “Power and Weakness”, *Policy Review*, junio 2002; Michael Ignatieff, “The Golden Section: Terror, Rights and Treason”, *Index on Censorship*, febrero de 2002.

¹² “Putin Sees a Parallel in Warning to Georgia”, *International Herald Tribune*, 13 de septiembre de 2002, p.1

Una guerra, con mayor o menor implicación de fuerzas de EEUU y Gran Bretaña, puede costar vidas estadounidenses e iraquíes, quizá provocar la ruptura de Irak en tres (entre la parte suní, la shií y la kurda), un gran flujo de refugiados y una respuesta terrorista imprevisible. Y si los kurdos en el sur de Irak aprovechan para secesionarse y declaran su Estado, entonces Turquía quizá reaccionase militarmente.

Una duda es si el afán por la guerra no responde a la necesidad de acceder al petróleo. Irak tiene grandes reservas y una teoría es que Washington teme que las relaciones con Arabia Saudí se deterioren en el futuro y que sea mejor contar con un régimen amistoso en Bagdad. Pero es una cadena de hipótesis que deja sin resolver quién podría sustituir a Sadam Husein y evita lo más evidente: la necesidad que este último tiene de exportar todo el petróleo posible pero que ahora no puede hacerlo por las sanciones.¹³

Por otra parte, no resulta evidente que la guerra vaya a traer ventajas económicas para la economía estadounidense. La industria armamentista está en un buen momento gracias al gran aumento del presupuesto militar que realizó el Gobierno hace pocos meses. Pero otros sectores no se verían reactivados. Una guerra contra Irak no es sinónimo de inversiones estatales y más empleo sino que, por el contrario, crearía un clima de incertidumbre igual o mayor al del 11 de septiembre de 2001.

Ante al belicismo de una parte del Gobierno de Bush, algunos conservadores consideran que Sadam Husein no es una amenaza inmediata para EEUU, que una guerra contra Irak aislaría a Washington de sus aliados europeos y que desestabilizaría más Oriente Medio. Entre las voces críticas se encuentra el exconsejero de Seguridad Henry Kissinger y el ex asesor de seguridad nacional del ex presidente George Bush (padre) y artífice de la coalición contra Irak en 1991, Brent Scowcroft. Éste piensa que atacar Irak destruirá la coalición antiterrorista post 11 de septiembre. Y el senador republicano Chuck Hagel cree que dar un golpe preventivo en Irak alentará a otros actores a seguir la misma línea: India podría atacar Pakistán e Israel expulsar a la población palestina de Gaza y Cisjordania.

El Gobierno alemán lidera la posición europea de rechazo a la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Jochka Fischer, considera que una guerra contra Irak supone un compromiso posterior de décadas con Oriente Medio y duda que Washington lo tenga. En ese caso, Europa pagaría la factura y las consecuencias. Pese a estar en desacuerdo con Fischer, el senador estadounidense Joseph Biden, líder del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, declaró luego de escuchar los testimonios de expertos en favor y en contra de la guerra: "Sería una tragedia si quitáramos de Irak a un tirano, pero dejásemos a toda la región en el caos".

23 de septiembre de 2002

¹³ Anthony Sampson, "Irak War Fever is Being Fuelled by West's Craving for Oil", *The Guardian Weekly*, 15 de agosto de 2002, p. 6.

PHYLLIS BENNIS

La guerra contra Irak será ilegal y equivocada

La investigadora Phyllis Bennis, experta en política exterior y Oriente Medio, fue propuesta, pero no citada, para declarar en las recientes sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense sobre Irak, celebradas del 31 de julio al 1 de agosto de 2002. Sin embargo, el senador Paul Wellstone presentó su declaración escrita como parte de las actas oficiales de las sesiones. Este es el documento de la autora destinado a estas sesiones.

Nelson Mandela tenía razón cuando dijo que atacar Irak sería “un desastre”. Una invasión estadounidense de Irak pondría en peligro las vidas de los soldados estadounidenses y mataría inevitablemente a miles de civiles iraquíes. No es extraño, pues, que muchos oficiales del ejército de EEUU, incluidos algunos miembros de la Junta del Estado Mayor, se opongan públicamente a una nueva guerra contra Irak. Un ataque de estas características violaría el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y nos aislaría de nuestros amigos y aliados en todo el mundo. Una invasión impediría el futuro regreso de los inspectores de armas de la ONU y costaría miles de millones de dólares que hacen mucha falta en el país. Y en última instancia, ésta no garantizará la estabilidad, no digamos la democracia, ni en Irak ni en el resto de la volátil región de Oriente Medio, y hará que los civiles estadounidenses corran un mayor riesgo de ser víctimas del odio y quizá de atentados terroristas.

Presuntos vínculos con el terrorismo

Ya es patente que, pese a las exhaustivas investigaciones, no hay ni una prueba de la participación de Irak en los atentados terroristas del 11 de septiembre. La teoría más popular, la de la colaboración desde Praga entre uno de los terroristas del 11-S y un funcionario iraquí, ha quedado ya descartada. Hace dos semanas, el *Prague*

Phyllis Bennis es del Institute for Policy Studies (Washington D.C.) y del Transnational Institute (Amsterdam). Coautora del *Anuario CIP 2002. De Nueva York a Kabul*, Icaria/Fundación Hogar del Empleado, Barcelona, 2002

Traducción: Berna Wang

Post citó al director general de la Oficina de Relaciones Exteriores e Información checa (UZSI), Frantisek Bublan, que negó la existencia de la tan aireada entrevista entre Mohamed Atta, uno de los secuestradores aéreos del 11-S, y un agente iraquí.

Lo que es más significativo: en general, el brutal trato que da el régimen iraquí a su propia población no se ha extendido a atentados terroristas internacionales. La propia recopilación de actividades terroristas realizada por el Departamento de Estado en su informe sobre el terrorismo en el mundo, *2001 Patterns of Global Terrorism*, publicado en mayo de 2002, no documenta un solo acto grave de terrorismo internacional cometido por Irak. Casi todas las referencias son a declaraciones políticas realizadas, no hechas o al cobijo de organizaciones militantes casi extintas.

Nos dicen que debemos ir a la guerra preventiva contra Irak porque Bagdad podría, en el futuro, construir un arma peligrosa y podría, en el futuro, entregar esa arma a algún grupo terrorista desconocido —tal vez a Osama Bin Laden— que podría, en el futuro, usarla contra EEUU. El problema de este análisis, aparte de que los ataques preventivos son sencillamente ilegales conforme al Derecho Internacional, es que pasa por alto el muy conocido antagonismo histórico entre Irak y Bin Laden. Según el *New York Times*, “poco después de que las fuerzas iraquíes invadieran Kuwait en 1990, Osama Bin Laden se puso en contacto con el príncipe Sultan Bin Abdelaziz Al Saud, ministro de Defensa saudí, con una propuesta poco habitual [...] Pertrechado de mapas y numerosos diagramas, Bin Laden le dijo al príncipe Sultan que el reino podría evitar la humillación de permitir que un ejército de infieles estadounidenses entrara en él para expulsar a Irak de Kuwait. Podría dirigir la lucha él mismo, dijo, encabezando a un grupo de ex muyahidín que, según afirmó, podría tener 100.000 hombres”. Aun cuando la afirmación de Bin Laden de que podía proporcionar esas tropas fuera sin duda falsa, la hostilidad de éste hacia un Irak despiadadamente laico seguía siendo evidente. Y no hay pruebas de que eso haya cambiado.

Irónicamente, un ataque contra Irak aumentaría el peligro para los ciudadanos estadounidenses en todo Oriente Medio y quizá en otros lugares, pues habría otra generación de jóvenes iraquíes que identificaría a los estadounidenses sólo como los pilotos de cazabombarderos y las tropas que ocupan su país. Aunque hoy los ciudadanos de EEUU no tienen problemas con la gente corriente en las calles de Bagdad u otros lugares de Irak, como pude comprobar durante la visita que hice al país junto con cinco funcionarios del Congreso en agosto de 1999, es probable que esa situación cambie tras un ataque de EEUU a Irak. En otros países de Oriente Medio, esa ira que ya es palpable hacia las amenazas estadounidenses aumentaría de forma espectacular y se convertiría en una nueva herramienta de captación de elementos extremistas dispuestos a perjudicar a los intereses o a los ciudadanos de EEUU, para quienes viajar al extranjero se convertiría en algo mucho más peligroso.

Las víctimas mortales

Aunque los cálculos de las bajas que se producirían entre los militares estadounidenses no son públicos, podemos estar seguros de que serán mucho más nume-

rosas que en la actual guerra de Afganistán. Sí sabemos, por los cálculos del Pentágono de hace dos años, el número probable de muertes de civiles iraquíes: alrededor de 10.000. Y la destrucción de infraestructura civil como servicios de agua, electricidad y comunicaciones, provocaría la muerte de decenas, quizá de centenares de miles de civiles más, especialmente niños, ancianos y otras personas de los sectores más vulnerables. Podemos prever que los ataques contra estos objetivos se justificarían alegando su “doble uso”.

Si observamos la última guerra de EEUU con Irak, sabemos que el Pentágono planeó y ejecutó sabiendo y documentando su probable impacto sobre los civiles. En un caso, los planificadores del Pentágono previeron que los ataques a la infraestructura civil iraquí causarían “un aumento de la incidencia de enfermedades [que] serán atribuibles a la degradación de la medicina preventiva normal, el alcantarillado, la purificación y distribución del agua, la electricidad, y a la disminución de la capacidad para controlar brotes de enfermedades [...]”. El documento de la Agencia de Inteligencia de Defensa, *Disease Information – Subject: Effects of Bombing on Disease Occurrence in Baghdad*,¹ tiene fecha del 22 de enero de 1991, apenas seis días después del comienzo de la guerra. Especificaba los brotes de enfermedades probables e incluía: “diarrea aguda”, provocada por bacterias como la escherichia coli, la shigella y la salmonella, o por protozoos como la giardia, que afectarán “especialmente a los niños”, o por rotavirus, que también afectarían “especialmente a los niños”. Y aun así, continuó el bombardeo de sistemas de tratamiento de agua. De hecho, según cifras de Unicef, cientos de miles de iraquíes, “especialmente niños”, murieron a consecuencia de la falta de agua potable.

El último plan militar para invadir Irak que se ha filtrado, el denominado plan “dentro-fuera”, basado en un contingente relativamente reducido de tropas terrestres estadounidenses que dependen en gran medida de los ataques aéreos, se centraría primero y fundamentalmente en Bagdad. Se dice que la capital iraquí está rodeada por tropas de elite de Sadam Husein y llena de baterías antiaéreas. Lo que nunca se menciona en el informe es el inconveniente de que Bagdad es también una ciudad populosa que tiene entre cuatro y cinco millones de habitantes. Un bombardeo aéreo intenso causaría una catástrofe humana equivalente a un bombardeo aéreo intenso de Los Ángeles.

Un bombardeo intenso de Bagdad causaría una catástrofe humana equivalente a un bombardeo aéreo intenso de Los Ángeles

EEUU y nuestros aliados

No hay apoyo internacional, ni a nivel gubernamental ni público, a un ataque de EEUU contra Irak. Nuestros aliados más próximos en Europa, en Canadá y en otros lugares, han dejado clara su oposición a una invasión militar. Aunque reconocen que el régimen iraquí es brutal y antidemocrático, no respaldan un ataque militar preventivo unilateral como respuesta adecuada a ese régimen. Sí, es cierto que si EEUU anuncia que va a la guerra, la mayoría de estos Gobiernos iría detrás a regañadientes. Cuando el presidente Bush repite su mantra de que “o

¹ Sitio web Gulfink, del Pentágono.

están con nosotros o con los terroristas”, no hay un solo Gobierno en el mundo dispuesto a mantener su rebeldía. Pero una política exterior basada en la coacción internacional y en el miedo de nuestros aliados a las represalias por incumplimiento, no es una política que proteja a los estadounidenses y nuestra posición en el mundo.

En la región de Oriente Medio, sólo Israel apoya los preparativos estadounidenses de una guerra contra Irak. Los países árabes, incluidos nuestros aliados más cercanos, han manifestado de forma inequívoca su oposición a una invasión de Irak. Incluso Kuwait, que fue objetivo de la ocupación militar iraquí y aparentemente es el país más vulnerable a las amenazas iraquíes, avanza hacia la normalización de sus relaciones con Bagdad. El acercamiento entre Irak y Kuwait patrocinado por la Liga Árabe en la Cumbre Árabe de marzo de 2002 está ya en marcha, incluidas iniciativas largamente esperadas como la devolución de los archivos nacionales kuwaitíes. Irak ya ha reparado sus relaciones con todos los países árabes. Turquía se ha negado a anunciar públicamente su acuerdo de permitir el uso de sus bases aéreas, y Jordania y otros países árabes han dejado claro su ruego urgente para que EEUU renuncie a un ataque militar contra Irak.

En este caso, tampoco hay duda de que ni un solo Gobierno de la región se opondría en última instancia a conceder a EEUU derechos para usar las bases, el espacio aéreo, derechos de sobrevuelo o el acceso a cualquier otra instalación. La pregunta a la que hemos de responder, por tanto, no es si nuestros aliados accederán en última instancia a nuestros deseos, sino el precio que estamos dispuestos a exigir a nuestros aliados. Prácticamente todos los Gobiernos árabes, especialmente los más vinculados a EEUU (Jordania y Egipto, quizá incluso Arabia Saudí) sufrirán un espectacular aumento de la oposición popular. La crisis de legitimidad que ya padecen estos regímenes antidemocráticos, represivos y no representativos, estas monarquías y estas democracias con presidentes vitalicios, se verá gravemente intensificada por una invasión estadounidense de Irak. Sin duda, traerá una inestabilidad que afectará a toda la región, y puede que algunos de estos Gobiernos tengan incluso que afrontar la posibilidad de ser derrocados.

EEUU y el Derecho Internacional

Afirmamos que somos una nación de leyes, pero estamos dispuestos con demasiada frecuencia a dejar de lado los requisitos del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas cuyo debido cumplimiento exigimos a otras naciones.

En lo que se refiere a la política hacia Irak, EEUU margina sistemáticamente el papel central que deberían desempeñar Naciones Unidas. Esta trayectoria, cada vez más unilateralista, es una de las principales causas del creciente antagonismo internacional hacia EEUU. Al imponer su voluntad sobre el Consejo de Seguridad —insistiendo en la continuación de las sanciones económicas cuando prácticamente todos los demás países desean levantarlas, anunciando su intención de ignorar a la ONU al decidir si ir a la guerra contra Irak—, EEUU nos aísla

de nuestros aliados, suscita el antagonismo de nuestros amigos y hace que nuestra nación sea distinta de los sistemas legales internacionales que gobiernan al resto del mundo. Esto no ayuda a nuestros intereses de seguridad a largo plazo, sino que los debilita.

El Derecho Internacional no permite los ataques militares preventivos, salvo que sea para prevenir un ataque inminente. No tenemos derecho —ningún país lo tiene— de lanzar una guerra contra otro país que no nos ha atacado. Si el Pentágono hubiera podido enviar un caza para abatir el segundo avión que chocó contra el World Trade Center en septiembre del año pasado, habría hecho un uso legal de la defensa propia preventiva. Un ataque contra Irak —que no tiene capacidad para atacar a EEUU y, desde hace diez o más años, no ha mostrado ninguna intención, plan o esfuerzo específicos para hacerlo— vulnera el Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

La Carta, en su artículo 51, expone los términos en los que un Estado Miembro de Naciones Unidas podrá usar la fuerza en defensa propia, al reconocer el “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.” La Carta no permite el uso de la fuerza militar cuando no se ha producido un ataque armado.

A algunos portavoces del Gobierno estadounidense les gusta mucho esta frase: “la Carta de la ONU no es un pacto suicida”. Otros insisten en recordarnos que Irak (y otras naciones) violan habitualmente la Carta. Ambas afirmaciones son verdad. Pero EEUU no ha sido atacado por Irak, y no hay ni una prueba de que Irak esté a punto de tener la capacidad para realizar un ataque de esas características. EEUU es la potencia internacional más fuerte —en términos de alcance militar mundial y de poder económico, cultural, diplomático y político— que ha existido en toda la historia. Si EEUU no reconoce la Carta de la ONU y el Derecho Internacional como los cimientos de la sociedad mundial, ¿cómo podemos esperar que otros lo hagan?

Cómo aplicar con seriedad las sanciones militares

Negar el acceso de Irak a las armas no es suficiente, ni se puede mantener mientras Irak esté rodeado de algunos de los países más armados del mundo. Un alto inmediato a los envíos de armas dirigidos a todos los países de la región sería un paso importante para contener las amenazas militares.

Debemos ampliar nuestra forma de aplicar las sanciones militares que se definen en la Resolución 687 de la ONU. Hay que aplicar esas sanciones militares contra Irak de forma más estricta, mediante su ampliación a un sistema de sanciones militares regionales para reducir la inestabilidad de una región ya saturada de armas. El artículo 14 de la resolución 687 reconoce que el desarme de Irak debe considerarse un paso hacia “la meta de establecer en Oriente Medio una zona libre de armas de destrucción masiva y todos los misiles para su lanzamiento, y el objetivo de una prohibición mundial de las armas químicas”.

Si EEUU se niega a respetar el Derecho Internacional, ¿por qué se sorprende cuando se niega a hacerlo un Gobierno asediado y tiránico?

¿Y las negociaciones?

Nos dicen que debemos atacar a Irak preventivamente para que nunca pueda obtener armas nucleares. Aunque sabemos por los inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) que el programa nuclear de Irak quedó destruido a finales de 1998, no sabemos qué ha ocurrido a partir de entonces. Sí conocemos, sin embargo, que Irak no tiene acceso a material fisible, sin el cual un programa nuclear es una cáscara vacía. Y sabemos dónde está el material fisible. La protección de todo el material nuclear, incluido el restablecimiento de la financiación para la protección del material nuclear ruso, debe seguir siendo una prioridad.

Hay que señalar que las autoridades de EEUU están amenazando con una guerra contra Irak, un país del que se sabe que no posee armas nucleares. Al mismo tiempo, el Gobierno prosigue las correspondientes negociaciones con Corea del Norte, que sí tiene algo mucho más próximo a la capacidad para fabricar armas nucleares. Respaldo por las inspecciones de la OIEA, el modelo de negociaciones e inspecciones es exactamente el que debería proponer EEUU para Irak.

Inspecciones

No ha habido información consistente sobre las armas de destrucción masiva de Irak desde que los inspectores de armas de la Comisión Especial de Naciones Unidas (UNSCOM) y la OIEA salieron de Irak en diciembre de 1998, antes de la operación estadounidense Zorro del Desierto. Con anterioridad a su salida, el último informe de los inspectores (de noviembre de 1998) decía que aunque el incumplimiento iraquí había obstaculizado la realización de algunas inspecciones, "la mayoría de las inspecciones de instalaciones y sedes conforme el actual sistema de supervisión se llevaron a cabo con la cooperación de Irak". El informe de la OIEA era inequívoco en el sentido de que Irak ya no tenía un programa nuclear viable. El de la UNSCOM era menos concluyente, pero unos meses antes, en marzo de 1998, el jefe de la Comisión, Richard Butler, había declarado que su equipo estaba convencido de que ya no había ninguna capacidad nuclear ni misiles de largo alcance en Irak, y que estaban "muy cerca" de completar las fases química y biológica.

Desde entonces, no ha habido informes verificables sobre los programas de armas de destrucción masiva de Irak. Es importante que los inspectores vuelvan a Irak, pero las amenazas de EEUU lo han hecho prácticamente imposible al establecer un "incentivo negativo". Si Bagdad cree que habrá un ataque militar estadounidense, y que se mantendrán unas sanciones económicas de consecuencias catastróficas, con independencia de si acata las resoluciones de la ONU sobre inspecciones, no tiene ninguna razón para cumplir sus obligaciones. Si EEUU se niega a respetar el Derecho Internacional, ¿por qué se sorprende cuando se niega a hacerlo un Gobierno asediado y tiránico?

Durante los años ochenta, Bagdad recibió de EEUU gérmenes de alta calidad para fabricar ántrax maligno, botulismo, escherichia coli y multitud de otras enfer-

medades mortales (las decisiones del Departamento de Comercio de autorizar esos envíos, incluso después de las revelaciones sobre el uso de armas químicas ilegales por Irak en 1988, están documentadas en las sesiones de 1994 de la Subcomisión sobre Banca). Sin duda, es posible que sigan existiendo restos de programas antiguos de armas biológicas y químicas de Irak, pero no hay pruebas de que éste tenga la capacidad o misiles para usarlas contra EEUU o sus aliados. La idea de que EEUU iría a la guerra contra Irak por la existencia de diminutas cantidades de material biológico, insuficientes para ser utilizadas en misiles u otras armas estratégicas, y que proporcionó el propio EEUU durante los años de su alianza con Irak, en la década de los ochenta, es sencillamente inaceptable.

¿Y la oposición?

El general Zinni ha declarado que un ataque contra Irak dirigido por la oposición sería como convertir el país en una “Bahía de Cochinos”. Nada ha cambiado desde entonces. Casi ningún grupo de oposición en el exilio cuenta con una base creíble dentro del país. No hay un equivalente iraquí a la Alianza del Norte en Afganistán que pueda actuar como tropas terrestres de refuerzo para una fuerza estadounidense. Algunos de los líderes en el exilio más próximos a EEUU están buscados por la Organización Internacional de Policía (Interpol), por delitos cometidos en Jordania y otros países. La afirmación de que representan un movimiento democrático es, sencillamente, insostenible.

¿Qué ocurrirá después de un “cambio de régimen”?

No existe una oposición democrática preparada para asumir el poder. La sustitución del régimen actual por otro prácticamente igual, salvo por el hombre que esté en su cúspide, es mucho menos probable que la creación de un Gobierno iraquí autóctono, democrático y respaldado por el pueblo. En febrero de 2002, la revista *Newsweek* publicó los perfiles de los cinco líderes que, se dice, están en la lista de candidatos de Washington para sustituir a Sadam Husein. Aunque el Ejecutivo no ha dado a conocer su propia lista (hay que señalar que no desmintió la de *Newsweek*), no hay duda de que es un ejemplo de lo que tiene EEUU en mente. Los cinco fueron oficiales de alta graduación del ejército iraquí hasta mediados de los años noventa. Los cinco están vinculados al uso de armas químicas por el ejército; al menos uno de ellos, el general Al Shammari, lo reconoce. Quizá no debería sorprendernos que Washington opte por unos dirigentes militares que podrían ser culpables de crímenes de guerra; el general Al Shammari declaró a *Newsweek* que había evaluado el efecto de sus armas químicas lanzadas mediante obuses basándose en “información de satélites estadounidenses”.

Pero, hay que cuestionar la legitimidad de una guerra contra un país para sustituir un líder militar brutal por otro líder militar brutal, promoviendo conscientemente como dirigentes del “Irak post Sadam” a un grupo de generales que aparentemente han cometido atroces crímenes de guerra.

Y con independencia de a quién instalen en Bagdad las victoriosas tropas estadounidenses, no cabe duda de que habría una ocupación larga y probablemente sangrienta. El precio sería elevado; los iraquíes saben mejor que nosotros cómo su Gobierno les viene negando sistemáticamente los derechos civiles y políticos. Pero nos consideran responsables de despojarles de sus derechos económicos y sociales —el derecho a alimentos suficientes, al agua potable, a la educación, a la atención médica— que en total son el otro extremo de la ecuación de los derechos humanos. Las sanciones económicas han asolado la sociedad iraquí y, entre otras consecuencias, han convertido a EEUU en responsable de la miseria que padece la mayoría de la población. Doce años después, quienes desde Washington creen que los iraquíes aceptan el mantra popular en los círculos de poder estadounidenses de que “las sanciones no son responsables, Sadam Husein es el responsable” del hambre y las privaciones en Irak, están confundiendo sus deseos con la realidad. La idea de que todo el mundo en Irak recibirá con los brazos abiertos como “liberadores” a quienes la mayoría de los iraquíes consideran responsables de doce años de sanciones atroces, es una ingenuidad. Basar una estrategia militar en esa especulación ilusoria es muy peligroso; especialmente para las propias tropas estadounidenses.

JUAN PABLO PRADO LALLANDE

Consenso de Monterrey: ¿avance o retroceso?

La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada del 18 al 22 de marzo de 2002 en Monterrey (México), tuvo como principal propósito promover la generación y difusión del financiamiento al desarrollo para cumplir las metas sobre desarrollo convenidas por Naciones Unidas durante la década de 1990. Los objetivos de la primera cumbre mundial del siglo XXI se resumen en la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico sostenido y la promoción de un sistema económico mundial basado en la equidad. La justificación para realizar esta Conferencia descansa en que la pobreza extrema a escala global, según la ONU, lejos de reducirse, continúa aumentando a un ritmo de 25 millones de personas al año.¹

La financiación internacional al desarrollo de carácter público —Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD)—, destinada a reforzar las capacidades económicas y productivas nacionales, se ha reducido de manera preocupante en la última década. Las razones de este hecho descansan en la percepción de la mayoría de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) respecto a que el Estado y sus diversos instrumentos de promoción al desarrollo, tanto internos como externos, al no ser lo suficientemente eficaces, deben disminuir su actuación permitiendo que las fuerzas del mercado difundan, por sí mismas, elementos de bienestar social entre la población mundial.

Esta tendencia se hace evidente en el aumento constante de los flujos de inversiones extranjeras directas (IED) frente a la disminución de la AOD durante la

Juan Pablo Prado Lallande es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Master en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.
jplallande@hotmail.com

¹ Departamento de Información Pública de Naciones Unidas, “La pobreza y el desarrollo: balance general”, *Primer decenio para la erradicación de la pobreza 1997-2000*, PNUD, Nueva York, 2000, p. 4.

década de 1990.² Como se aprecia en el siguiente cuadro, durante el periodo 1990-2000 las IED pasaron de 24.000 a 196 mil millones de dólares, mientras que, de 1992 a 2000, el monto de AOD decreció 7.100 millones de dólares.

Cuadro 1
Relación entre los flujos de AOD e IED hacia los países en desarrollo durante la década de los noventa (en miles de millones de dólares)³

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
AOD	52,9	56,6	60,8	55,5	59,6	59,1	55,8	47,9	50,1	52,1	53,7
IED	24,1	35,3	47,5	66	88,8	105	130	170	170,9	192	196

En los periodos comprendidos entre 1986-1990 y 1996-1999 los flujos privados se multiplicaron por seis en los países en desarrollo. Si bien las IED que reciben los 49 países menos desarrollados (PMD) han aumentado en la misma proporción, —aunque sus montos siguen siendo mínimos—, la AOD neta hacia dichos Estados ha disminuido considerablemente durante ese mismo lapso de tiempo.

Cuadro 2
Flujos de IED y AOD en miles de millones de dólares en promedios anuales⁴

IED mundial	1986-1990	1991-1995	1996-1999
Países desarrollados	133	149	459
Países en desarrollo	27,9	79,3	182
PMD	0,6	1,8	3,6
AOD a PMD	3,9	16,6	12,7

² Desde mediados de la década de 1950 hasta finales de la década de 1980, la AOD de los miembros del CAD fue mayor que las IED generadas por las empresas transnacionales al mundo en desarrollo. La principal característica de la relación entre la AOD y las IED durante este tiempo consiste en que la primera fue difundida en mayor proporción a los países menos desarrollados, mientras que las segundas, al igual que hoy en día, se dirigieron predominantemente hacia las economías en desarrollo más avanzadas. David H. Lumsdaine, *Moral Vision in International Politics. The Foreign Aide Regime 1949-1989*, Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 36.

³ Fuente: Elaboración propia, con base en Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) - Development Assistance Committee (DAC), "ODA Steady in 2000; Other Flows decline", <http://www.oecd.org>, y The World Bank, *Global Development Finance. Analysis and Summary. Tables 2000*, World Bank, Washington D.C., 2000, p. 36.

⁴ Fuente: Fondo Monetario Internacional, *Perspectivas de la Economía Mundial*, FMI, Washington D.C., octubre 2001, p. 174, tomado de UNCTAD, *FDI in Least Development Countries at a Glance*, UNCTAD, Washington D. C, abril 2001, p. 8.

Ante la globalización y la liberalización de los capitales privados, la AOD, por su carácter público, ha perdido terreno e importancia en el plano de la financiación internacional al desarrollo. Mientras tanto, durante el mismo plazo de tiempo, las inversiones privadas han aumentado de manera considerable erigiéndose como el principal flujo que promueve, en principio, la correcta financiación al desarrollo de los países más necesitados.

Sin embargo, las IED a escala mundial solamente son destinadas en un 12% a los países en desarrollo, mientras que el 78% restante se dirige a los países desarrollados.⁵ Ello muestra que el presupuesto en este rubro se destina predominantemente a reforzar las economías centrales, mientras que menos de una tercera parte de esos capitales se invierten donde más se requiere.⁶

Los PMD perciben únicamente el 0,6% de IED globales,⁷ lo que sustenta que el sistema actual de financiación al desarrollo no corresponde con las grandes necesidades financieras de estos países; máxime si los montos de AOD destinados a éstos —el 22% del total—, considerados como complemento de otras fuentes externas de financiación, han disminuido de manera importante en los últimos años.⁸

En opinión del analista Carlos Carballo, “se plantean sobre este modelo (de inversión privada) una serie de dudas, en especial sobre la bondad de las IED y si su acción resulta generadora de riqueza o depredadora de ésta para el país de acogida de la inversión y sobre su capacidad para generar un desarrollo coherente y equilibrado o, por lo contrario, desequilibrador y marginal (...) La experiencia indica unívocamente que la IED en los países en desarrollo responde a criterios exclusivamente económicos y cuyo parámetro básico es la rentabilidad directa e indirecta”.⁹

Por su parte, el modelo actual de AOD, como instrumento complementario a dichas fuentes privadas, debido a su poca eficacia para combatir la pobreza, así como a su exigua reestructuración desde el inicio de su instauración hace cinco décadas, ha generado diversos debates en torno a su vigencia actual.

El propio Banco Mundial ha expresado sus críticas sobre la definición y eficiencia de la AOD señalando que solamente debe considerarse como “ayuda” el porcentaje de los créditos asignados a terceros países como “donación”. Bajo estas consideraciones, la AOD entre 1990 y 1994 hubiera sido, en realidad, entre el 35% y el 42% menor de sus montos oficiales.¹⁰

*El sistema
actual de
financiación
al desarrollo
no corres-
ponde con las
grandes
necesidades
financieras de
los países
menos
desarrollados*

⁵ Carlos Carballo, *et. al.*, “La inversión extranjera directa como elemento exógeno de desarrollo”, *Revista Española de Desarrollo y Cooperación*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), N° 7, Madrid, otoño/invierno 2000, p. 33.

⁶ El 75% de los 192 mil millones de las IED en los países en desarrollo o en transición son destinadas solamente a 15 países: China, Brasil, México, Argentina, Polonia, Chile, Indonesia, Tailandia, Rusia, Colombia, Hungría, Venezuela, Corea del Sur y Perú. The World Bank, *op. cit.*, p. 36.

⁷ Fondo Monetario Internacional, *op. cit.*, p. 174.

⁸ OECD-DAC, *Development Co-operation. DAC 2000 Report*, OECD-DAC, París, 2001, p. 321.

⁹ Carballo, *et. al.*, *op. cit.* pp. 30-31.

¹⁰ Jens Marthens, *Rethinking ODA.. Towards a renewal of Official Development Assistance*, Global Policy Forum, Bonn, 2001, p. 8.

El Consenso de Monterrey

El Documento Final de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (CIFD), denominado Consenso de Monterrey,¹¹ previamente negociado, fue aprobado el 22 de marzo de 2002 por los más de 180 Gobiernos participantes. El Consenso inicia su preámbulo señalando que los jefes de Estado y de Gobierno, habiendo resuelto hacer frente a los problemas de la financiación al desarrollo en el mundo, establecen como meta fundamental “la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico sostenido y sostenible, así como la promoción de un sistema económico mundial basado en la equidad.” A pesar de ello, el propio Consenso señala que “según las estimaciones actuales, disminuirá marcadamente el volumen de recursos disponibles para alcanzar las metas de desarrollo convenidas recientemente, incluso las fijadas en la Declaración del Milenio.”

El Documento establece las principales medidas que la sociedad internacional deberá alcanzar para lograr los citados objetivos, entre las que destacan:

- Responsabilidades nacionales: se asume acertadamente que la primera responsabilidad de los Gobiernos participantes consiste en crear las precondiciones internas necesarias para generar y movilizar ahorro interno, tanto público como privado, con base en la práctica del buen gobierno. Estas precondiciones consisten en instrumentar políticas económicas racionales; constituir instituciones democráticas sólidas; promover la libertad, paz, seguridad, estabilidad interna; respetar los derechos humanos, el Estado de derecho, la igualdad de género; y, sobre todo, ejecutar políticas nacionales con orientación de mercado.¹²
- Responsabilidades internacionales: la promoción de las IED y del comercio internacional en los países en desarrollo.

La CIFD cataloga a las IED en su dinámica actual como instrumentos eficientes de fomento al desarrollo, ya que contribuyen a “financiar el crecimiento económico sostenido a largo plazo..(así como por) ...transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa y, en última instancia, erradicar la pobreza.”

Para promover estas inversiones, el Consenso de Monterrey ha enfatizado en la necesidad de que los Estados receptores de flujos externos generen *in situ* las citadas precondiciones necesarias para facilitar las corrientes de inversiones internacionales.

¹¹ Naciones Unidas, *Documento Final de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo*, Monterrey, México, 18-22 de marzo, 2002. Este Documento se encuentra en <http://www.un.org/esa/ffd/>

¹² Las condiciones estructurales de pobreza de varios países no pueden identificarse exclusivamente en factores externos, como el sistema financiero internacional. La inestabilidad política, la corrupción o el déficit en el Estado de Derecho en los países en desarrollo, constituyen elementos de carácter interno que han incidido de manera fundamental en este sentido.

Otros aspectos del Consenso de Monterrey

Comercio internacional

El apartado del Documento sobre comercio internacional establece que “el comercio es en muchos casos la fuente externa más importante de financiación al desarrollo.” Para promover esta actividad se señala que debe incentivarse un sistema comercial multilateral abierto, no discriminatorio y equitativo, capaz de liberalizar el comercio mundial. El Consenso de Monterrey no hace ninguna referencia sobre la consideración relativa a que históricamente, y en muchos casos, ha sido el propio comercio internacional el elemento generador de dependencia económica y subdesarrollo en que muchos países se encuentran actualmente.

Otro aspecto relevante parte de las consideraciones especiales que interesan a los países en desarrollo. Estas cuestiones, señala el Consenso, son las barreras comerciales, los subsidios (especialmente en el sector de la agricultura), la aplicación indebida del *anti-dumping*, las barreos técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras.

El Consenso apunta que los países firmantes se comprometen a crear un mejor sistema de comercio mundial, promoviendo acuerdos regionales y subregionales y de zonas de libre comercio.

Varios planteamientos refutan las afirmaciones sobre la efectividad del comercio internacional para promover mejores niveles de bienestar social, especialmente en los países menos favorecidos. Por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) en su reciente Informe sobre Comercio y Desarrollo, contradice las citadas aseveraciones del Consenso de Monterrey en referencia a la relación directa entre comercio mundial y combate a la pobreza, al establecer que en los últimos 20 años se ha mostrado que “el incremento *per se* de las exportaciones no implica mayor crecimiento ni mejor desarrollo”.¹³

En dicho informe, la UNCTAD postula que el crecimiento de las exportaciones de los países del Sur no ha retribuido los ingresos suficientes “para corregir los rezagos sociales y la pobreza”.¹⁴ Esto se debe fundamentalmente a que los países en desarrollo, si bien venden más que antes al extranjero, también retienen una proporción cada vez menor del valor agregado que se incorpora a esas exportaciones.¹⁵

Ayuda Oficial al Desarrollo

El Consenso reza que “la AOD desempeña un papel esencial como complemento de otras fuentes de financiación al desarrollo, en particular en los países cuya capacidad de atraer inversiones directas privadas es mínima.”

¹³ Juan Antonio Zúñiga, “Exportaciones de países pobres no reflejan beneficios: UNCTAD”, *La Jornada*, México D.F., 30 de abril, 2002.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ UNCTAD, “*Trade and Development Report 2000 – Highlights*”, Ginebra, 2002. www.unctad.org.

Como toda Conferencia sobre Desarrollo de Naciones Unidas de los últimos años, se insta a los países desarrollados, que aún no lo hayan hecho, a dedicar el 0,7% de su producto interior bruto (PIB) como AOD. Debido en buena medida a que éste tipo de ayuda es la modalidad de financiación internacional al desarrollo más popular y publicitada a escala internacional, tanto EEUU como la Unión Europea (UE) comunicaron formalmente durante la Conferencia de Monterrey el aumento de sus respectivas participaciones en dicho rubro. George W. Bush anunció un incremento gradual de la AOD estadounidense —la más baja de los miembros del CAD en proporción a su PIB con el 0,1%— en un plazo de tres años al doble de la actual, es decir 5.000 millones de dólares. La UE, en palabras de su presidente en turno José María Aznar, recogiendo lo convenido en el Consejo de Barcelona de marzo de 2002,¹⁶ comunicó que los miembros de la UE aumentarían en conjunto su AOD para llegar, en cuatro años, a una media de 0,39% del PIB total comunitario, lo que significará un incremento en términos netos de 6.000 millones de dólares.

Ambos fondos aún se encuentran muy lejos de los recomendados por el Informe Zedillo¹⁷ respecto a aumentar al menos en 50.000 millones la AOD para cubrir el costo de las denominadas Metas para el Próximo Milenio.¹⁸

Deuda externa

Se considera que es necesario reducir la deuda externa para liberar recursos que puedan encauzarse hacia actividades de desarrollo. Para ello se recomienda vagamente a deudores y prestatarios impulsar acciones mediante negociaciones en los Clubes de Londres y París.

El Consenso de Monterrey promueve la ampliación de iniciativas como la Reducción de Deuda de los Países Pobres muy Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) como una medida eficiente de apoyo al financiamiento internacional al desarrollo.

¿Avance o retroceso?

Atender la financiación al desarrollo en un foro multilateral con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien especialmente a los países menos adelantados, significa un avance y una oportunidad para promover el desarrollo de forma soli-

¹⁶ Consejo Europeo, "Conclusiones de la Presidencia", Consejo Europeo, Barcelona, 15 y 16 de marzo de 2002, p. 3.

¹⁷ United Nations, *High Level Panel on Financing for Development Recommendations and Technical Report*, UN, Nueva York, A/55/1000, 26 de junio de 2001, p. 5.

¹⁸ Estas metas, contenidas en la Declaración del Milenio de la 55 Asamblea General de la ONU de 2000, consisten en la reducción a la mitad de la pobreza extrema mundial para 2015, lograr que la totalidad de los niños y niñas en el mundo cursen la educación primaria, entre las más relevantes. Asamblea General de la ONU, *Declaración del Milenio*, Naciones Unidas, Nueva York, 55/2, 13 de septiembre de 2002, p. 3.

daria mediante diversas perspectivas. Sin embargo, la CIFD considera erróneamente que los flujos privados de financiación internacional fungen como instrumentos eficientes de promoción al desarrollo, particularmente de los países y sectores más desprotegidos en los países del Sur.

El Consenso olvida señalar que los flujos foráneos generados por las IED y el comercio internacional —los cuales producen el mayor impacto directo sobre el crecimiento económico de los países en desarrollo—,¹⁹ no pueden ser considerados mecanismos eficaces de financiación al desarrollo. Ello debido a que éstos flujos atienden predominantemente a la lógica del mercado, donde el carácter distributivo y desarrollista no juega un papel importante. Esta circunstancia es aún más evidente en las economías más pobres del planeta, caracterizadas por su incapacidad de competir en el contexto internacional con otros receptores de dichos capitales en términos de equidad.

De no lograrse cambios sustantivos en el sistema internacional de cooperación al desarrollo, y sobre todo, de los mecanismos de su financiación, se continuará perdiendo terreno frente a los instrumentos privados de generación y distribución de capitales. Esto significaría mayor alejamiento de los países menos beneficiados de las estrategias y recursos complementarios que requieren para promover sus respectivos desarrollos.²⁰

La financiación internacional al desarrollo, tanto en su modalidad privada (IED) como en la pública (AOD), se encuentra concentrada en un número muy limitado de países. Por ello es necesario realizar esfuerzos para disminuir dicha polarización, tanto de generación como de recepción de riqueza, mediante modalidades novedosas de cooperación internacional. Sin embargo, la Conferencia no establece medidas claras para disminuir dicha concentración de capitales.

Por otra parte, se considera conveniente reestructurar los mecanismos de generación y difusión de la AOD, ya que este instrumento surgido en un contexto histórico, político e ideológico muy distinto al actual, resulta incapaz de solventar eficientemente las necesidades económicas no cubiertas por la financiación privada internacional. En la actualidad, la financiación al desarrollo en su dinámica privada (IED y comercio internacional) crece, evoluciona, se expande y a la vez se concentra en determinados países, mientras que la AOD se ha retraído y concentrado.

Resulta de particular relevancia la excesiva responsabilidad que el Consenso de Monterrey confiere a los Gobiernos de los países en desarrollo para atraer inversión extranjera mediante la oferta de sus mercados y mano de obra internas exigiéndoles medidas de buen gobierno. Mientras tanto, a los inversionistas no se les exigen planes de inversión directa con verdaderos intercambios tecnológicos a

*La
financiación
internacional
al desarrollo,
tanto en su
modalidad
privada (IED)
como en la
pública
(AOD), se
encuentra
concentrada
en un número
muy limitado
de países*

¹⁹ Simon Le Grand, "La reducción de la pobreza y el medio ambiente", *Revista Española de Desarrollo y Cooperación*, IUDC, Madrid, otoño/invierno 2002, N° 9, p. 99.

²⁰ Se estima que África Subsahariana requiere entre 25.000 y 35.000 millones de dólares al año para alcanzar las metas de 2015; una cantidad que equivale, aproximadamente, a los subsidios de un mes para los agricultores de los países de la OCDE. Ignasi Carreras, "África y la comunidad internacional", *Política Exterior*, Estudios de Política Exterior S. A, N° 86, Vol. XVI, Madrid, marzo/abril 2002, p. 14.

largo plazo, ni compromisos serios y definidos sobre la apertura de sus respectivos sectores productivos más protegidos y subsidiados.

Por tal razón, se considera que las fórmulas distributivas de financiación al desarrollo no pueden seguir sustentadas en dicha dinámica, ya que los países más pobres, al carecer de capacidad para enfrentarse a esta competencia internacional, se ven cada vez más rezagados en esta lucha desigual por los recursos. El financiamiento al desarrollo no puede continuar siendo un asunto de competencia financiera comercial.

Una promoción seria y sustentable de desarrollo con perspectiva mundial no se logrará mediante simples aumentos cuantitativos de AOD por parte de los principales donantes. Estos publicitados compromisos financieros de carácter no vinculante, en caso de cumplirse, apenas rebasarán los montos por este concepto a los alcanzados por el CAD en 1992.

Si lo que se buscara fuera verdaderamente abrir la discusión sobre vías eficientes de financiación al desarrollo, la CIFD hubiese sido un espacio adecuado para debatir, por ejemplo, sobre las barreras comerciales de los países desarrollados, que, en caso de abrirse, ocasionarían que los países en desarrollo ganasen diez veces más que los 10 mil millones de dólares al año que costaría extender la educación básica a todo el mundo. Con esa cantidad, según Mike Moore, director general de la Organización Mundial del Comercio, la renta mundial aumentaría en 2,8 billones de dólares y 320 millones de personas dejarían de ser pobres para 2015.²¹

Hubiese sido interesante extender el debate en Monterrey al hecho de que los países desarrollados gastan en la actualidad 1.000 millones de dólares diarios para subvencionar su agricultura, cifra que parece insignificante respecto a los 50.000 millones de dólares que calculó el Panel de Alto Nivel de la CIFD para cubrir el costo de las Metas del Milenio. Antes y durante los trabajos oficiales de la Conferencia, diversas organizaciones no gubernamentales analizaron este tipo de asuntos.²²

El Consenso de Monterrey, al no establecer compromisos relevantes sobre fuentes alternativas de financiación al desarrollo, de nuevos instrumentos para su gestión, regulación, promoción y difusión; y en definitiva, al promover la economía de mercado como la vía más eficaz para generar y difundir equitativamente bienes públicos mundiales, significa un retroceso en el fomento de la financiación internacional al desarrollo. Ello en detrimento de las economías más pobres del planeta que requieren urgentemente de una reestructuración del sistema financiero internacional. Esta reforma deberá considerar una mayor orientación distributiva de los recursos, con el fin de promover mejores condiciones de desarrollo global y beneficios compartidos entre los diversos actores del sistema internacional.

²¹ "Bush anuncia que ayudará sólo a los países pobres que liberalicen su economía", *El País*, 23 de marzo de 2002.

²² Por ejemplo, según el Foro Global que reunió a diversas ONG durante la Conferencia de Monterrey, por cada dólar que los países en desarrollo reciben de ayuda, han de devolver seis como pago de servicios de deuda externa (443.000 millones de euros al año). "El escepticismo marca el inicio de la Cumbre de Monterrey", *El Mundo*, 19 de marzo de 2002.

KIMBERLEY WISE Y JOSÉ GUIMÓN

El G8 tras la cumbre de Kananaskis

Durante los últimos años se han agudizado las críticas hacia el G8 y ha aumentado la movilización social contra su actitud y actividad. Para mejorar su impacto sobre el mundo y mitigar así esas opiniones contrarias, el G8 debe someterse a un proceso de reforma urgente e impulsar a su vez el cambio en otras organizaciones internacionales. Este artículo presenta un análisis del resultado de la cumbre de Kananaskis (Canadá), celebrada en junio de 2002, un repaso de los principales problemas estructurales del G8 y una reflexión sobre su futuro.

El 26 y 27 de junio de 2002, los líderes del G8 reunidos en Kananaskis (Canadá) centraron su agenda fundamentalmente en dos asuntos: el desarrollo de África y la lucha contra el terrorismo. En lo relativo al primero, dieron muestras de su apoyo al nuevo plan para el desarrollo de África (NEPAD)¹ y abrieron las puertas a una colaboración más intensa con los Gobiernos africanos para impulsar el desarrollo del continente. Sin embargo, los compromisos concretos fueron decepcionantes. No aportaron fondos adicionales, sino que se limitaron a asegurar que se destinaría a África por lo menos la mitad del nuevo fondo de 12 billones de dólares anuales para la ayuda al desarrollo constituido en la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo de Monterrey.² Los 6 billones de dólares anuales que se asignarán al continente más pobre del planeta resultan insuficientes. Por una parte, los países africanos se merecen más de la mitad de esos fondos si lo que se pretende es destinarlos a las regiones más necesitadas. Por otra, debería haberse hecho un mayor esfuerzo por aumentar los 12 billones que se acordaron

Kimberley Wise es abogada y trabaja para la Embajada de Estados Unidos en Madrid. José Guimón es economista e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid

¹ José Guimón, "Un nuevo horizonte para el desarrollo africano", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, verano 2002, N° 78.

² Ver en este mismo número: Juan Pablo Prado, "Consenso de Monterrey: ¿avance o retroceso", p. 37.

en la Conferencia de Monterrey, pues la cifra queda muy por debajo de los 50 billones solicitados por Naciones Unidas.³

Distintas ONG, como Oxfam, se quejaron también de las excesivas condiciones impuestas para la ayuda a África. Una forma más honesta de ayudar al continente hubiese sido facilitar la entrada de los productos africanos en los países ricos y reducir los subsidios agrícolas en la Unión Europea y EEUU, donde recientemente fueron aumentados.⁴ Otro aspecto criticable es la escasa contribución al programa de condonación de deuda de países altamente endeudados, presentado en 1996, al que sólo se dedicó un billón de dólares adicional. En cualquier caso, que el desarrollo de África fuese el tema central de la reunión, y la decisión de que así fuera también en la próxima cumbre, representa un gran logro para los sectores que reclaman un mayor compromiso del G8 con la lucha contra la pobreza. El presidente surafricano Thabo Mbeki, invitado a Kananaskis, declaró que “la conferencia pasará a la historia como un momento fundamental en la evolución de África y en el proceso de nacimiento de un sistema de relaciones internacionales más equitativo”.⁵

Aunque África fuera el tema principal, EEUU estuvo más preocupado por la lucha contra el terrorismo. Lo más destacable en este sentido fue el acuerdo logrado para controlar las armas de destrucción masiva, cuyo objetivo es prevenir que armas nucleares, químicas o biológicas caigan en manos de terroristas. George Bush logró persuadir al resto de líderes del G8 para que se comprometieran a destinar a esta causa 10 billones de dólares durante los próximos 10 años, que sumados a los 10 billones aportados por EEUU resultan un total de 20 billones de dólares. Los proyectos de destrucción y reciclaje de arsenales tendrán lugar fundamentalmente en Rusia, pues es la más importante fuente potencial de este tipo de armas. Vladimir Putin, presidente ruso, se mostró dispuesto a cooperar en el programa, algo a lo que seguramente ayudó el hecho de que se le aceptara como miembro pleno del G8.

Una forma de evaluar el éxito de una cumbre del G8 es constatar si su agenda se corresponde con los problemas globales más urgentes. La cumbre de Kananaskis cumple este aspecto, pese a que haya sido criticada por no haber afrontado con mayor ímpetu los problemas financieros y económicos globales en un contexto en que la economía internacional se encuentra seriamente amenazada por la “Enronitis” y por la crisis Argentina y su expansión hacia otros países emergentes.⁶ Otra forma de evaluación es atendiendo a su esfuerzo de autocrítica y a su espíritu reformista, pues el G8 se enfrenta a problemas estructurales cuya envergadura y complejidad van más allá de la elección de los temas a

³ El Plan Marshall transfirió a Europa Occidental tras la II Guerra Mundial el equivalente actualmente a 97 billones de dólares, y la ayuda de Alemania Occidental a Alemania Oriental en los años noventa ascendió a 600 billones de dólares.

⁴ Bernard Cassen y Frédéric F. Clairmont, “Globalisation à marche forcée”, *Le Monde Diplomatique*, Diciembre 2001.

⁵ *BBC Monitoring Africa*, “Mbeki calls for implementation of Nepad projects”, 29 de junio de 2002.

⁶ Richard Wolffe, “An uncertain world”, *Financial Times*, 30 de junio de 2002.

incluir en su agenda. En este sentido, Kananaskis ha producido resultados significativos, aunque insuficientes, teniendo en cuenta la magnitud de las deficiencias que padece el G8.

Problemas de legitimidad

La misión del G8 ha evolucionado mucho en los últimos años, lo cual ha agudizado las dudas sobre su legitimidad. Su finalidad primordial ha dejado de ser la coordinación de la política económica de sus miembros para pasar a cubrir un amplio abanico de asuntos globales que considera prioritarios. Su evolución se ha producido desde la coordinación económica de sus integrantes hacia el gobierno global. A medida que se producía este cambio, se ha ido reforzando la opinión de que el G8 no tiene ninguna legitimidad para la formulación de políticas que afecten a todo el mundo, debido a que no todos los países están representados, sino sólo un grupo de los siete Estados supuestamente más avanzados y Rusia. Ante una situación de anarquía internacional, el G8 ha emergido de forma natural, pero no democrática, como un órgano de gobierno global.

No están claros los criterios que definen qué países deben formar parte del foro, ni existen mecanismos transparentes de revisión y admisión de miembros, sino que su construcción obedece más bien a un proceso histórico.⁷ Por ejemplo, no está plenamente fundado que Rusia forme parte del G8, pues existen otros países no representados, como India o China, con mayor peso en la economía mundial. Tampoco está suficientemente justificado que Italia y Canadá sean miembros. Desde un punto de vista puramente legal, el G8 tiene derecho a reunirse formal e informalmente, al igual que hacen otros grupos de países con intereses y preocupaciones similares (como el G77 de países en desarrollo). No resulta nocivo que un grupo de países ricos coordinen sus agendas e intenten solucionar los problemas globales que ellos mismos consideran prioritarios. El resto de Estados podrá adherirse o no a sus recomendaciones libremente, al menos en teoría.

El G8 no es la representación global, sino una reunión muy lícita de representantes de ocho países que, aunque poderosos,⁸ no representan a todos. Sólo si el G8 abriera sus puertas a otros países lograría dotarse de mayor representación y legitimidad, pero la expansión tiene un precio. Si se ampliara el número de países que lo conforma, el G8 perdería flexibilidad ya que ello dificultaría el logro de con-

*Ante una
situación de
anarquía
internacional,
el G8 ha
emergido de
forma
natural,
pero no
democrática,
como un
órgano de
gobierno
global*

⁷ El G6 se reunió por primera vez en 1975, en Rambouillet (Francia), como foro de los seis principales países industrializados del mundo (EEUU, Japón, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña). Un año después, en la cumbre de San Juan (Puerto Rico), se transformó en el G7 con la entrada de Canadá, lograda gracias al apoyo de EEUU. En 1977, en la cumbre de Londres, la Unión Europea pasaría también a formar parte del grupo. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia fue invitada a una reunión informal en 1991 y posteriormente nombrada miembro en la reunión de Birmingham de 1998, quedando así formado el G8. Ni Rusia ni la Unión Europea son miembros plenos porque los países del G7 continúan celebrando reuniones ministeriales y presidenciales informales sin contar con ellos.

⁸ Los países del G8 representan un 48% de la producción mundial y un 49% del comercio internacional.

senso, algo que es considerado como uno de sus principales activos. En palabras de Sir Nicholas Bayne, profesor de la London School of Economics, “el gran mérito del G8 está en que es suficientemente pequeño y compacto como para que los líderes puedan tener un intercambio directo alrededor de la mesa, y esta cualidad se perdería si se sumaran nuevos miembros”.⁹ No obstante, teniendo en cuenta que la lucha contra la pobreza se está convirtiendo en la prioridad de la agenda del Grupo, cada vez se hace más evidente la conveniencia de contar con representación de países subdesarrollados. También se le critica por no haber dado una respuesta adecuada al creciente peso del sector privado, las ONG y la sociedad civil en el sistema internacional.

En respuesta a estas críticas, el G8 impulsó en 1999 la creación del G20, un foro asociado de países emergentes. Sin embargo, en la práctica, el G20 se ha limitado casi exclusivamente a ratificar las iniciativas propuestas por el G8 y, por tanto, no puede decirse que su existencia haya reducido el carácter elitista de éste.¹⁰ Por otra parte, desde la cumbre de Birmingham de 1998 se ha invitado a responsables de las organizaciones internacionales involucradas en los asuntos tratados por el G8, además de contar con la participación de la Unión Europea como miembro permanente desde la cumbre de Londres de 1997. De esta forma aumenta la legitimidad del G8 porque los países no miembros pueden reconocerse indirectamente representados mediante la presencia de responsables de instituciones de las que sí son parte.

La cumbre de Kananaskis ha supuesto un paso importante hacia la necesaria democratización del G8. Se alcanzó el acuerdo histórico de hacer de Rusia un miembro pleno y se invitó a Kofi Annan, Secretario General de la ONU, y a cuatro presidentes africanos a participar en el último día de la cumbre. Según John Kirton, director del G8 Research Group de la Universidad de Toronto, “ninguna cumbre anterior avanzó tanto como la de Kananaskis en la atenuación simultánea de las fronteras Este-Oeste y Norte-Sur, mediante la inclusión de la antes rival Rusia y de la históricamente olvidada África”.¹¹ De esta forma, puede considerarse que el G8 se ha embarcado en un esfuerzo real de transformación en busca de “una alianza democrática e inclusiva para el gobierno global efectivo en el siglo XXI”.¹² El Grupo dejó clara su intención de no incluir en el futuro próximo a nuevos miembros más allá de la incorporación de Rusia. Aunque invitar a presidentes africanos y la ONU denota un espíritu más integrador, éste queda mitigado porque su influencia sobre la agenda y decisiones es menor que la de los miembros plenos. Además, no se invitó formalmente a los presidentes africanos a participar también

⁹ Nicholas Bayne, “Round Table: Canada’s Kananaskis G8 Summit: What can and should be done?”, *Canadian Foreign Policy*, 2002, Vol. 9, Nº 3.

¹⁰ Tom Barry. “G8/G7 and Global Governance”, *Foreign Policy in Focus*, 2000, Vol. 5, Nº 23.

¹¹ John Kirton, “Kananaskis’s contribution to the Global Community”, *G8 Online Course*, Sesión 25, 2002.

¹² John Kirton, “A summit of historic significance: A gold medal for the Kananaskis G8”, *G8 Information Centre*, Universidad de Toronto, 27 de junio de 2002.

en la próxima cumbre, por lo que todavía es pronto para pronunciarse sobre la voluntad expansionista del G8.

Crisis de credibilidad

Si bien el problema de legitimidad del G8 es importante, su falta de credibilidad ha sido motivo de mayores críticas. Para mejorar su imagen, el G8 debe centrarse en formular políticas eficientes y, sobre todo, en cumplir sus compromisos. En palabras de *The Economist*, el principal problema del G8 es que “en demasiadas ocasiones la grandilocuencia de su retórica es inversamente proporcional a la magnitud de sus logros reales”.¹³ En los 28 años de historia del Grupo, los países que lo integran han incumplido repetidamente los acuerdos de las cumbres, sobre todo en lo relativo a condonación de la deuda, reducción de emisiones de carbono, prevención de conflictos y reforma de la arquitectura financiera internacional.¹⁴

La raíz del problema radica en el extraño cuerpo jurídico del G8. Carece de capacidad ejecutiva y de personalidad jurídica *stricto sensu*, pues no fue creado por un tratado internacional firmado y ratificado por todos sus miembros. No es una institución ya que no tiene personal fijo ni sede. No se ha dotado de una reglamentación procedimental por lo que puede contradecir sus principios de actuación. No tiene un tratado constitutivo que establezca que sus decisiones sean autovinculantes, luego las partes no están obligadas a su cumplimiento. Además, no ha previsto la creación de un órgano enjuiciador que fiscalice su actuación. Tampoco las condenas políticas de otros países son efectivas para impulsar el cumplimiento de los acuerdos porque su efecto es escaso sobre los integrantes del G8, líderes de los países más ricos del mundo. En definitiva, no hay garantías de que los compromisos colectivos de las cumbres del G8 sean cumplidos, ya que el grupo está formado por líderes de Estados soberanos autónomos que responden a sus distintos intereses nacionales y a las demandas de sus electores. Nos hallamos ante una figura jurídica desdibujada a la que no se le puede exigir nada legalmente. Ni siquiera hay mecanismos de seguimiento y supervisión eficientes del grado de cumplimiento de los objetivos pactados, aunque en los últimos años se ha avanzado considerablemente en este terreno.¹⁵

En Kananaskis se tomaron dos iniciativas destacables con potencial para mejorar este tipo de limitaciones. Por una parte, se decidió que el comité de representantes del G8 para África continuaría en funcionamiento al menos un año más, y que en la próxima cumbre presentarían un repaso de los avances logrados y del grado de cumplimiento de los compromisos de Kananaskis. Por otra parte, Jacques Chirac, presidente francés y anfitrión de la próxima cumbre, declaró que el año que viene continuaría con la fórmula canadiense de dedicar una atención especial a un tema central, y anunció que este sería de nuevo el desarrollo africano. Al cen-

¹³ *The Economist*, “Peanuts and plutonium”, 28 de junio de 2002.

¹⁴ Tom Barry, *op.cit.*

¹⁵ Andrea de Guttry, “The Institutional Configuration of the G-7 in the New International Scenario”, *The International Spectator*, 1994, N° 2.

trarse en un tema, o en un número reducido de ellos, aumentan las posibilidades de formular políticas con impacto y de lograr compromisos reales. En parte, la razón del fracaso de cumbres anteriores fue que adoptaron una agenda demasiado dispersa o ambiciosa y que, como resultado, los comunicados finales presentaron una carencia notoria de nuevos compromisos y de iniciativas novedosas con potencial para mejorar el mundo, adoptando más bien la forma de un mero reconocimiento de los asuntos globales prioritarios y de las iniciativas en marcha para combatirlos.

Dudas sobre su utilidad

Actualmente, una cuestión fundamental es si, en conjunto, la influencia del G8 es positiva para el sistema internacional. ¿Sería mejor que desapareciera por completo o que se mantuviera funcionando en las mismas condiciones actuales? El G8, argumentan sus críticos, es un foro inútil que se limita a hacer grandilocuentes declaraciones de intenciones y falsas promesas. Algunos sostienen que el único objetivo de su existencia es mantener el orden económico liberal para que sus miembros puedan seguir acumulando riqueza. El Grupo es visto como instrumento central para la imposición del neoliberal Consenso de Washington sobre los pobres y los bienes públicos de que dependen. De acuerdo con esta lógica, los países que lo integran utilizan el G8 para transmitir su voluntad de afrontar los problemas de la globalización de forma democrática y consensuada, mejorando así su imagen y atenuando la demanda de medidas más radicales. Como señala Susan George, vicepresidenta de ATTAC Francia, los países ricos “necesitan, por todos los medios, consolidar la legitimidad de su dominación antes de que ésta sea todavía más quebrantada”.¹⁶

Pese a que las deficiencias del G8 son evidentes, tiene también virtudes que justifican su existencia. Es una plataforma de diálogo al más alto nivel, relativamente flexible en comparación con otras organizaciones internacionales. Ha demostrado ser un foro eficaz para la identificación de los problemas asociados con la globalización y, en ocasiones, ha presentado ideas innovadoras con potencial para solucionarlos. Según Tom Barry, director de la revista *Foreign Policy in Focus*, “aunque sus declaraciones anuales son principalmente promesas vacías, la mayor parte de las iniciativas económicas y de seguridad se discuten en primera instancia por los líderes de este foro de elite y sus ministros antes de que las organizaciones internacionales tomen acción”.¹⁷ En virtud del poder combinado de sus miembros en el ámbito económico, militar y diplomático, su influencia en política internacional es enorme. Además, como señala Bayne,¹⁸ una de las principales funciones del G8 es el progresivo desarrollo de un liderazgo colectivo

¹⁶ Susan George, “L'ordre liberal et ses basses oeuvres”, *Le Monde Diplomatique*, agosto 2001.

¹⁷ Tom Barry, *op.cit.*

¹⁸ Nicholas Bayne, “Round Table: Canada's Kananskis G8 Summit: What can and should be done?”, 2002, Vol. 9, Nº 3.

que contrarreste la hegemonía estadounidense y, aunque no se haya logrado limitar el excesivo peso de EEUU en la escena internacional, el G8 es una de las pocas plataformas en marcha capaces de mejorar la situación. En palabras de Gordon Smith, director del Centre for Global Studies de la Universidad de Victoria, “nuestro mundo necesita un mejor gobierno, pero como no tendrá nada que pueda describirse como un ‘gobierno global’ hasta dentro de mucho tiempo, o tal vez nunca, necesita valerse de una variedad de mecanismos para gestionar la creciente interdependencia global, dentro de los cuales el G8 es uno de los más importantes”.¹⁹

Problemas de solapamiento

La variedad de instituciones y mecanismos para hacer frente a la mayor interdependencia global ha provocado, en ocasiones, solapamientos entre las actuaciones del G8 y otras organizaciones internacionales. En la actualidad, el aspecto central de este debate es qué respuesta dar al solapamiento, en asuntos de paz y seguridad, del G8 con el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas. En virtud del artículo 24 de la Carta fundacional de Naciones Unidas, el CS es el único órgano constitucionalmente legitimado para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, especialmente en lo relativo a la intervención. Sin embargo, los asuntos de paz y seguridad han entrado progresivamente en la agenda del G8, destacando su actuación en el conflicto de Kosovo, donde por primera vez intervino operativamente en el mantenimiento de la paz. En 1999, cuando no se conseguía una solución en el seno del CS al conflicto de Kosovo debido a la posición rusa, se logró llegar a un acuerdo en la cumbre del G8 de Colonia gracias al “Plan Fischer” (en nombre del Ministro de Asuntos Exteriores alemán que lo propuso). Entre los ocho miembros redactaron lo que después sería la Resolución 1244 del CS de Naciones Unidas y, hasta hoy, la norma que rige el orden constitucional de la región. ¿Debería el G8 sustituir al CS o, por el contrario, abstenerse de tomar decisiones operativas en cuanto a paz y seguridad? ¿Pueden coexistir y complementarse ambas instituciones? Se distinguen tres posiciones doctrinales en función de la respuesta que dan a estas preguntas:

- 1- Una corriente, basándose en la crisis de eficacia y los obstáculos burocráticos que atenazan al CS, considera al G8 preferible para actuar de forma más rápida, flexible y consensuada. Sostiene también que el G8 es más realista y contemporáneo porque no está encorsetado en una visión del mundo de 1945 —Naciones Unidas ni siquiera contempló en ese momento los conflictos intraestatales—.
- 2- Otra postura sostiene que el G8 es un foro inadecuado para involucrarse en actividades de paz y seguridad por su falta de legitimidad. Cree que el G8 no tiene atribuciones democráticas para controlar la política global.

*¿Debería el
G8 sustituir
al CS o, por
el contrario,
abstenerse de
tomar
decisiones
operativas en
cuanto a paz
y seguridad?*

¹⁹ Gordon Smith, “Round Table: Canada’s Kananaskis G8 Summit: What can and should be done?”, *Canadian Foreign Policy*, 2002, Vol. 9, Nº 3.

En este sentido, le falta la autoridad que le confiere a la ONU la representatividad. Esta corriente de pensamiento critica que el G8 no es suficientemente transparente, democrático, ni equilibrado geográficamente y que ni siquiera tiene experiencia en gestión de crisis o en prevención de conflictos.

- 3- La tercera tendencia opina que las dos instituciones deberían complementarse sin excluirse. Estos pensadores creen que el G8 sería un buen “catalizador e iniciador”²⁰ de las actuaciones del CS porque es un órgano más dinámico y en mayor contacto con la realidad —actuaría como asesor de primer orden para el CS—. Ésta constituiría una buena solución si se ignora el poder real que tiene el G8 en el seno del CS. Cuatro de los cinco miembros que tienen derecho de veto (“Power Five”)²¹ en el CS, son miembros del G8. Por tanto, si el G8 quiere actuar, el CS no lo va a impedir y si el G8 quiere impedir una actuación del CS, sería fácil. Los autores creen que el CS debería mantener el control sobre las cuestiones de paz por su unívoca legitimidad, y el G8 respetarlo. Las críticas acerca de la ineficacia del CS por los integrantes del G8 resultan contradictorias, ya que la necesaria reforma del CS está, principalmente, en sus manos. Si estos líderes están realmente interesados en asumir un liderazgo en la paz y seguridad internacional, deberían esforzarse por mejorar el CS y resolver los problemas de estructura y recursos que tiene la ONU.

El futuro rumbo del G8

El G8 no ha hecho llegar su mensaje a los ciudadanos ni les ha dado confianza en el proceso de globalización, y su imagen se asocia con la opulencia, la grandilocuencia y el elitismo. El rechazo al G8 y las protestas, en ocasiones violentas, han crecido considerablemente durante los últimos años. La cumbre de Génova de 2001, a la que acudieron 200.000 manifestantes, saldándose con un muerto y más de 600 heridos, confirmó que el G8 debía renunciar a reunirse con tanta parafernalia como hasta entonces.²² Por ello, y por los sucesos del 11 de septiembre, se decidió celebrar la cumbre de Canadá en un lugar aislado y pacífico, lo menos expuesto posible a las protestas. Si el G8 quiere mejorar su impacto sobre el sistema internacional, debe reflexionar sobre su sentido, funcionamiento y actitud, así como emprender un esfuerzo constante y honesto de reforma para corregir sus actuales deficiencias. Aunque en Kananaskis se hayan puesto en marcha iniciativas acertadas, el ritmo de las reformas está siendo demasiado lento. El

²⁰ Winrich Kühne y Jochen Prantl, “The Security Council and the G8 in the new millennium. Who is in Charge of International Peace and Security?”, *Stiftung Wissenschaft und Politik*, Berlín, 2000.

²¹ John Kirton “The G8 – Heading for a Major Role in International Peace and Security?”, *Stiftung Wissenschaft und Politik*, Berlín, julio 2000.

²² Gilles Luneau, “A Porto Alegre, pour une mondialisation différente”, *Le Monde Diplomatique*, enero de 2002.

conformismo de los líderes del G8 con el *status quo* es una muestra de su reticencia a ceder soberanía nacional y a asumir mayores compromisos globales.

La forma en que el G8 se presenta y promociona como eje central de gobierno global resta credibilidad a Naciones Unidas. El Grupo debería dejar de ocuparse de tantos asuntos de ámbito global y concentrarse en temas más puntuales y abarcables, dejando que la ONU asuma su liderazgo en el gobierno global. En el futuro próximo el G8 debería concentrarse en impulsar la reforma de organizaciones internacionales como la ONU y las instituciones de Bretton Woods en lugar de intentar suplantárlas. Esas instituciones requieren reformas estructurales urgentes y el G8 es una buena plataforma para impulsarlas. En la cumbre de Halifax de 1995, el Grupo reconoció la necesidad de diseñar una nueva generación de instituciones internacionales para hacer frente al gobierno de un mundo globalizado. Sin embargo, no han asumido su responsabilidad y desde entonces han desviado su atención hacia otros temas.

Como señala en su último libro Joseph Stiglitz,²³ ex economista jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía, para que la globalización pueda actuar como una fuerza positiva en el mundo, es necesaria una reforma radical de las instituciones de gobierno global, comenzando por una mayor transparencia y una mayor voluntad de examinar sus propias acciones. En lo relativo al G8, lo más urgente, a corto plazo, es establecer mecanismos más eficientes y transparentes para la supervisión y seguimiento del cumplimiento de compromisos. Cada cumbre debería comenzar por un repaso de los avances logrados con respecto a los acuerdos de la anterior reunión, y esto debería recogerse en los comunicados. A largo plazo, el G8 debería dotarse de mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de acuerdos, como por ejemplo un sistema sancionador.

²³ Joseph E. Stiglitz, "Globalization and its discontents", W.W. Norton & Company, Nueva York, 2002.

RODRIGO SOSA

Estrategias civiles frente a la crisis argentina

La sociedad civil en Argentina ha generado estrategias para contrarrestar los efectos de una crisis económica sin precedentes,¹ entre las que destacan la implementación masiva del trueque y la recuperación de industrias a través de la autogestión. Más de seis millones de personas intercambian habitualmente artículos en seis mil clubes de trueque en todo el país, por un valor de unos 140 millones de euros. Casi un centenar de empresas en quiebra han vuelto a producir por medio de la propia gestión de sus trabajadores, con asistencia de gobiernos locales y ONG. Ambas medidas responden a una reacción social inédita con mecanismos creativos, apoyados en diferentes grados de organización, y autónomos de unas instituciones estatales desacreditadas y ausentes.²

“Después de las seis de la tarde empiezan a armar sus puestos en el patio de la escuela, y desparraman sobre las mesas su mercadería de la mejor manera posible: frutas, verduras, aceite, ropa, plantas, pollos, conservas... Desde un micrófono, el concejal del pequeño pueblo de Calchaquí, en la provincia de Santa Fé, da la pitada inicial: ‘señores, ya pueden comenzar a trocar’.³ Esta escena se repite en 6.000 ferias de trueque en todo el país, incluyendo las grandes ciudades. Este mecanismo económico, a partir de una experiencia pionera de jóvenes profesionales en Buenos Aires hace siete años, es practicado por más de seis millones de argentinos de todas las clases sociales, en ámbitos urbanos y rurales, y se ha exportado a otros países de América Latina y Europa.

¹ Ver artículos publicados sobre la crisis argentina: Arthur MacEwan, “El derrumbe económico de Argentina” y Walden Bello, “Los dobles fracasos de la globalización”, ambos en *Papeles de Cuestiones Internacionales*, CIP/FUHEM, primavera 2002, N° 77.

² Ver en este número reseña del libro *La debacle de Argentina: Una Argentina que muere y otra que bosteza*, de Carlos Gabetta, Icaria, Barcelona, 2002, p. 169.

³ Diario *Clarín*, 26 de noviembre de 2001.

Rodrigo Sosa es profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa el master de periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid/EL PAÍS

La recuperación de industrias quebradas por medio de la autogestión de los trabajadores es otro de los fenómenos sociales que está adquiriendo carácter masivo con una fuerte incidencia en el plano económico y, principalmente, en el social. Industrias de congelados, de maquinarias, de fundición de hierro, de ladrillos, forman parte del casi centenar de empresas que han comenzado de nuevo su actividad a través de la acción coordinada de los obreros unidos en cooperativas. La autogestión empresarial ha devuelto el empleo a unos 10.000 trabajadores y ha permitido la subsistencia de sus familias, en total unas 50.000 personas. Este mecanismo se produce en barrios de fuerte tradición industrial y en castigados suburbios de las grandes ciudades.

25.000 nuevos pobres cada día

Desde que el contexto internacional —crisis rusa de 1998 y devaluación brasileña en 1999— detuviera el fuerte crecimiento de los años noventa⁴ y demostrara la fragilidad del modelo neoliberal aplicado en Argentina, han pasado más de 14 meses de recesión.⁵ En diciembre de 2001 la crisis estalló en toda su dimensión. El congelamiento de las cuentas bancarias fue el detonante.⁶ Una explosión social inusitada comenzó con saqueos de comercios en áreas suburbanas y siguió con la decidida reacción de los sectores medios. El “cacerolazo” de la noche del 19 de diciembre —manifestación espontánea de cientos de miles de personas en los barrios céntricos de Buenos Aires—, provocó la caída del ministro de economía, Domingo Cavallo. Al día siguiente, violentos enfrentamientos en el centro político y simbólico del país, la Plaza de Mayo de Buenos Aires, dejaron un saldo de 27 muertos y la renuncia del presidente Fernando De la Rúa. Cinco presidentes en quince días dieron cuenta de una fuerte crisis que no ha concluido con la asunción de Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002. Argentina contribuyó a las estadísticas mundiales con la mayor suspensión de pagos de la historia —155.000 millones de dólares— y liberó el cambio del peso, que inició un largo derrumbe.

⁴ El origen de la crisis argentina actual descansa, paradójicamente, en los años previos de fuerte expansión económica. Desde la implementación del plan de convertibilidad entre el peso y el dólar en 1991, Argentina vivió en una engañosa burbuja. El crecimiento se apoyó en las fuertes reformas neoliberales propiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI): amplio proceso de privatizaciones y fácil acceso al crédito internacional. La falta de un verdadero desarrollo, con una moneda dependiente del dólar que desmotivaba las exportaciones, condenó el modelo al fracaso. Todo estalló cuando se terminaron las empresas a privatizar y la presión de los intereses de los empréstitos se hizo incontenible.

⁵ “El crecimiento de los años noventa, aunque sustancial, fue en gran medida resultado de una acumulación de deuda internacional, de la expansión fortuita de los mercados extranjeros y de inyecciones a corto plazo de dinero público procedente de la venta de empresas estatales”. Arthur MacEwan, *op.cit.*

⁶ El “corralito”, diseñado por el ministro de economía Domingo Cavallo para frenar la huida en masa de capitales, dejó atrapados ahorros por cerca de 60.000 millones de dólares.

Uno de cada dos argentinos es pobre. 18,2 millones no superan los 160 euros de ingresos mensuales, el límite estadístico de la pobreza.⁷ Casi todos los sectores sociales se han visto afectados, con especial dramatismo para aquellos que han rebasado la línea de la indigencia. La descomposición de la clase media, que se inició lentamente a mediados de los años setenta, se ha vuelto ahora abrupta. El vertiginoso descenso social se ha visto reflejado en los 3,8 millones de personas que han sucumbido a la pobreza en el primer semestre de este año, lo que representa 25.000 nuevos pobres cada día. Desempleo del 25%, disminución del poder adquisitivo de los salarios, descenso de la renta anual per capita de 7.300 dólares en diciembre a 2.167 dólares en julio, depreciación de los ahorros congelados por efectos de la devaluación, son elementos que han minado las bases de toda una clase social.

Estrategias de una sociedad unificada

El desmembramiento de la clase media ha generado importantes consecuencias en las relaciones sociales. Entre ellas destaca la notable capacidad de reacción y de creación de respuestas frente a los cambios derivados de la crisis. La adaptación de la sociedad civil al nuevo contexto se evidencia en nuevas formas de participación política, como los “cacerolazos” o las asambleas barriales,⁸ y en la construcción de novedosas estrategias de subsistencia, como el trueque o la autogestión. Se trata de un fenómeno propio de la llamada “nueva pobreza” en Argentina: una clase media que ha perdido su capital económico, pero que conserva su capital educativo que le brinda herramientas de creación y organización.

Las numerosas estrategias sociales que han emergido en el último año, difícilmente representan una superación de la crisis, sino un intento de frenar sus efectos. Las consecuencias a largo plazo que de ellas se deriven son, por lo menos, inciertas. Pese a ello, la fuerte capacidad civil de construir nuevos lazos en una sociedad igualada por la crisis, evidenciada en los últimos meses, es en sí misma destacable. Participación masiva, notable variedad de estrategias creativas, determinados niveles de organización y autonomía de un aparato estatal ausente y deslegitimado, son algunas de las características de este proceso. Se trata de un particular fenómeno social que se construye a partir de la necesidad de improvisar con pocos elementos en un contexto nuevo y adverso.

Nada se pierde, todo se intercambia

El trueque es un mecanismo económico de grandes dimensiones que desempeña un importante rol social ya que crea vínculos entre las personas afectadas por una

*La “nueva
pobreza” en
Argentina:
una clase
media que ha
perdido su
capital
económico,
pero que
conserva su
capital
educativo que
le brinda
herramientas
de creación y
organización*

⁷ Según los recientes resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

⁸ Periódicamente, desde que estalló la crisis, vecinos de los principales barrios de las grandes ciudades se reúnen en asambleas en parques y plazas para discutir sobre problemas comunes y organizar acciones.

misma situación. Las ferias donde se lleva a cabo generan una sensación de comunidad y establecen claros límites con el exterior. Funciona como espacio de contención y base para perspectivas personales, aunque sean de corto plazo. Su práctica,⁹ basada en tendencias como la economía social —que busca con criterios empresariales la obtención de beneficios que deben ser redistribuidos entre los sectores marginados—, o las teorías del economista alemán Silvio Gesell,¹⁰ se está extendiendo a otros países en los que iniciativas similares se mantienen en pequeños círculos.¹¹

En Argentina, los 6.000 clubes de trueque, llamados “nodos”, están agrupados en dos grandes organizaciones: la Red Global del Trueque (RGT), fundadora de la práctica hace siete años, y la Red del Trueque Solidario (RTS), desligada de la anterior. El masivo intercambio entre los más de 6 millones de actores se realiza a través de monedas propias, una en el caso de los centros de la RGT, y varias en los de la RTS. Las monedas, llamadas genéricamente “moneda social” o “créditos”, porque implican una deuda del portador, son inconvertibles con las de curso legal, pero cotizan en paridad con el peso como referencia para los intercambios. Un bien puede trocarse en forma directa por otro bien, por créditos, o por créditos combinados con pesos oficiales.

El sorprendente incremento en el volumen de los intercambios ha llevado al Gobierno a reconocer la importancia del mercado del trueque y a establecer vínculos con él. Los créditos han dejado de ser simples papeles y en diferentes localidades del interior del país ya se pueden usar para pagar impuestos.¹² En otras no se utilizan los créditos, pero sí se puede tributar con bienes y servicios que se cotizan según los precios del mercado tradicional. Analistas han destacado la importancia de los aproximadamente 500 millones de créditos circulantes —140 millones de euros—, y las características de estos como moneda privada.¹³

⁹ El primer club de trueque fue fundado el 1 de mayo de 1995 por un pequeño grupo de ecologistas, profesionales de clase media de Buenos Aires, como una opción contra la ortodoxia neoliberal que seguía el Gobierno de Carlos Menem. El creciente desempleo de los años noventa, en torno al 15%, aseguró el éxito de la propuesta.

¹⁰ Silvio Gesell (1862-1930), economista alemán residente en Argentina, propuso una nueva teoría del dinero. Citado profusamente por J. M. Keynes, su obra de referencia es *El orden económico natural*, publicada en alemán en 1916.

¹¹ El caso argentino tiene sus seguidores en Uruguay, Brasil y España. Miembros de la RGT presentaron la experiencia en un seminario en París, el pasado mes de mayo. Sistemas similares existen en Francia (SEL), Canadá y EEUU (LETSistem) y México (La Otra Bolsa de Valores).

¹² El populoso distrito de Quilmes en Buenos Aires se ha sumado recientemente a la lista de pequeñas ciudades y pueblos que aceptan pagos con trueque o créditos como El Bolsón y Calchaquí, entre otros.

¹³ “Los créditos circulan en condiciones competitivas con la moneda estatal, porque brindan un servicio más barato. Estos intercambios no son recargados con el 21% del IVA, y tampoco están sujetos al corralito”, dice el economista Martín Krause, rector de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Análisis económico publicado en *La Nación*, mayo 2002.

Los participantes en el trueque reciben el nombre de “prosumidores” —generalmente personas expulsadas del mercado tradicional, como desempleados o comerciantes que debieron cerrar—,¹⁴ palabra que describe a aquellos que son productores y consumidores al mismo tiempo. Para iniciar el intercambio se debe tener algo para trocar, bienes o servicios. Aquellos que se incorporan por primera vez deben pasar por cursos de formación sobre la práctica, y luego reciben una suma variable de créditos como punto de partida a la actividad.

La lista de productos que se cambian en las ferias son bienes de primera necesidad, que incluyen todo tipo de alimentos, y servicios muy variados (peluquería, zapatería, clases, terapias). Si uno tiene un comedor con las cañerías rotas, con aceite y fideos paga el arreglo de fontanería. Otros fabrican artesanías y prácticamente viven del trueque. Con créditos compran comida y le pagan al dentista. Hay personas que redujeron a la mitad las compras en el supermercado y las reemplazaron por el trueque. El éxito de este sistema reside en la posibilidad que brinda de subsistir o de mantener ciertas prácticas de la vida cotidiana que de otra manera serían imposibles. Generalmente se produce una alternancia entre la economía formal y el trueque, pero el aumento de las horas sin trabajar y la mercadería sin vender conducen cada vez más hacia el segundo.

A medida que se expande, el mercado del trueque comienza a sufrir trastornos. Uno de los problemas más graves es la especulación con las materias primas, bien muy demandado por ser la base de los productos que se intercambian en las ferias. Esto conlleva la inflación y las fuertes diferencias de precios entre las ferias de distintos barrios y entre las grandes ciudades y el interior. La falsificación de créditos es otro de los problemas que preocupa a los organizadores y que buscan combatirlo con papeles con mayores medidas de seguridad. Las estimaciones indican que más de la mitad de los 500 millones de créditos circulantes son falsos. Valores como la solidaridad, objetivo original del trueque, empiezan a ser minados por actitudes especulativas y desleales.

Recuperación de fábricas

La Baskonia es una fundición de hierro que hace 80 años empezó a producir en el antiguo polo industrial de La Matanza, en el Gran Buenos Aires. Allí también están El Palmar, que llegó a ser el mayor productor de ladrillos huecos del país; Siam, pionera de la metalurgia en Argentina fundada en 1910, y Zanello, una fábrica de tractores. Todas estas empresas han sido recuperadas de una caída definitiva por la autogestión de sus empleados. Comenzó como un hecho aislado, con antecedentes históricos varias décadas atrás en un contexto completamente distinto. La crisis lo convirtió en otro de los fenómenos sociales que surgen motivados por la necesidad y demuestran la capacidad de respuesta de la sociedad. En el último año, las fábricas gestionadas por sus antiguos obreros se han multiplicado sor-

¹⁴ El concepto de prosumidor fue utilizado por Alvin Toffler en su obra *La Tercera Ola* (1980) y refleja parte del andamiaje ideológico y teórico que existe detrás del proyecto del trueque.

El significado social de la recuperación de fábricas es fundamental para comprender la movilización que se genera en su entorno geográfico

prendentemente. Cerca de un centenar están ya en funcionamiento o en vías de hacerlo.

Se trata de pequeñas y medianas industrias (pymes), con no más de 500 trabajadores, ubicadas en las viejas áreas industriales que rodean a las principales ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Son suburbios que ahora ostentan los peores índices de desempleo y pobreza, resultado de una larga agonía del sector industrial iniciada en los años setenta y reforzada en los noventa. En este contexto, estrategias como la autogestión se vuelven cruciales. Sus actores suelen ser obreros calificados, con experiencia y con una marcada cultura industrial, pero que por su actividad tienen escasas posibilidades de reinserción en el mercado laboral.

Camino de la “empresa propia”

La autogestión, a diferencia del trueque, es un proceso complejo que requiere la conjunción de varios factores y la acción de actores como obreros con capacidad de organización, autoridades judiciales y de gobiernos locales dispuestos a apoyarlos, un mercado de clientes y proveedores disponible y la asistencia de asociaciones y ONG.

El proceso comienza con la caída progresiva de una fábrica, hasta que se declara en quiebra o el dueño la abandona. En el primer trimestre de 2002, se produjo el quiebre de 6.000 empresas, en gran parte pymes. El paso siguiente es la unión de los ex trabajadores bajo la figura jurídica de una cooperativa con un objetivo primordial: el mantenimiento de sus fuentes de trabajo. Entonces, el poder judicial puede asumir la decisión de otorgar a los empleados el control de la empresa.¹⁵ Finalmente, las autoridades locales conceden los permisos.

El momento crítico del proceso es cuando los obreros deben afrontar los primeros gastos del alquiler, el pago de las deudas de la empresa, las cargas tributarias como autónomos, la puesta en funcionamiento de la producción, con la adquisición de materias primas y la creación de circuitos de comercialización. No menos importante es el cambio de mentalidad que implica pasar de empleados a socios. En este aspecto intervienen las ayudas de ONG, asociaciones de vecinos, otras cooperativas, comunidades educativas y los gobiernos locales. En algunos casos, la cooperativa logra una moratoria en el pago de deudas y tributos, o créditos para el arranque de la industria. El comienzo siempre es duro e implica una fuerte reducción en el salario y en los niveles de producción y ventas en comparación con la situación anterior a la caída de la fábrica.

El significado social de la recuperación de fábricas es fundamental para comprender la movilización que se genera en su entorno geográfico. “Así contado parece fácil, pero fue muy duro. Tuvimos deudas, remates y falta de materia prima. El juez nos ayudó, el intendente de Cañuelas (Gran Buenos Aires) también,

¹⁵ El juzgado donde está domiciliada la quiebra procede a la expropiación de los activos y los entrega en alquiler a los trabajadores, aunque también se puede producir una transferencia directa de activos y pasivos, u otro régimen de participación.

pero el pollo más difícil de pelar fue Edesur (empresa eléctrica)", cuentan obreros de congelados Yaguané. "Nos cuesta manejar una gran empresa que fuera de las rejas tiene que competir en el mercado. Pero somos una cooperativa: como Cáritas nos ayudó, nosotros ya estamos dándole ladrillos para construir un comedor", explican trabajadores de la fábrica de ladrillos El Palmar.¹⁶

En 2001 se formó el Movimiento de Empresas Recuperadas, que agrupa a buena parte del sector como respuesta a la necesidad de apoyo mutuo y con el objetivo de fomentar la coordinación entre las cooperativas. Uno de sus miembros expresa las razones del surgimiento de cooperativas: "Durante la última década hemos observado como se destruían sistemáticamente las fábricas. Ante ese escenario los trabajadores no teníamos ninguna capacidad de respuesta, éramos observadores pasivos de nuestra muerte social y laboral. Los mecanismos históricos, paro y movilización, no funcionaban porque no había a quien reclamarle, el patrón había desaparecido y el Estado no tenía, ni tiene respuesta".¹⁷

El sostenimiento a largo plazo de estas iniciativas es todavía un interrogante. Todo indica que serán pocas las que podrán plantearse un proyecto real de crecimiento. Para la mayoría, implicará una solución transitoria. Los problemas de las instalaciones obsoletas son prácticamente insalvables, porque se trata de empresas que desde el punto de vista de su activo no tienen valor, pero van a permitir que al menos por 4 o 5 años de actividad adquieran un importante significado social. A diferencia de los antiguos proyectos de autogestión, ahora no implican un planteamiento serio como modelo económico alternativo. Más importante, por inmediato, resulta su función como paliativo a una situación dramática. Más que una teoría para el desarrollo y el crecimiento es una medida social, un parche para frenar la descomposición y la caída por debajo de mínimos de subsistencia de más familias.

¹⁶ Testimonios de varias crónicas periodísticas en los periódicos *La Nación* y *El Clarín*.

¹⁷ *La Nación*, 30 de junio de 2002.

ANA GARCÍA RODICIO

Proceso de retorno de los refugiados camboyanos

“El camino ha sido largo hasta este momento. La historia ha sido cruel en Camboya. Porque nadie que no haya vivido el terror de esos años puede entender lo que nosotros vivimos. Ese terror está dentro de mí. Mi historia es la historia del horror que ha asolado a mi país.”

Sophany. Phnom Penh (Camboya). Junio 2000.

En el contexto de la Guerra Fría, Camboya es sinónimo de guerra, genocidio, refugiados, destrucción social y material, migraciones forzadas, hambre, pobreza, intervencionismo extranjero, luchas de poder y una larga lista de barbaries que designan a este país del sudeste asiático como un lugar con una de las guerras más crueles del siglo XX. Adentrarse en los entresijos de la Camboya de las últimas décadas significa entrar en “la historia del horror” de muchos camboyanos que han vivido el largo camino de la lucha por la supervivencia durante las guerras que asolaron el país desde finales de los años sesenta hasta la paz, en diciembre de 1998.

Los retornados¹ son supervivientes del régimen del general Lon Nol, de los bombardeos estadounidenses en Camboya, del régimen genocida de Pol Pot, de las minas antipersona y los campos de batalla, de la huida hacia los campos de refugiados, del refugio en Tailandia y los bombardeos continuados, y de su repatria-

¹ El término “retornados” se utiliza en referencia a aquellos refugiados que regresaron de Tailandia a Camboya en la operación de repatriación voluntaria coordinada por ACNUR en 1992-1993.

Ana García Rodicio es Licenciada en Derecho y posgraduada en Ayuda Humanitaria Internacional. Autora del informe *Restoration of Life in Cambodia: 1992-93 Returnees in Banteay Meanchey and Siem Reap*, Jesuit Refugee Service-Cambodia, noviembre 2000

ción a Camboya en 1992-1993. Su éxodo hacia Tailandia desde 1979, comenzó a partir del trágico periodo de los jemeres rojos.²

El 17 de abril de 1975 marcó el comienzo de los “tres años, ocho meses y veinte días de oscuridad”³ del régimen comunista de Pol Pot, denominado Kampuchea⁴ Democrática. Durante este tiempo, los jemeres rojos pretendieron reformar la sociedad camboyana para conformar una nueva Camboya en los principios de la revolución. Los objetivos de su utopía comunista eran “obtener la independencia y la soberanía, depender solamente de los recursos propios, defender y construir el país y tomar el destino en nuestras manos”.⁵ Los medios para alcanzarlos tuvieron efectos deshumanizantes y de exterminio que dejaron más de un millón de muertos y una sociedad totalmente devastada. Dichos medios fueron esencialmente:

- Migraciones forzosas. Se utilizaron como mecanismo de control a través del terror y como arma para fragmentar la cohesión social al separar las familias y romper los vínculos sociales y comunitarios existentes. Los habitantes urbanos, principalmente de la capital Phnom Penh, fueron trasladados al ámbito rural, puesto que dentro de los principios de la revolución estaba la concepción de que la fuerza de la nación radicaba en los recursos agrícolas y rurales. Se formaron comunas agrarias en todo el país, que progresivamente se convirtieron en campos de concentración rurales.
- Conversiones forzosas de transformación social. Reeducar a la población a nivel individual y colectivo fue una prioridad. Era necesario un cambio de mentalidad y comportamiento y, para ello, se utilizaron mecanismos de propaganda y terror promocionando la “renuncia”⁶ a favor de una nueva sociedad liderada por el Angkar.⁷ Se impusieron estándares de comportamiento que afectaron profundamente el sentido de identidad personal y colectiva como el vestido (toda la población fue obligada a vestir de negro y a calzar las mismas sandalias), comida, lenguaje, hábitos personales y sociales, matrimonio (matrimonios forzosos y pautas uniformes y restrictivas de relación conyugal y familiar), creencias, etc.
- Genocidio. Como mecanismo de control social se instauró un régimen de terror con medidas de represión extremadamente crueles. Más de un millón de personas murieron en los “campos de la muerte” por ejecución, inanición, cansancio y numerosas enfermedades.

² Jemer es el grupo étnico mayoritario de Camboya. El término “jemeres rojos” fue utilizado por Pol Pot y sus seguidores para designarse como grupo.

³ Mujer retornada. Provincia de Banteay Meanchey (Camboya), septiembre 1999.

⁴ Kampuchea es el anterior nombre del país. En 1989 volvió a llamarse Camboya.

⁵ François Ponchaud, *Cambodia: Year Zero*, Holt, Rinehart and Winston, Canada, 1977, p. 73.

⁶ “Renuncia a las actitudes personales significa principalmente utilizar toda la mente para una misión o trabajo sin pensar en uno mismo y regocijarse en ser un instrumento dócil en manos del Angkar.” François Ponchaud, *op.cit.*, p. 114.

⁷ En idioma jemer, “angkar” significa organización. El régimen de Pol Pot utilizó e impulsó esta palabra para designar a la organización de los jemeres rojos.

El régimen de Pol Pot finalizó el 7 de enero de 1979, cuando las tropas vietnamitas tomaron Phnom Penh en lo que algunos analistas denominan “la paradoja de la invasión y liberación de Camboya”.⁸ A partir de este momento empieza un nuevo éxodo tanto dentro de Camboya como hacia Tailandia. Este fue el inicio de un juego de poderes internacionales y nacionales que convirtió a los refugiados en el país vecino en “peones políticos”,⁹ con graves repercusiones humanitarias.

Los campos de refugiados funcionaban como instituciones cerradas, controlados por el Gobierno tailandés y administrados por alguno de los grupos de resistencia al régimen vietnamita en Camboya como el KPLNF (Frente Nacional de Liberación del Pueblo Jemer), FUNCINPEC (Frente para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa) y los jemeres rojos. Sus componentes políticos formaron la Coalición de Gobierno de la Kampuchea Democrática en el exilio, que fue reconocida en 1982 por la Asamblea General de Naciones Unidas como Gobierno legítimo de Camboya.

La vida en los campos de refugiados transcurría “(...) sin poder cubrir las necesidades humanas básicas como la seguridad física y psicológica, la libertad de movimientos; sin derecho a la comunicación, a la información o a las visitas; y privados de responsabilidades con relación a la autosuficiencia (por ejemplo, la comida, el agua, el dinero, la salud)”.¹⁰ Esta situación, denominada “síndrome de la Institución Total”, fue el parámetro en el que los refugiados se movieron durante los nueve a trece años que duró el exilio para muchos de ellos, tiempo en el que estuvieron a merced de las decisiones y acciones externas que rigieron sus vidas hasta que las condiciones para su repatriación tomaron forma.

*Los
refugiados
estuvieron a
merced de las
decisiones y
acciones
externas que
rigieron sus
vidas hasta
que las
condiciones
para su
repatriación
tomaron
forma*

Acuerdo de París y repatriación de refugiados en el marco de la UNTAC

Vietnam retiró sus tropas de Camboya en 1989, lo que implicó un recrudescimiento de los combates internos, puesto que los grupos de resistencia trataron de extender sus zonas de influencia para alzarse con el poder. La presión internacional propició, en octubre de 1991, el Acuerdo de Asentamiento Político Comprensivo del Conflicto Camboyanos, firmado en París por las partes beligerantes: Estado de Camboya, FUNCINPEC, KPLNF y el Partido de la Kampuchea Democrática. Este fue el primer paso hacia la paz. La guerra, sin embargo, continuó en el noroeste del país debido al abandono por parte de los jemeres rojos del proceso de paz.

⁸ François Ponchaud, “Introducción a la historia de Camboya”. Ciclo de conferencias en Phnom Penh, julio 1999.

⁹ La expresión “peones políticos” es la versión española del título del libro de Josephine Reynell, *Political Pawns. Refugees on the Thai-Kampuchean Border*, Refugee Studies Programme, Oxford, 1989.

¹⁰ Peter Utting, *Between Hope and Insecurity: The Social Consequences of the Cambodian Peace Process*, United Nations Institute for Social Development (UNRISD), Ginebra, 1994, p. 158.

El Acuerdo de París estableció la Autoridad Transitoria de Naciones Unidas para Camboya (UNTAC), encargada de administrar el país hasta la celebración de las elecciones generales (mayo de 1993), y la formación de un Gobierno elegido democráticamente. Como parte integral de la UNTAC, el Acuerdo de París determinó que los refugiados camboyanos participasen en dichas elecciones. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) coordinó la operación de repatriación voluntaria, llevada a cabo entre marzo de 1992 y mayo de 1993, que incluyó 362.209 personas aproximadamente.¹¹

Posteriormente, para la fase de su reintegración como retornados, varias agencias establecieron programas específicos. La distribución de responsabilidades se estructuró a través del Acta de Acuerdo entre el ACNUR y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmada en 1992. El ACNUR se concentraría en las necesidades inmediatas de los retornados y en su monitorización, y el PNUD en su reintegración desde una perspectiva de largo plazo.

El mandato del ACNUR incluyó programas de reintegración y actividades de monitorización. Los programas de reintegración tenían dos componentes principales: raciones de comida para 400 días (cuyo proveedor era el Programa Mundial de Alimentos) y una ayuda a la reintegración que se designó inicialmente desde la previsión de dos hectáreas de tierra para cada familia retornada. La identificación de la tierra accesible fue realizada a través de un avanzado sistema por satélite, “sin embargo, la mayor parte de las tierras identificadas de esta manera resultaron no estar disponibles debido a que no hubo oferta de las autoridades pertinentes, las tierras tenían muchas minas antipersona, se trataba de zonas inseguras o fueron ocupadas por otros en este periodo de tiempo”.¹² En octubre de 1992, se incluyeron otras opciones (dinero, casa con tierra para huerta, empleo). Sólo el 3% de los retornados tuvo acceso a tierra cultivable, mientras que el 83% eligió el dinero puesto que no había tierra disponible para todas las familias que la solicitaron.

El Proyecto para el Reasentamiento y la Reintegración en Camboya (CARE-RE I) comenzó en agosto de 1992 como proyecto del PNUD. Su objetivo inicial, asistir el reasentamiento y reintegración de los retornados especialmente a través de Proyectos de Impacto Rápido, se fue modificando incluyendo otros grupos y actividades. En 1996 se inició CARE-RE II como Proyecto de Rehabilitación y Regeneración en Camboya.

La mayoría de los refugiados regresaron a zonas del noroeste donde la guerra estaba activa. La precariedad de su reasentamiento tanto a nivel socioeconómico como sociopolítico fue manifiesta. A pesar del establecimiento de un Gobierno democrático tras las elecciones de 1993, la inestabilidad política y los combates militares entre los jemes rojos y las fuerzas gubernamentales dieron lugar a una progresiva debilitación del Estado junto con un empoderamiento de los partidos políticos. Este proceso culminó en julio de 1997 con un golpe de Estado y un

¹¹ ACNUR, *Informe de ACNUR sobre la Repatriación Voluntaria*, Phnom Penh, 1994.

¹² Steven Paris, Tom Geensen y Patrick So, *Land for Returnees in Cambodia: UNHCR Position Paper, August 1992*; citado por Court Robinson en *Something like home again. The repatriation of Cambodian refugees*, US Committee for Refugees, EEUU, 1994, p. 22.

resurgimiento del conflicto. Debido a la presión internacional, se celebraron nuevas elecciones en 1998 y se formó un nuevo Gobierno de coalición que permanece hasta la fecha. Los combates terminaron en diciembre de 1998, cuando los últimos reductos de los jemereros rojos aceptaron la paz y se entregaron al Gobierno. Era la primera vez en treinta años que los camboyanos conocían la “paz”.

Características del proceso de retorno

El proceso de retorno incluye tres conceptos que están directamente interconectados: repatriación, reintegración y reconciliación. Repatriación implica el regreso de los refugiados al país de origen después del exilio, esto es, la recuperación del estatuto de ciudadano y la consiguiente recuperación de la protección nacional del Estado en una dimensión legal y social. Reintegración es el proceso de inclusión en el país de origen a nivel físico, socioeconómico, sociopolítico y cultural. En el caso de Camboya, este proceso es un proceso de reconciliación, puesto que implica la superación del conflicto anterior y la progresiva recuperación de la confianza necesaria para reconstruir el tejido social y las relaciones humanas (a nivel personal y comunitario) que se rompieron como consecuencia del conflicto.

Aplicando el paradigma de justicia restaurativa,¹³ la restauración de la vida de los retornados en su país de origen es el proceso de empoderamiento de los retornados, a nivel individual y comunitario, en el marco de los principios de igualdad y no discriminación, para reconstruir las relaciones humanas tanto sociales como económicas que fueron destruidas debido al conflicto. Este proceso no es neutral sino que tiene que estar conectado a la reconciliación.¹⁴

A partir de esta definición, en este texto se analiza el proceso de retorno de los refugiados camboyanos a Camboya, que comenzó en 1992-1993, en dos dimensiones: la personal (material y emocional) y la comunitaria (familiar, local y nacional). Para el análisis se tienen en cuenta los datos y resultados del trabajo de campo realizado en Camboya en 1999-2000.¹⁵

Restauración personal de los retornados

El análisis de la restauración personal de los retornados camboyanos se hace en función de cuatro derechos: alimento, vivienda, salud y educación.¹⁶

¹³ Paradigma contemporáneo de justicia que se centra en restaurar las relaciones humanas que se han roto debido a un conflicto.

¹⁴ Ana García Rodicio, *Restoration of Life: A New Theoretical Approach to Voluntary Repatriation based on a Cambodian Experience of Return*, International Journal of Refugee Law, 2001, Vol. 13, N° 1/2, p. 134.

¹⁵ Ana García Rodicio, *Restoration of Life in Cambodia: 1992-93 Returnees in Banteay Meanchey and Siem Reap*, Jesuit Refugee Service-Cambodia, noviembre 2000.

¹⁶ La restauración personal se refiere al “empoderamiento de los retornados en su país de origen para tomar decisiones que afecten a sus vidas para así poder vivir y

*La
inseguridad
alimentaria
es mucho
mayor entre
las familias
retornadas
que en el
resto de la
población*

– Derecho al alimento: en Camboya se cuantifica con relación a la cantidad de arroz consumida por familia al día. Un 52% de los retornados no tienen suficiente comida para satisfacer sus necesidades básicas y muchos otros se encuentran en el límite para ello. La mayoría de las familias retornadas son vulnerables en términos de seguridad alimentaria, y, en general, no tienen la posibilidad de almacenar comida suficiente para subsistir más de unos días puesto que viven en función del dinero que consiguen cada día, situación agravada porque la mayoría de los retornados no tienen tierras para cultivar arroz.

La inseguridad alimentaria es mucho mayor entre las familias retornadas que en el resto de la población. Así, en Camboya, el 17% de la población no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, mientras que la incidencia entre los retornados es del 52%. Esta situación ha empeorado progresivamente: en 1994 un 30% de los retornados no podía satisfacer sus necesidades alimentarias, en 1995 un 40% y en 1999-2000 un 52%.¹⁷ Esto ha obligado a muchos retornados a acudir a estrategias de riesgo, como los créditos de comida o la venta de la casa, para sobrevivir, lo que ha significado para muchos la entrada en círculos irreversibles de pobreza.

– Derecho a la vivienda: generalmente, los retornados viven en sus casas y sólo casos excepcionales, como viudas o huérfanos, habitan en viviendas ajenas con vecinos, familiares o amigos. Sin embargo, la posesión del solar para la casa es precaria para la mayoría de los retornados, bien porque no la consiguieron en el momento de su repatriación y pasaron a ocupar la tierra de manera ilegal, bien porque su vulnerabilidad económica les ha forzado a hipotecarla para obtener algún tipo de crédito. El 77% de los retornados camboyanos viven en una casa inadecuada e insalubre.

– Derecho a la salud: en Camboya el funcionamiento de la sanidad pública es muy precario, de manera que el porcentaje de gastos sanitarios que los propios enfermos tienen que satisfacer cuando acuden a las facilidades médicas asciende al 90,6%. La población tiene que pagar sus gastos de salud casi en su totalidad y su derecho a la salud está directamente relacionado con el nivel de ingresos. Si se tiene en cuenta que los retornados se encuentran entre los grupos sociales más vulnerables, las consecuencias son estridentes. La relación entre su acceso a la salud, su progresiva vulnerabilidad física debido a las carencias alimenticias, las condiciones precarias de salubridad en las que viven y la financiación privada de los gastos de salud, ha obligado a muchas familias a vender sus casas o incurrir en débitos para pagar sus costes médicos.

relacionarse con dignidad e igualdad. La restauración material se produce por la actualización de los cuatro derechos humanos inherentes al derecho a la vida: alimento, vivienda, salud y educación. La restauración emocional se produce por la reconciliación de los retornados con su propio sufrimiento a nivel personal". Ana García Rodicio, *op.cit.*, 2001.

¹⁷ Court Robinson, *Something like Home Again*, US Committee for Refugees, EEUU, 1994; Paul Davenport, Joan Healy y Kevin Malone, *Vulnerable in the Village. A Study of Returnees in Battambang Province, with a Focus on Strategies for the Landless*, World Vision, Phnom Penh, 1995.

– Derecho a la educación:¹⁸ el 75% de los retornados envía a sus hijos en edad escolar al colegio. Aunque la educación primaria en Camboya es gratuita, los gastos privados de educación son elevados debido a que, aparte de los libros, uniformes y material escolar, existen tasas de admisión y otros suplementos. El 84% de los niños camboyanos va a la escuela primaria. Pese a que los retornados están por debajo de este porcentaje, las diferencias son menores. Los retornados hacen esfuerzos extraordinarios para enviar a sus hijos a la escuela debido a que consideran que la educación puede ser una de las únicas formas de salir de la pobreza.

La realización de estos cuatro derechos pone de manifiesto que los retornados son ciudadanos “de segunda clase”. El proceso de retorno ha significado para la mayoría de ellos un proceso de desintegración y desempoderamiento. Esta desintegración progresiva tiene sus raíces en dos factores: la falta de acceso a recursos económicos y la falta de acceso a la tierra de cultivo, la cual determina en gran medida las posibilidades de subsistencia. En cuanto a los recursos económicos, el 85% de los retornados no gana suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El 47% pertenece a la décima parte más pobre de la sociedad camboyanos y el 82% está dentro de las tres décimas partes más pobres de la misma. En relación con el acceso a la tierra de cultivo, el 73% de los retornados no tiene acceso a ella mientras en Camboya el porcentaje de población que no tiene acceso a tierra de cultivo es del 13%.

Desde el punto de vista de su restauración personal, la mayoría de los retornados conforman un grupo social vulnerable dentro de la sociedad camboyanos. La integración en su país de origen no ha sido igualitaria a la población general sino igual a los grupos más vulnerables.

La restauración comunitaria de los retornados

Se refiere al reestablecimiento de las relaciones humanas en el país de origen mediante un proceso gradual de interrelaciones dentro de la comunidad –en sus diferentes niveles: familiar, local y nacional– caracterizado por los valores de respeto e igualdad. Tiene lugar a través de la reconciliación comunitaria.¹⁹

El restablecimiento de relaciones familiares entre los retornados y sus familias en Camboya ha sido difícil y problemático. Una de las principales consecuencias de la guerra ha sido la destrucción del tejido social familiar y el grave impacto negativo en los vínculos familiares e incluso en la concepción de la vida familiar. Un 52% de los retornados no tiene familiares en el mismo pueblo, un 28% en la misma provincia y un 10% no los tiene en Camboya.

La existencia de relaciones familiares es un indicador de reintegración. En términos económicos, la presencia de familia garantiza normalmente la existencia de

¹⁸ El derecho a la educación se refiere al acceso a la educación primaria.

¹⁹ Ana García Rodicio, *op.cit.*, 2001.

redes de solidaridad y la posibilidad de compartir recursos económicos para cubrir las necesidades básicas en casos de emergencias. En términos psicosociales, la recuperación de vínculos familiares ha sido en muchos casos un facilitador para la progresiva recuperación de la confianza necesaria para restablecer relaciones humanas en situación de post-conflicto bélico.

El restablecimiento de relaciones a nivel de comunidad local ha sido débil y, en la mayoría de los casos, determinada por actitudes discriminatorias por parte de las comunidades en las que los retornados se han asentado. Esta discriminación tiene sus raíces en el conflicto camboyano y tiene connotaciones políticas. En muchas ocasiones se identifica al retornado con la facción política que administraba el campo de refugiados del que proviene. Esta situación ha dado lugar a dinámicas comunitarias diversas, en muchos casos conflictivas, influenciadas por factores como la falta de implicación efectiva de los líderes locales en el proceso de repatriación, la inexistencia de espacios sociales comunitarios en el pueblo o la falta de inclusión de la población local en el proceso de retorno.

Con relación a la comunidad nacional, existe todavía una situación general de miedo y reticencia para expresar percepciones de carácter político o nacional, lo que indica que su reintegración dentro de la comunidad nacional ha sido precaria. Ello lo confirman otros indicadores como la percepción de los retornados con relación a Camboya, la participación en los procesos políticos a nivel nacional y los movimientos de migración secundaria con posterioridad a la repatriación. Un 64% de los retornados no es feliz en Camboya, entendida ésta como comunidad nacional. Este dato resulta, a primera vista, contradictorio con la participación de los retornados en los procesos electorales —un 94% en las elecciones de 1993 y un 89% en las de 1998—. Sin embargo, hay opiniones que manifiestan la percepción por parte de los retornados de su exclusión como grupo de los procesos decisivos nacionales en las cuestiones que les afectan como ciudadanos: “Esto no es paz. En el país, el gobierno no considera a la gente más pobre. La gente con pocas influencias, como nosotros los retornados, tiene muchos problemas porque ellos no nos tienen en cuenta, especialmente a los que vivimos tan lejos”.²⁰

La explicación de esta aparente contradicción está relacionada con un sentido fuerte de ideología política existente en los campos de refugiados, así como con uno de los principales objetivos de la operación de repatriación —el regreso de los refugiados al país para votar en las elecciones de 1993—, lo cual tuvo un impacto en la consideración de los retornados acerca de la importancia de participar en los procesos políticos nacionales.

Los datos sobre las migraciones de retornados dentro de Camboya después de su repatriación, son concluyentes: un 54% ha migrado de su lugar de asentamiento inicial después de la repatriación. Las razones de ello incluyen la precariedad económica en la que viven y la consiguiente búsqueda de oportunidades en distintos lugares, el conflicto armado latente en lugares donde los retornados se asentaron inicialmente y las posibilidades de reunificación familiar. Las migraciones secundarias, cuando son forzosas o se producen para sobrevivir, evidencian la falta de reintegración en la comunidad nacional ya que paralizan la

²⁰ Hombre retornado. Provincia de Siem Reap (Camboya). Marzo 2000.

reconstrucción del tejido social y afectan negativamente a las condiciones de vida de los retornados tanto en el ámbito socioeconómico como psicosocial.

Desde el punto de vista de su restauración comunitaria, la mayoría de los retornados camboyanos conforman un grupo social vulnerable dentro de la sociedad camboyanana.

Retornados antes que ciudadanos

La reintegración de los refugiados camboyanos en su país no se ha producido dentro de unos parámetros de dignidad e igualdad social. Esta situación ha implicado que los retornados, como grupo, tengan un sentido de identidad como “retornados” que ha sido reforzado por la lucha común por la supervivencia después de su repatriación y los sentimientos de su exclusión en el ámbito comunitario en Camboya.

Sin embargo, esta situación no puede aceptarse como legado inexorable de la guerra, sino que los retornados camboyanos tienen derecho a ser ciudadanos y a sentirse parte de la sociedad igual que los demás ciudadanos, y no como un grupo social vulnerable. Sólo cuando existan las bases necesarias para que esto ocurra, el proceso de reconciliación en Camboya será viable y el progresivo restablecimiento de las relaciones humanas destruidas por el conflicto podrá ser el camino hacia la verdadera paz, aunque “el camino ha sido largo hasta este momento”.²¹

²¹ Sophany. Phnom Penh (Camboya). Junio 2000.

MÓNICA RAFAEL SIMÕES

Timor Oriental: ¿el fin de la opresión?

El 20 de mayo de 2002, Timor Oriental se convirtió en el primer Estado del siglo XXI. Después de casi tres años de administración de Naciones Unidas, veinticuatro años de ocupación indonesia y cuatro siglos de régimen colonial portugués, Timor Oriental parece, por primera vez en su historia, tener el control de su destino. Sin embargo, la independencia marca el inicio de otra compleja y ardua fase en la trayectoria del pueblo timorense. El análisis de la realidad nacional exige una reflexión seria sobre la sustentabilidad del país. ¿Tendrá Timor Oriental un control real sobre su futuro? ¿Cuáles serán las medidas necesarias para que el país supere la situación política, económica y social extremadamente precaria en la que se encuentra? ¿Qué ocurrirá cuando se termine la asistencia financiera de la comunidad internacional?

La destrucción y la violencia perpetradas por los militares indonesios y por las milicias creadas por ellos tras el referéndum de 1999, junto con la cultura de dependencia y corrupción resultante de la ocupación indonesia y del subdesarrollo heredado de la etapa colonial, dejaron al país en una situación de extrema vulnerabilidad y total dependencia del apoyo exterior para sobrevivir. El periodo de transición hacia la independencia bajo supervisión administrativa de Naciones Unidas no ha sido suficiente para dotar a Timor Oriental de una administración y de instituciones democráticas en pleno funcionamiento, ni ha bastado para restaurar los servicios públicos o para revitalizar la economía nacional. El nuevo Gobierno, presidido por Xanana Gusmão, líder del Frente Revolucionario para la Independencia de Timor Oriental (Fretilin), se enfrenta ahora en solitario a serios desafíos que ponen en duda la viabilidad de esta nación emergente.

Mónica Rafael Simões es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Coimbra, master europeo en Derechos Humanos y Democratización por las Universidades de Pádua y Deusto. Trabaja en el Área de Estudios para la Paz del Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra

Traducción: Pedro Donoso

A partir de cero

El Informe de Desarrollo Humano sobre Timor Oriental, publicado el 13 de mayo de 2002 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela la extensión del subdesarrollo y de las necesidades del país: "Timor Oriental es, sin lugar a dudas, uno de los países menos desarrollados del mundo, que aun sufre por la destrucción y el trauma que siguieron al referéndum nacional por la independencia del 30 de agosto de 1999. El potencial económico del país es muy limitado y, en muchos aspectos, Timor deberá ser construido a partir de cero".¹

Ante este escenario, y basándose en un exhaustivo proceso de consulta al pueblo timorense, el Gobierno ha definido como objetivos prioritarios la reducción de la pobreza en todos los sectores y regiones, y la promoción de un crecimiento económico rápido, equitativo y sustentable.² Este proceso de consulta busca promover un debate nacional sobre la contribución de todos los sectores de la sociedad al desarrollo del país, articulando así las visiones del Gobierno y de la sociedad civil para definir las prioridades, estrategias y políticas del Plan de Desarrollo Nacional. La superación de los desafíos más urgentes, sobre todo durante los primeros años de independencia, va a depender principalmente de la competencia y capacidad de los servicios gubernamentales timorenses. Cualquier debilidad o corrupción de éstos constituirá un grave obstáculo al progreso del desarrollo económico y humano.

Pero, la independencia ha llegado antes de que la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET)³ consiguiera alcanzar los objetivos trazados durante su mandato. Su principal tarea consistió en el desarrollo de instituciones democráticas locales y de un aparato estatal capaces de asegurar el desempeño de las funciones administrativas, judiciales y de servicio público, una vez que Naciones Unidas dejase el territorio.⁴ Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados en las áreas de seguridad, elecciones y Constitución nacional, el proceso de creación de instituciones administrativas fue realizado de forma muy rápida, sin la correspondiente capacitación y fortalecimiento de las estructuras institucionales. Por tanto, el total desarrollo de un servicio civil, de una administración efectiva y de servicios sociales básicos requerirá un plazo de tiempo muy superior al inicialmente previsto.

Una de las tareas más urgentes para el futuro inmediato del país consiste en asegurar el desarrollo de una administración pública competente, capaz de crear las condiciones legales, económicas y sociales fundamentales para la promoción

¹ PNUD, East Timor Human Development Report 2002 – The Way Ahead, Nueva York, 2002, p. 11.

² The World Bank Group, *Statement by Mari Alkatiri on the National Development Plan for East Timor*, Donor's Meeting on East Timor, Dili, mayo 2002b.

³ Consejo de Seguridad, *Resolución sobre el establecimiento de la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental– UNTAET*, 25 de octubre de 1999 (S/RES/1272).

⁴ Mónica Rafael Simões, *A Agenda Perdida da Reconstrução Pós-bélica: O Caso de Timor Leste*, Quarteto, Coimbra, 2002, p. 90. Ver reseña de este libro en la p. 171.

del sector privado y para atraer inversión extranjera. En este sentido, las principales estrategias trazadas por el Gobierno buscan intensificar los esfuerzos para promover la formación y el desarrollo de las capacidades gubernamentales, legislativas e institucionales necesarias para responder a las prioridades identificadas, e implementar estrategias sectoriales específicas para combatir los obstáculos monetarios, sociales, culturales y estructurales del crecimiento económico y para reducir la pobreza.⁵

El éxito de las políticas y los objetivos del Gobierno timorense, al menos durante los primeros años, dependerá del equilibrio entre la creación de las condiciones mínimas de salud, educación y bienestar para un desarrollo real de la población, y la implementación de medidas transparentes y responsables que consigan atraer la inversión directa del exterior en sectores estratégicos como agricultura, pesca, industria y turismo, sin comprometer la independencia nacional.⁶ El desafío de Timor Oriental consiste en fomentar un ambiente propicio al florecimiento de un sector privado próspero, que administre el empleo y el crecimiento económico. La recuperación o creación de infraestructura y servicios públicos implica una participación intersectorial ya que es crucial para la productividad agrícola y para sentar las bases del desarrollo del sector privado.⁷

Políticas sociales de urgencia

La población timorense se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Casi la mitad de ella vive con menos de 0,55 dólares al día. La esperanza media de vida es 57 años.⁸ De acuerdo con la Comisión Nacional de Planificación, apenas el 20% de los timorenses tienen acceso a agua potable y, como las reparaciones hechas por la UNTAET se llevaron a cabo de forma rápida, las calles se encuentran de nuevo en pésimas condiciones.

Las preocupaciones sociales más urgentes son la mejora de los sistemas de salud y educación accesibles a toda la población. Los servicios de salud en Timor Oriental son aun muy precarios, la mayoría de las comunidades rurales no tienen acceso a los cuidados sanitarios mínimos y entre las mayores causas de muerte se hallan múltiples enfermedades evitables. Esta realidad es, en parte, el resultado de la carencia de servicios de salud básicos y de la escasez de profesionales calificados. Es vital tomar medidas urgentes para la prevención del VIH/SIDA, teniendo en cuenta que la pobreza extrema, los niños de la calle, el desempleo y la prostitución pueden provocar la explosión de una epidemia sin precedentes. A pesar de ello, las posiciones intransigentes de la Iglesia timorense en esta materia pueden ser un obstáculo, debido al importante peso simbólico que posee en la sociedad.

⁵ The World Bank Group, *op.cit.*, 2002b, p. 2.

⁶ PNUD, *op.cit.*, 2002, p. 66.

⁷ The World Bank Group, *op.cit.*, 2002b, p. 4.

⁸ Jon Land, "Independence poses new challenges", *Green Left Weekly*, 22 de mayo de 2002.

*Las
preocupaciones
sociales
más urgentes
son la mejora
de los
sistemas de
salud y
educación
accesibles a
toda la
población*

Respecto a la educación, resulta fundamental consolidar los desarrollos alcanzados en la fase de reconstrucción. A pesar de la mejora de la infraestructura, la falta de equipamiento y de materiales de enseñanza, la escasez de profesores calificados, la inexistencia de un *currículum* definido para el sistema educativo y las dificultades asociadas a la reintroducción de la lengua portuguesa, continúan siendo grandes desafíos que demorarán años en superarse. Existe una necesidad inmediata de formar profesores, teniendo en cuenta que Timor Oriental tiene una de las tasas más altas de analfabetismo del mundo (49% de los hombres y 67% de las mujeres). En este contexto, una educación orientada a la formación de recursos humanos vitales será decisiva para reducir la vulnerabilidad de los grupos de población más débiles y para la capacitación de la sociedad.

Estos grupos son los más afectados por la pobreza, que afecta especialmente a niños y viudas. Las mujeres timorensas, además de haber sido objeto de constantes abusos por parte de las Fuerzas Armadas indonesias, se enfrentan ahora con una profunda discriminación en la vida pública y con la violencia doméstica. Esta realidad es un reflejo de la cultura de intolerancia que se vive en un territorio en el que la violencia parece haber sido trasladada desde la insurrección contra el ocupante a la esfera privada, incentivada por los crecientes índices de desempleo y de tensión en la sociedad.⁹ La reducción del analfabetismo, la garantía del derecho de las mujeres a la salud y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todas las esferas, será vital para la reconciliación de la sociedad timorense y para la construcción de una comunidad civil participativa y respetuosa de los derechos humanos.

Reconciliación y memoria

Con la independencia, numerosos timorenses han abandonado los campos de refugiados en Timor Occidental, en los que vivían desde hace casi tres años, para volver a sus casas. Se espera que el Gobierno indonesio, urgido por disminuir el peso financiero que ha soportado durante los últimos tres años, complete hasta agosto los procesos de repatriación de 10.000 refugiados a Timor Oriental, y acomode aproximadamente 10.000 familias de refugiados timorenses que permanecen en Indonesia.¹⁰ La mayoría de los que aun viven en Timor Occidental son antiguos soldados, policías o funcionarios públicos, reacios a abandonar los campos, ya sea por miedo a perder las pensiones indonesias o por recelo a su recepción en Timor Oriental, debido a su pasada colaboración con las milicias.

La reconciliación depende, en gran medida, del trabajo de la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación, creada para averiguar la verdad y para explicar las causas y la naturaleza de las violaciones de los derechos humanos cometidas entre abril de 1974 y octubre de 1999. Asimismo, está ligada a la capacidad del sistema judicial timorense para juzgar adecuadamente los crímenes de guerra y

⁹ Mónica Rafael Simões, *op.cit.*, p. 105.

¹⁰ Ian Timberlake, "Independence no cure-all for East Timorese", *Washington Times*, 1 de junio de 2002.

los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental.¹¹ Resulta fundamental que el trabajo de esta Comisión no se traduzca en la concesión general de amnistías a antiguos miembros de milicias responsables de crímenes graves, ni que oscurezca la necesidad esencial de combate contra la impunidad, ya que el juicio sobre la herencia de las violaciones de los derechos básicos será relevante para fomentar la tolerancia e implementar la justicia económica, social y política.¹²

Una de las lagunas del proceso de reconciliación es la incapacidad de Timor Oriental para juzgar a los principales responsables de los crímenes contra los derechos humanos. La mayoría de los principales perpetradores de crímenes graves continúa en libertad en Indonesia. Si la UNTAET, contando con el apoyo de la comunidad internacional, no consiguió que se cumpliera el Acuerdo de Entendimiento con Indonesia sobre cooperación legal, judicial y de derechos humanos, parece evidente que un Timor Oriental independiente tendrá menos posibilidades para obtener resultados.

A pesar de que una parte fundamental del mandato de la UNTAET consistió en la construcción de un sistema judicial, actualmente la justicia timorense presenta grandes deficiencias. Además de la ausencia de formación y práctica, de experiencia jurídica y apoyo técnico a los jueces y abogados, hay una considerable limitación de recursos humanos y financieros.¹³ Aunque existen edificios rehabilitados, tribunales en funcionamiento y funcionarios judiciales timorenses, las condiciones en las prisiones son precarias, los tribunales carecen de recursos suficientes, el número de casos a la espera de un juicio excede en mucho la capacidad de los servicios y existe una falta general de coordinación y dirección. Sólo los tribunales de los distritos de Dili y Baucau se hallan en pleno funcionamiento.¹⁴

Un nuevo orden jurídico, una economía frágil

El desarrollo de un marco jurídico y regulador es una de las prioridades del Gobierno timorense, debido a que el fin del régimen indonesio creó un vacío en términos legales y de mecanismos aplicables. El sistema legal transitorio instituido seguía el derecho indonesio y estaba sujeto a los principios internacionales de derechos humanos y a las regulaciones de la UNTAET. Los problemas derivados de ello apuntan a las deficiencias en la revisión de las inconsistencias de las leyes indonesias con otras fuentes de derecho, traducción inadecuada de las regulaciones de la UNTAET y la inexistencia de derecho del trabajo, derecho comercial y derecho privado sobre reivindicaciones de tierra y derechos de propiedad. Esta

¹¹ Mónica Rafael Simões, *op.cit.*, cap. 3.

¹² Natacha Meden, "From Resistance to Nation Building: The Changing Role of Civil Society in East Timor", *Development Outreach*, World Bank Institute, Invierno 2002, p. 3.

¹³ Mónica Rafael Simões, *op.cit.*, p. 95.

¹⁴ "East Timor Faces Post-UNTAET Challenges: What is to be done?", *The La'o Hamutuk Bulletin*, mayo 2002, Vol. 3, N° 4, p. 6.

El Gobierno timorense depende exclusivamente de la ayuda exterior para superar la brecha que separa la declaración de independencia, de los primeros beneficios por la explotación de los recursos naturales

incertidumbre legal en áreas tan fundamentales exacerba las tensiones al interior del país, y causa problemas económicos y sociales como la falta de condiciones para la inversión y la corrupción.¹⁵

Otra cuestión que enfrentar es el aumento de las disputas sobre los títulos de propiedad, la mayor parte de los cuales fue destruida o robada por los militares indonesios en 1999.¹⁶ Legislar sobre esta materia es uno de los mayores problemas de derecho civil para el nuevo Gobierno, no sólo para resolver los intereses divergentes entre la población, sino para atraer la inversión extranjera.

El desarrollo económico ha sido casi inexistente. Las perspectivas económicas a corto plazo deben tener presente un desarrollo sustentable, que haga la agricultura más productiva y favorezca otras oportunidades de crecimiento como el turismo y la explotación del petróleo y del gas natural en el Mar de Timor. Según el PNUD, ello se deberá llevar a cabo desde una perspectiva que beneficie claramente al pueblo.¹⁷

Actualmente, el Gobierno timorense depende exclusivamente de la ayuda exterior para superar la brecha que separa la declaración de independencia, de los primeros beneficios por la explotación de estos recursos naturales. Dicha explotación fue garantizada con la ratificación del acuerdo Timor Gap, firmado entre Australia y Timor Oriental el día de su independencia, que le asegura disponer del 90% de sus reservas.

La agricultura da ocupación a la mayor parte de la población y se estima que el café, producido de forma biológica, puede convertirse en el principal producto nacional.¹⁸ El café de Timor constituye una pequeña porción de la producción mundial debido, principalmente, a la inexistencia de inversión en las plantaciones. El gran desafío será atraer la inversión necesaria para estimular la industria cafetera en condiciones que sean beneficiosas tanto para la economía, como para la población y el medio ambiente, transformando, a su vez, la agricultura de subsistencia en una economía de mercado. La agricultura y la pesca continuarán siendo subsidiados por los fondos de la ayuda exterior cuya contribución es todavía insuficiente para responder a las necesidades de los timorenses.

Un tercer elemento que podrá contribuir al desarrollo del país es el turismo, apostando fundamentalmente por el ecoturismo. La viabilidad de esta hipótesis depende de la creación de infraestructura.

A partir de estas tres áreas generando rendimiento, el país necesita inversores. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el escenario económico timorense continúa siendo difícil y considera prioritario la eliminación de obstáculos al desarrollo, en la medida en que las perspectivas de crecimiento eco-

¹⁵ *Ibidem*, p. 7.

¹⁶ Geoffrey Barker, "Conflicting claims in no-man's land", *Australian Financial Review*, 28 de mayo de 2002.

¹⁷ PNUD, *op.cit.*, p. 56.

¹⁸ Catherine Scott, "Development in East Timor – Sustaining momentum in a fragile environment", *Catholic Institute for International Relations*, 10 de mayo de 2002. www.ciir.org/ciir.asp?section=news&page=story%ID=415

nómico y de generación de empleo dependen de la expansión del sector privado.¹⁹

En la última reunión internacional de donantes realizada en la capital, Dili, el 14 y 15 de mayo, en la que se alcanzó un compromiso para contribuir con 360 millones de dólares durante los próximos tres años, representantes del FMI y del Banco Mundial subrayaron la necesidad de una mayor privatización, de un descenso de los salarios públicos y de aumentar los impuestos indirectos.²⁰ Con la independencia, el Fondo Consolidado para Timor Oriental fue disuelto y la mayoría de los donantes se mostraron reacios a dar el apoyo prometido directamente al Gobierno timorense, quedando la tarea de administración de los fondos a cargo del Banco Mundial.

Queda por saber con qué tipo de medidas sociales y económicas se presionará a Timor Oriental para que pueda recibir la totalidad de esta promesa financiera; y qué tipo de consecuencias tendrá en la sociedad timorense la gestión unilateral del Banco Mundial. La mayoría de los proyectos implementados por el Banco en Timor Oriental, al imponer su propia agenda y procesos, crearon problemas de planificación y ejecución, como el empleo de costosos servicios externos, cuando había alternativas locales disponibles. Como consecuencia, se generó lucro para empresas extranjeras en lugar de empleo y capacitación local.²¹ Resulta fundamental que esta joven nación no sea otra víctima más de las políticas económicas de las instituciones financieras internacionales,²² y que consiga promover el desarrollo económico junto con la igualdad, estableciendo como prioridad el cuidado de las necesidades de los más pobres.

Cerca de la mitad del actual presupuesto está dirigido a bienestar social y desarrollo, pero este monto podría ser insuficiente para responder a las enormes necesidades en educación, salud e infraestructura básicas, tal como vivienda, carreteras, electricidad y comunicaciones. Aun así, los líderes timorenses han afirmado que no quieren solicitar préstamos al Banco Mundial, ya que consideran indispensable que el país no inicie su trayectoria con el peso de una deuda externa.

La urgencia de una política externa

Las relaciones de Timor Oriental con Indonesia han experimentado desarrollos positivos a nivel de contactos intergubernamentales. Sin embargo, las recientes reivindicaciones por parte del antiguo ocupante de millones de dólares por los gastos de construcción de infraestructura entre 1976 y 1999, así como por los bienes

¹⁹ The World Bank Group, *Staff Statement of the International Monetary Fund, Donor's Meeting on East Timor, Dili, mayo 2002a*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ The La'o Hamutuk Bulletin, *op.cit.*, p. 14.

²² Cabe recordar que gran parte de los proyectos del Banco Mundial en la estrategia de desarrollo de otros países ha tenido como consecuencia una disminución del bienestar de la mayoría de la población y el fomento de las crisis económica y de la pobreza.

que dejó en Timor Oriental y por las posesiones y negocios que los ciudadanos indonesios dejaron tras el referéndum de 1999, deben inspirar cautela y precaución con vista a futuros entendimientos.

La estabilidad política y regional de Timor Oriental dependerá de su entrada en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), fundamental para asegurar una asistencia económica y establecer relaciones comerciales. A pesar de que su debilidad económica es vista por los Estados miembros más ricos como un obstáculo para su incorporación, parece existir una obligación moral de tratar a Timor Oriental de forma especial, tanto por compasión como por la absoluta indiferencia de la organización antes y durante la crisis de 1999.

Un camino por delante

El futuro de Timor Oriental dependerá, en última instancia, de la actuación del Gobierno, de la transparencia de la gestión de los ingresos de los recursos petrolíferos y del modo como éstos sean invertidos en proyectos rentables. Es fundamental recordar la acentuada vulnerabilidad de este país que nunca conoció estructuras gubernamentales propias. Aquello que los timorenses entendían por gobierno fue siempre una imposición externa, lo que redujo la posibilidad de experimentar una vida democrática. La promoción de un diálogo constructivo entre los ciudadanos y el Gobierno será esencial para la edificación de una democracia real, en la que el proceso de toma de decisiones y la legislación adoptada correspondan a las necesidades del país y de la población.

Ninguna de las medidas descritas funcionará adecuadamente si la nueva Administración no recibe el apoyo continuo que necesita por parte de la comunidad internacional. Será esencial promover medidas de transparencia y de lucha contra la corrupción, especialmente cuando el rendimiento económico aumente y comiencen a ser percibidas las ganancias del petróleo y del gas. La comunidad internacional reconoce la incapacidad de las instituciones timorenses para administrar algunas áreas —especialmente la gestión militar, policial y fiscal— y va a continuar suministrando funcionarios internacionales para el desarrollo de estas labores.

Numerosos obstáculos esperan a este país. Sin embargo, su potencial humano, la fuerza y el coraje de su pueblo, aliado a un Gobierno serio, y el apoyo técnico y financiero consistente de la comunidad internacional, ofrecen esperanzas de que las lecciones de los últimos tres años sirvan tanto al Ejecutivo, como a las agencias internacionales, para dar su apoyo a los primeros pasos de este país y para hacer sustentable su futuro.

Evolución política reciente de Timor Oriental

- 5 mayo 1999 – Portugal e Indonesia, junto al Secretario General de Naciones Unidas, firman los Acuerdos de Nueva York que regulan la consulta popular a los timorenses para votar, o no, por ser una autonomía ampliada dentro del territorio indonesio. Ello serviría de preludio a la autodeterminación. Estos Acuerdos otorgan a Indonesia la responsabilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias en el territorio durante y después de la realización del referéndum.
- 11 junio 1999 – Establecimiento de la Misión Administrativa de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET, S/RES/1246), con mandato para supervisar las actividades de inscripción, campaña electoral, votación y recuento, así como para promover campañas públicas preparatorias a la consulta popular.
- 30 agosto 1999 – Realización de la consulta popular, en la que 78,5% de los timorenses inscritos manifiestan una preferencia abrumadora por la independencia.
- 5 septiembre 1999 – Inicio de la violencia generalizada, provocando la destrucción y el pillaje. Los militares y las milicias indonesias matan, torturan, violan y desplazan a miles de personas indefensas, y fuerzan a UNAMET a abandonar el país debido a la falta de condiciones mínimas de seguridad.
- 15 septiembre 1999 – El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución 1264, autorizando el envío de una fuerza multinacional (INTERFET) para restablecer la paz y la seguridad, amparándose en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. La INTERFET da comienzo a la retirada progresiva de las fuerzas indonesias y crea las condiciones para iniciar el suministro de ayuda humanitaria de emergencia.
- 25 octubre 1999 – El establecimiento de la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET, S/RES/1272), responsable de la completa administración del territorio, marca el inicio de la reconstrucción.
- 2 diciembre 1999 – Creación del Consejo Consultivo Nacional, la primera estructura de asociación entre la UNTAET y los timorenses, que permite que los representantes locales comiencen a participar en la toma de decisiones.

- 2000 – Establecimiento del reestructurado y ampliado Consejo Nacional de Timor Oriental. Repartición de las responsabilidades del Gobierno de transición entre la UNTAET y los timorenses: la UNTAET se hace responsable de los servicios policiales y de seguridad, así como de los asuntos políticos, judiciales y financieros, mientras los timorenses se encargan de las carteras de la administración interna — excepto la policía—, los asuntos económicos, sociales y de política externa.
- 30 agosto 2001 – Se llevan a cabo elecciones para la Asamblea Constituyente de Timor Oriental, el primer órgano timorense con legitimidad democrática autorizado para elaborar y aprobar los 168 artículos de la Constitución de Timor Oriental, con victoria del Frente Revolucionario para la Independencia de Timor Oriental (Fretilin).
- marzo 2002 – Aprobación por la Asamblea Constituyente del texto final de la Constitución de Timor Oriental.
- 14 abril 2002 – Primeras elecciones presidenciales de Timor Oriental, con victoria de Xanana Gusmão con el 83% de los votos.
- 20 mayo 2002 – Proclamación de la independencia de Timor Oriental.

SIRIO LÓPEZ VELASCO

El Movimiento Sin Tierra y el “ecomunitarismo”

El fantasma de la “individualización” no sólo se muestra en los países del viejo capitalismo, donde la soledad intermediada por el mercado condena a la frustración a millones de personas, sino también en los países del Este recientemente llegados al mundo de los negocios.² Si bien la actual tendencia social reduce la capacidad de decisión de los individuos, movimientos sociales como el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil fomentan mediante su lucha el ejercicio de ciertos valores individuales mermados por la sombra de la “individualización”. El “ecomunitarismo” (que predica el respeto por la libertad de acción enmarcada en la toma consensual de decisiones, la solidaridad fundada en la reciprocidad gratuita, y la práctica de una relación ecológicamente sostenible entre los seres humanos y la naturaleza) se plantea como una alternativa a la organización de la vida individual, social y laboral en contra del estilo de vida impuesto.

Es necesario deshacer el equívoco que acecha al vocablo “individualización”. La existencia contrapuesta a la de los otros en el ejercicio de un trabajo que no gusta, inmersa en un consumismo acrítico, determinada por decisiones ajenas, sometida al permanente miedo del desempleo y la falta de seguridad, que caracteriza a la inmensa mayoría de las personas, nada tiene que ver con una placentera autorrealización como individuo. Dicha existencia representa lo opuesto en la medida en que no permite desarrollar las vocaciones personales, ni decidir sobre la propia vida. Para eso están los superbilionarios que a través de las multinacionales controlan tanto dinero como el conjunto del llamado Tercer Mundo. Con la globaliza-

Sirio López Velasco es doctor en Filosofía, profesor en la Universidad Federal do Rio Grande (Brasil)¹

¹ Becario CAPES.

² André Linard, “En el Este: sindicatos en transición”, *Noticias Obreras*, Madrid, diciembre de 2001, N° 1302-1303.

ción capitalista, cada individuo busca abrirse camino hacia la cima de los “ricos y famosos”. Y en Brasil, como en cualquier otro país capitalista, los medios de comunicación de masas hacen propaganda sobre el *self made man* que, llegado a la adolescencia como vendedor ambulante, hoy dirige un imperio. Lo que silencia esa propaganda es el millonario número de vendedores ambulantes que mueren siéndolo después de procrear hijos que también lo serán, sin alcanzar nunca la ansiada meta que incluso la escuela se encarga de recordar insistentemente de manera explícita o implícita.³

En este panorama, del que forma parte la especificidad brasileña de la existencia simultánea de inmensos latifundios y millares de familias expulsadas del campo para vivir de forma infrahumana en las favelas, es donde nace, crece y se consolida como principal organización social popular el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST). Heredero de las Ligas Agrarias ahogadas por la dictadura militar de principios de los años sesenta, el MST ha ido mucho más allá de la demanda inicial de “¡tierra para los que la trabajan!”, que desde Artigas y Zapata une a los campesinos latinoamericanos despojados de comida y de los medios para lograrla. Sin duda, el MST fue influenciado por la experiencia y liderazgo uruguayo, que hasta ahora admira y respeta, cuando al inicio de los años sesenta los trabajadores de la caña de azúcar del norte de Uruguay fueron víctimas de todo tipo de violaciones de la legislación laboral.

Formas de lucha social

La forma de acción del MST tiene relación con la síntesis que el estudioso Ramachandra Guha hace de las diversas modalidades de la lucha popular socioambiental en la India.⁴ El movimiento del Narmada —en oposición a la construcción de la represa del río Narmada— ha actuado simultáneamente en diversos flancos: una fuerte campaña en los medios de comunicación de masas, demandas en los tribunales de justicia y *lobby*. Lo más efectivo ha sido el despliegue de un vocabulario de protesta brillantemente variado en defensa de los campesinos y grupos tribales desplazados por la represa. Estas estrategias de acción directa pueden clasificarse en: la demostración colectiva de poder, evidenciada en las manifestaciones organizadas en las ciudades; el entorpecimiento de la vida económica a través de

³ Muchos maestros dicen a sus alumnos que sólo los bien preparados tendrán su lugar en el “mercado de trabajo”, sin detenerse a pensar que eso significa predicar una existencia contrapuesta a la de los otros y no una compartida con ellos; ni tampoco, que si el “mercado” es un lugar donde por definición se compran y se venden cosas, ese tal “mercado de trabajo” debe ser el espacio de compra-venta de personas.

⁴ Ramachandra Guha se apoya para ello, principalmente, en las experiencias de la oposición a la construcción de la represa del río Narmada, la resistencia a la cesión de tierras de bosques a la compañía KPL en el estado de Karnataka, y en el salvamento de árboles autóctonos del “movimiento de abrazar a los árboles” Chipko Andolan originado en el Garhwal Himalaya en 1973. Ramachandra Guha, “El ecologismo de los pobres”, *Ecología Política*, Icaria/Fuhem, 1994, Nº 8.

actos de protesta más militantes;⁵ la *dharna* o sentada, que puede usarse para impedir el trabajo en una represa o una mina en particular, o rodear a un alto funcionario hasta hacerle escuchar sus reivindicaciones y prometer alguna actuación al respecto; presionar moralmente al Estado en su conjunto.

Lo más preeminente es la huelga de hambre indefinida de un líder carismático de un movimiento popular. Aquí, el coraje y el sacrificio individual se contraponen directamente a la demanda de legitimidad del Estado. Otra técnica, cuyo objetivo también es “avergonzar al Estado”, es de naturaleza colectiva y se trata de llenar las cárceles. Quienes protestan violan la ley pacífica y deliberadamente, esperando ser arrestados y que la imagen del Estado quede perjudicada al encarcelar a multitud de sus ciudadanos. Esas técnicas son algunas de las que componen el vocabulario de protesta del movimiento ecologista, pero las nuevas situaciones requieren novedades.

Una experiencia brasileña de lucha popular socioambiental vinculada al MST, fue la iniciada por Chico Mendes. Éste se opuso a la devastación de la selva amazónica uniendo a los pueblos de la floresta como los trabajadores del látex, los “seringueiros”. La forma de lucha privilegiada por el movimiento fue el “empate”, con características muy similares al *chipko* (abrazarse a los árboles) hindú, que consistía en acudir donde la selva estaba siendo derribada y abrazarse a los árboles, impidiendo la acción de máquinas y hombres. Se creaba así un “atasco” que daba tiempo para que la situación se conociera y, mediante la acción de aliados en la ciudad, lograr que alguna medida legal y/o administrativa fuera adoptada, prohibiendo la continuación de la actividad depredadora aunque fuera temporalmente. El movimiento de los pueblos de la floresta propuso una alternativa para el pseudo-desarrollo devastador: la reserva extractivista. Ésta consiste en mantener la floresta en pie al tiempo que se instaura la explotación ecológicamente sustentable de sus productos, a cargo de las propias comunidades silvícolas.

Después del asesinato de Chico Mendes a manos de un hacendado, las reservas extractivistas han cobrado vida. Actualmente, enfrentan una dificultad de compatibilización con las leyes del mercado capitalista; por un lado, las comunidades participantes no logran una renta decente para sobrevivir; por otro, se cuestiona si una eventual adaptación a las reglas de juego capitalista no significaría una desvirtuación del espíritu socio-ecológico que le dio vida (pasando por involuciones en la forma cooperativista adoptada por ellas en la producción y la distribución). En la actualidad, continúa la penuria en las reservas extractivistas y existe una falta de voluntad política del Gobierno para auxiliar a una alternativa productiva contraria al horizonte de pseudo-desarrollo neoliberal que ha elegido.

El MST, al incorporar en sus filas a ex campesinos hacinados en las favelas y deseosos de volver con sus familias a producir y vivir en el campo, muestra que en Brasil la necesidad imperiosa de la reforma agraria no reviste sólo la levita económica ni la toga de la justicia, sino, además, la revolución económica que supone

*Existe una
falta de
voluntad
política del
Gobierno
para auxiliar
a una
alternativa
productiva
contraria al
horizonte de
pseudo-
desarrollo
neoliberal
que ha
elegido*

⁵ Por ejemplo, la táctica del *hartal* o *bandh* que consiste en obligar a cerrar las tiendas y talleres, sacar a los autobuses de las calles y carreteras paralizando la vida normal, o bloquear las carreteras mediante una gran sentada que a veces dura varios días

producir tierras no utilizadas gracias al trabajo de millones de personas desocupadas. La reforma agraria reivindicada y practicada por el MST muestra su valor demográfico, ecológico, personal y social. A la imagen de los campos vacíos de gente, se contraponen la de las urbes caóticas donde prolifera la agresión, el desempleo y la promiscuidad no querida, para lo que dicha reforma agraria supone el restablecimiento de un equilibrio dinámico entre campo y ciudad.

Desde el punto de vista ecológico, el MST habla de agricultura orgánica destinada a producir alimentos sanos y a proteger la tierra de la contaminación y la desertificación. Varias de sus cooperativas han obtenido importantes éxitos, lo que concreta más aun el eslogan de las acciones del MST: "Ocupar, resistir, producir". Si el "ocupar" se justificaba por el uso social de tierras antes improductivas, y el "resistir" por las agresiones organizadas por los latifundistas que cuestan la vida a algún dirigente campesino, el "producir" gana una clara definición ecológica que alerta sobre que no se trata de producir cualquier cosa y de cualquier manera en cualquier lugar porque sea "rentable" financieramente.

El individuo y el MST

El MST ha reinventado la realización social de los individuos. Antes y después de la conquista de la tierra, la dinámica del MST reubica al individuo en su condición de decisor de su vida y de la comunidad de la que forma parte.

Una vez reunidas las familias que voluntariamente han decidido luchar por la conquista de la tierra, la primera acción del MST suele ser acampar, durante días, meses o incluso años, cerca de una gran propiedad improductiva que se pretende que el Gobierno la desapropie para la reforma agraria. Durante ese tiempo, la escuela de la democracia participativa y solidaria es asunto del día a día; y no sólo a través de la educación no formal que se construye en el cara a cara de las asambleas y las comisiones encargadas de los distintos aspectos de la cotidianidad (como la limpieza, el abastecimiento y la vigilancia), sino también en las escuelas que el MST instala en esas villas provisionales pero "fermentales", gracias al apoyo de maestros voluntarios a los que cada vez sustituyen en mayor proporción profesores diplomados salidos de las filas del movimiento. Tanto en una como en otra escuela se aprende que los seres humanos deben amarse los unos a los otros, y no despedazarse como lobos en la supuesta fatalidad de la "competitividad". También se aprende que cada uno debe contribuir a forjar la decisión colectiva que a todos compromete, y a no dejar en manos de unos pocos reunidos en Davos o Washington la decisión que nos sacrifica a golpes de guerras y contaminación en aras de la ganancia.

Posteriormente, se produce la peligrosa ocupación, siempre visitada por la policía y hombres armados por los latifundistas, a veces bajo el ruido de las balas. Y después, lo más frecuente es que se regrese a la etapa del campamento, hasta lograr la tierra no prometida pero sí conquistada a fuerza de tesón, coraje, entereza personal y solidaridad. Cuando esto ocurre, el MST defiende una de las dos alternativas posibles: ¿encerrarse en la penosa existencia aislada del productor abandonado a su propia suerte, o intentar la aventura de la cooperativa dedicada

a la agricultura ecológica? El movimiento pregona decididamente la segunda, y la gran mayoría, fogueada por años de lucha-escuela, opta por ella.

Cada cooperativa intenta mostrar con sus frutos que, contra la mentada “individualización”, otra vida es posible. Coherente con la existencia solidaria elegida, el MST insta a los cooperantes a no olvidarse de los que aún luchan por la tierra y a aquellos pide militancia personal y contribución financiera; con lo que el ciclo del movimiento se perpetúa y se amplían incesantemente las ondas concéntricas de su repercusión social.

Por supuesto que un movimiento que congrega a decenas de millares de personas, la mayoría proveniente de las capas más castigadas de la sociedad, no está compuesto por ángeles. Pero hasta la gran prensa, en manos de los dueños de Brasil, tiene dificultad para encontrar casos de deshonestidad (venta de la tierra después de conseguida), conducta poco civilizada (borrachera o peleas en un campamento o cooperativa), o abusos de poder cometidos por algún dirigente. Dadas las circunstancias, lo milagroso es que tales casos no sean cotidianos, como sí lo son el hambre, el analfabetismo, la prostitución infantil y tantas otras plagas individuales y sociales para millones de personas que no viven bajo la bandera del MST en el Brasil actual.⁶

Para reforzar la presión, en los últimos años, el MST ha ocupado en las ciudades edificios del Gobierno (especialmente órganos vinculados a la economía y la reforma agraria) y el Banco del Brasil (responsable, en el área pública, por la financiación de proyectos agrícolas). Prácticamente todas las semanas, un ciudadano o dirigente vinculado al MST es asesinado en algún punto del país.

Una alternativa “ecomunitaria”

La lucha del MST ha ganado amplio respaldo social. La “individualización” inicial es superable por esta individualización socio-ecológica solidaria practicada por el MST. Para defender su proyecto, el Movimiento difundió su mensaje en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, a principios de 2002, en el marco de la búsqueda de una reestructuración democrática de Naciones Unidas y en la perspectiva de una alternativa utópica “ecomunitaria” al capitalismo.⁷

Si el trabajo ejecutado-padecido en el capitalismo es la actividad productiva alienada por su condición asalariada, el no-trabajo por el que apuesta el “ecomunitarismo” es lo contrario. El no-trabajo consiste en el desarrollo y libre expresión de las diferentes vocaciones de la persona. El tiempo diario y total de ejecución de esas labores será el mínimo posible según lo exija la satisfacción de las necesidades sociales, y es de suponer que habrá de tender (en especial gracias a los procesos de automatización) a cero. Terminado ese lapso de tiempo comienza el uso absolutamente libre, por decisión individual, de cada día y de la vida, para lo que se quiera, incluido el ocio.

⁶ Las cifras oficiales hablan de 50 millones de miserables en una población total de 170 millones.

⁷ Sirio López Velasco, *Ética de la liberación*, CEFIL, Campo Grande, Edgraf, Río Grande, 1996 y 2000, Vol. I y II.

¿Cómo conciliar las diversas vocaciones con el conjunto de necesidades sociales que deben ser satisfechas? A través del acuerdo consensual de los productores libremente asociados que contraen y renuevan periódicamente su pacto de convivencia.

Una vez establecidas las listas de necesidades y disponibilidades vocacionales, el acuerdo comunitario de no-trabajo es el mecanismo de compatibilización entre ambas. Ese acuerdo se basa en un proyecto preparado por un equipo de integración rotativa y con relevos escalonados para que la experiencia acumulada sea siempre aprovechada, provisto de los apoyos que se revelen necesarios, como propuesta para ser aprobada por el conjunto de los pactantes (o sea, todos los seres humanos con edad superior a, por ejemplo, siete años), los que actúan a su vez como representantes de los seres humanos restantes (de la actual y las futuras generaciones).

Ese acuerdo, tanto en lo relativo al tipo como al tiempo rotativo de actividad, tiene por base la comunidad local (el distrito), pero se integra en macroacuerdos que abarcan sucesivamente espacios mayores, hasta culminar en el planeta entero (y aún extenderse a otros lugares donde están viviendo de forma permanente o temporal, seres humanos).⁸

¿Qué sucede con las ocupaciones necesarias para la satisfacción de necesidades sociales y a las que no corresponde ninguna vocación libremente expresada? Por un lado, esa circunstancia sirve para que los pactantes (a través de los interesados y capacitados) se propongan resolver esa necesidad con mecanismos que puedan prescindir de toda intervención humana (por ejemplo, mediante el uso de máquinas), inventándolos si fuera preciso. Por otro lado, que la "carga" indeseada recaiga de forma rotativa y equilibrada entre todos los pactantes y sus sucesores.

El mismo procedimiento organizativo consensual (con el voto de mayorías como último recurso) se verifica en el plan establecido entre los participantes en la acción de cada uno de los centros y subcentros de actividad formadores de la trama social del no-trabajo.

Las ciencias, sometidas a permanente control ético, y sus aplicaciones no-contaminantes son pilar del no-trabajo desarrollado en el "ecomunitarismo". Pero, el desarrollo de las ciencias no es asunto de una "comunidad científica", como la existente en el capitalismo, sino que es una entre las diversas actividades que una persona puede desarrollar.

La dinámica de acuerdo supone la eliminación de la "orden" del universo laboral y su sustitución por Cuasi-Razonamientos-Causales (CRC)⁹ que establecen las obligaciones asumidas y operan en un contexto donde todo cargo de coordinación-contralor es electivo y rotativo.

⁸ Ese acuerdo planetario renovado periódicamente viene a sustituir la división mundial del trabajo generada de forma a-consensual y anárquicamente a través de las Bolsas que se alternan para operar las 24 horas del día.

⁹ Sirio López Velasco, *op.cit.*

La división social del producto del no-trabajo

El lema del “ecomunitarismo” es “de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”. El producto del no-trabajo corresponde, en su cantidad y calidad, a lo establecido por el censo consensual de las necesidades sociales. A su vez, esas necesidades corresponden al conjunto de lo que precisan los seres humanos actuales y futuros para realizar las vocaciones que no sean incompatibles con vocaciones ajenas y/o de efecto degradante irreversible sobre la naturaleza exterior. Tanto la obtención del producto como su difusión se harán comunitariamente.

El salario ha desaparecido y las necesidades individuales son satisfechas a partir del “fondo económico comunitario”. Ese “fondo” incluye las reservas acumuladas para hacer frente, en base a un plan consensualmente establecido, a eventuales periodos de emergencia, en un mecanismo que significa la apropiación y gestión comunitaria de los resortes actualmente existentes bajo la forma de “stocks reguladores de precios”.

El uso de los servicios se ajusta a este mismo procedimiento planificado por vía consensual existente en el dominio de los bienes de consumo. A su vez, los productos que garantizan la permanencia de esta forma general de producción-distribución como las instalaciones industriales, escolares, recreativas, etc., elaboradas según el pacto establecido, se integran al tejido de la actividad comunitaria en conformidad con el cronograma aprobado.

La dimensión ecológica del “ecomunitarismo”

El comportamiento “ecomunitarista” respecto de la naturaleza está pautado por la norma que prescribe que debemos conservar la naturaleza sana desde el punto de vista productivo.¹⁰ Ese comportamiento tendrá un carácter preservador-regenerador de la naturaleza, resguardándola de toda degradación de su potencialidad productiva.

La producción “ecomunitarista” se realiza única y exclusivamente en base a materias primas y energía renovables y no-contaminantes o, por lo menos, causantes de una contaminación reversible. Esa producción integra la reducción de recursos y residuos, su reutilización, la reversión de los efectos productivos degradantes sobre la naturaleza y el reciclaje de los residuos.

Sobre esa base se abre la perspectiva de desbordar la visión “utilitarista” en lo relativo a la relación entre los hombres y la naturaleza para, en el contexto del desarrollo multifacético de los individuos, establecer e incentivar el re-encuentro lúdico-estético de los seres humanos con la naturaleza. Sería el momento de una reconciliación del hombre con la naturaleza, pero dentro de una relación en la que la mediación productiva entre ambos, a diferencia de lo que acontece en las sociedades llamadas “primitivas”, está dada por una sofisticada tecnología, hecha posible por la aplicación productiva de las ciencias, preservadora-regeneradora del

*El lema del
“ecomunitarismo” es
“de cada uno
según su
capacidad, a
cada uno
según su
necesidad”*

¹⁰ *Ibidem.*

medio ambiente y satisfactoria de múltiples y diversificadas necesidades puestas y resueltas por el desarrollo universal de los individuos.

La única relación admisible para la satisfacción de los deseos es la del consenso y que no contraríe la preservación de una naturaleza exterior sana desde el punto de vista productivo. El entendimiento entre los seres humanos y el desarrollo de la tecnología son los mecanismos que en cada momento histórico habrán de pautar la definición de lo que cabe admitir como “necesidad legítima” a ser atendida por y en la vida “ecomunitaria”.

Desde el punto de vista del “ecomunitarismo”, la actual estructura y funcionamiento de la ONU necesitan ser modificadas. La alternativa propuesta exige una democratización progresiva de la organización internacional, para convertirla en un foro planetario de las comunidades de vida, guiado por la ética “ecomunitarista”.

Movimiento social sin tierra

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) es, sin duda, uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina. Este singular movimiento se gesta bajo la influencia de sectores progresistas de varias corrientes cristianas –sobresaliendo entre ellas la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica–, algunos años después del triunfo sandinista en Nicaragua y de sus efectos potenciadores del movimiento revolucionario en el continente. Brasil vivía aires democratizadores luego de largos años de dictadura militar. Crecían las manifestaciones de descontento popular, destacándose las grandes luchas sindicales de la periferia paulista que dieron origen al Partido de los Trabajadores y luego a la Central Única de Trabajadores.

Esta situación fue desencadenada, entre otras cosas, por la crisis en que había entrado el modelo económico implantado por los militares. Debido a ello, los campesinos desplazados de sus tierras –por la sequía y la pobreza en el Norte y Centro Oeste, y por la modernización capitalista del campo en el centro y sur del país– encontraban cada vez menos posibilidades de trabajar en las ciudades. Por otra parte, por diversas razones, la emigración a zonas de colonización agrícola¹¹ tampoco había resultado una solución. Se hacía cada vez más evidente que la única salida para los campesinos sin tierra era buscar formas de acción que les permitiesen hacerse de ella allí donde vivían, sobre todo si se toma en cuenta que tierras no cultivadas sobran en todas las regiones del país.

Motivadas por esta situación, surgen las primeras tomas de tierra y su éxito hace que se multipliquen con los años. Más y más familias campesinas constatan que sólo con la lucha se consigue conquistar la tierra que necesitaban. La ocupación se transforma en el principal instrumento de presión y en la primera escuela de concientización política y de socialización de decenas de miles de campesinos. El MST ha logrado acumular en este terreno un alto grado de conocimiento práctico: 17 años después de su fundación ha conseguido asentar por esta vía a unas 350 mil familias campesinas y otras 100 mil están distribuidas en unos 500 campamentos esparcidos por todo Brasil, esperando que llegue su día.

Pero el Movimiento es consciente de que no basta conquistar la tierra y asentar a las familias campesinas, sino que hay que crear condiciones para que éstas la trabajen y obtengan de ella un rendimiento que les permita sobrevivir. Sin máquinas, sin semillas, sin créditos, sin conocimientos técnicos que hagan posible aprovechar los adelantos de la revolución tecnológica, sin canales de comercialización para sus productos, la tierra, en lugar de convertirse en un espacio de liberación, se vuelve una pesadilla, y acaba por ser vendida a precios bajísimos o simplemente abandonada. Por eso es que insiste en que la lucha no termina con la conquista de la tierra, que ese es sólo el primer paso y hay que continuar organizados luchando para conseguir los demás objetivos.

Para enfrentar con éxito esta nueva etapa de la lucha es muy importante que los campesinos continúen organizados y articulados dentro del Movimiento. La experiencia ha enseñado que la mejor forma de organizarse en la base es en grupos de 20 a 30 familias. La orientación del MST ha sido que una vez conquistada la tierra se mantuviese este tipo de organización en los asentamientos, y que estos grupos de familia se reuniesen en pequeñas

¹¹ Lugares de frontera agrícola donde el gobierno promovía la instalación de campesinos.

comunidades rurales o "agrovilas", donde las casas quedasen próximas unas de las otras y existiese espacios destinados a los servicios colectivos: escuela, centro de recreación, pequeño parque, jardín infantil, etcétera. Esta orientación, sin embargo, no siempre se ha logrado materializar. En la mayor parte de los casos la tierra se distribuyó en forma individual por orientación del Inca.¹² Esto dio como resultado que las familias quedaran alejadas unas de otras, dificultando la convivencia entre ellas. Por eso hoy el Movimiento está empeñado en buscar soluciones urbanísticas que permitan al campesino vivir en su pedazo de tierra y, al mismo tiempo, convivir colectivamente con un grupo de familias.

Otro desafío que tiene el MST es cómo combinar la existencia de estos grupos de familias –que facilitan la organización y la participación–, con la necesidad de lograr un impacto local que permita, aunque sólo a ese nivel, cambiar las reglas del juego imperantes en el campo. Para resolver esta contradicción ha surgido la idea de lo que algunos llaman "polos de asentamientos". La reunión de muchos asentamientos en un mismo territorio permitiría, entre otras cosas, implementar la idea de crear un mercado popular alternativo en la región con productos de sus cooperativas agrícolas.

Los asentamientos más desarrollados, con sus agrovillas y sus agroindustrias, aunque minoritarios y sujetos a múltiples limitaciones –por estar insertos en un sistema que se mueve por la lógica del lucro–, constituyen verdaderos escaparates de la nueva sociedad justa y solidaria que el Movimiento levanta como horizonte de sus luchas.

Planificar y organizar la producción para garantizar la subsistencia de las familias asentadas y lograr, dentro de lo posible, mejorar sus ingresos no ha sido una tarea fácil ya que muchas veces las tierras que se les han destinado son de baja calidad o están desgastadas producto del mal uso que de ellas han hecho los latifundistas. Por otra parte, estas áreas suelen contar con una infraestructura muy escasa y en mal estado.

Para hacer frente a estas dificultades, el MST ha puesto en práctica distintas formas de cooperación, siendo las cooperativas de producción agropecuarias las formas más desarrolladas. La existencia de un sistema de crédito agrario estatal que favorecía a quienes estaban organizados de esta manera, estimuló la elección de esta vía, pero las dificultades han sido mayores de lo esperado. Aunque en algunos lugares se ha logrado construir cooperativas modelo, la mayoría de ellas ha tenido serios problemas producto de falta de experiencia, de errores cometido y de los límites que le impone el régimen económico imperante. Los créditos fáciles amarrados a un determinado patrón tecnológico propiciaron una mecanización que no se correspondía con las necesidades. Se cayó en el monocultivo para el mercado en lugar de diversificar la producción, lo que creó una excesiva vulnerabilidad frente a las variaciones de aquél. La legislación vigente y las leyes del mercado resultaron trabas complicadísimas.

La combativa actitud de este movimiento ha desatado, como era de esperar, una feroz resistencia de los grandes hacendados brasileños –una de las capas sociales más reaccionarias del mundo–. Han usado todos los medios a su alcance para impedir el avance del Movimiento: desde persecuciones y atentados a trabajadores y líderes, pasando por expulsiones de la tierra a través de pistoleros y cuerpos policiales estatales, asesinato de familias que se dedican pacíficamente a cultivar la tierra, prisión y tortura; secuestros y esclavitud en las grandes haciendas, intervenciones e incendios en sedes sindicales, acusaciones infundadas de asesinato contra personas que ni siquiera han estado en el lugar de los hechos; hasta el exterminio físico de trabajadores, dirigentes y agentes de las pastorales cristianas comprometidos con la lucha por la tierra.

A pesar de los intentos por ignorarlo, aislarlo, reprimirlo, cooptarlo, ahogarlo económicamente, destruir su imagen en los medios de comunicación y desconcertar a su base

¹² Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.

social mediante una sistemática campaña desinformativa, el MST ha logrado crecer y consolidarse como el principal referente nacional de la lucha contra el neoliberalismo, promoviendo la articulación de varios sectores excluidos por el sistema: los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo.

Atacado desde la derecha por su radicalismo es, sin embargo, crecientemente respetado por sectores cada vez más amplios de la sociedad que encuentran en este movimiento la coherencia política y la preocupación por los aspectos ideológicos que con frecuencia falta a los partidos políticos de izquierda. Hay que reconocer, sin embargo, que la ocupación de predios públicos en las ciudades –para buscar una mayor visibilidad a su lucha y presionar por tierra, créditos y otras reivindicaciones–, no es vista con buenos ojos por sectores de capas medias que se dejan influir por las imágenes de desorden que los medios levantan tratando de desprestigiar estas acciones.

Abierto a todas las buenas ideas vengan de donde vengan, cuida con celo su autonomía frente a todas las instituciones. Fuertemente influido por las corrientes religiosas progresistas y claramente comprometido con las luchas reivindicativas de los trabajadores rurales, no se somete a la conducción de nadie. Abogando por el compromiso político de sus miembros, no acepta ser la correa de transmisión de ningún partido de izquierda –aunque una parte mayoritaria de sus miembros vota por el Partido de los Trabajadores y muchos de sus miembros militan activamente en este partido–.

Dos elementos significativos contribuyen a su autonomía: su política financiera y su política de formación de cuadros. En relación con la primera, a diferencia de muchos movimientos y partidos de izquierda que dependen en gran medida de su inserción en las instituciones y de la ayuda externa, el MST se autofinancia. Son los propios campesinos que han logrado la tierra y créditos para trabajarlas, los que sustentan al movimiento con un porcentaje de dichos recursos y una cuota de lo producido. Por otra parte, la puesta en práctica de formas de cooperación en la producción en muchos asentamientos permite liberar cuadros para las tareas militantes del Movimiento. En cuanto a la segunda, el MST entiende que sólo podrá considerarse un movimiento autónomo si es capaz de formar a sus propios cuadros, de ahí su preocupación por crear escuelas de cuadros a distintos niveles.

Su disciplina llama la atención, pero ésta no es el fruto de un estilo de conducción militarista, autoritaria, sino de correctos métodos de dirección. Se evita usar las mayorías estrechas; se apuesta a convencer más que a imponer, se pospone la adopción de decisiones cuando se considera que el movimiento en su conjunto todavía no ha madurado suficientemente para adoptarlas.

Teniendo claro que el eslabón débil de muchos movimientos y partidos es su dependencia de unos pocos dirigentes, busca desarrollar una dirección colectiva muy ligada a la base. Una dirección que usa siempre que sea posible el autobús y no el avión para desplazarse por ese inmenso país, que limita y rota las salidas al exterior de sus miembros para dar a todos iguales oportunidades y evitar así que algunos se transformen en diplomáticos de carrera. Otro aspecto importante es que sus dirigentes –sea la instancia que sea– se someten a evaluación crítica cada dos años, pudiendo renovarse su mandato si el colectivo estima que su aporte sigue siendo valioso para el Movimiento.

Sabiendo que Brasil es un país de grandes contrastes pero comprendiendo, al mismo tiempo, que la articulación nacional de las luchas campesinas de las distintas regiones es clave para hacer frente a quienes se oponen a una reforma agraria radical, busca enlazar las diferentes luchas en un solo haz. Procura, sin embargo, respetar las diferencias tanto entre las distintas regiones como entre sus propios miembros, evitando imponer fórmulas de organización y de acción que no las contemplan.

Es notable, por otra parte, que siendo un movimiento de campesinos y, por lo tanto, teniendo una pesada herencia machista, haya logrado un alto grado de participación femeni-

na en todas sus actividades. En este sentido es ilustrativo que en su máxima dirección 9 de sus 23 miembros sean mujeres y que éstas hayan sido electas por su propios méritos y no por el sistema de cuotas.

Poco a poco, la mujer ha ido ganando un papel protagónico en distintas esferas y espacios, sin que ello afecte negativamente a su familia. Se han ido creando condiciones en los campamentos, asentamientos, cursos y reuniones para que las madres puedan asistir y sus hijos sean atendidos durante ese tiempo. No se ha logrado hasta ahora resolver, sin embargo, el problema de la mujer dirigente de alto nivel, casada y con hijos. De hecho de las 9 compañeras de la Dirección Nacional sólo dos son casadas y no tienen hijos, otro grupo está constituido por mujeres separadas de sus compañeros y otro por madres solteras.

Se trata de un movimiento social con gran fuerza moral y fe en la victoria, que contagia con su alegría y confianza en el futuro a quienes se acercan a él. A mi entender esto tiene que ver con: la seguridad con que se plantea el socialismo como alternativa al actual orden neoliberal capitalista, subrayando sus aspectos utópicos más que las dificultades reales que han vivido los países que se han proclamado socialistas; su férrea decisión de luchar contra las injusticias del actual sistema capitalista, y la confianza que tiene en la capacidad solidaria del hombre. El Movimiento cultiva este lado espiritual de las personas en todas las actividades colectivas que realiza. Es lo que denomina mística. El canto, el teatro, la poesía, la danza, las imágenes, juegan un importante papel junto a los símbolos del MST: su bandera, su himno. Son formas de manifestación de un sentimiento colectivo que une, identifica y fortalece el espíritu de resistencia y de lucha.

A pesar de que le queda todavía un largo camino que recorrer, porque la transformación cultural de su base social –trabajadores rurales educados en el individualismo y con muy bajo nivel cultural– no puede conseguirse de un día para otro, pienso que lo ya conseguido en estos 17 años de lucha constituye, sin duda, una fuente de inspiración y de aprendizaje para movimientos populares que comienzan a abrirse paso hoy, cada vez con más fuerza, en distintos lugares del mundo.

Aunque los campesinos organizados en el MST no hayan conseguido sino parcialmente sus objetivos, unas de sus mayores conquistas ha sido haber logrado la posibilidad de trabajar para sí mismos y no verse obligados a trabajar para otros, haber conseguido garantizar la educación de sus hijos y, lo más importante, haber conquistado la dignidad: hoy se sienten ciudadanos iguales a los demás y no parias de la sociedad.

Marta Harnecker

Este texto pertenece al libro de Marta Harnecker, *Sin Tierra. Construyendo movimiento social*, Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2002.

© Siglo XXI de España Editores, S.A.

Observatorio de Conflictos

Conflicto en Zimbabue

97

CAROLINA MARÍA RUDAS GÓMEZ

Conflicto en Zimbabue

El principal problema de Zimbabue es la falta de una reforma agraria adecuada. Casi 20 años después de su independencia, los 4.500 descendientes de europeos que viven en el país —el 0,03% de la población—, controlan el 70% de la tierra. Robert Mugabe, presidente de Zimbabue desde 1987, ha recurrido a la represión y a la violencia para acallar la oposición e intentado de diversas maneras lograr una reforma agraria, llegando a expropiar por la fuerza las tierras de los blancos.

A partir de 2000, el Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU-PF), partido político de Robert Mugabe, ha visto minada su credibilidad y apoyo popular, mientras que el Movimiento por el Cambio Democrático (MCD) se perfila como una alternativa de Gobierno. Para recuperar el apoyo perdido entre la población rural, el ZANU-PF ha patrocinado y entrenado milicias de veteranos de guerra para ocupar, en muchos casos violentamente, las granjas de los propietarios blancos.

En las elecciones presidenciales, celebradas en marzo de 2002, ganó nuevamente Mugabe. Varios Gobiernos y organismos internacionales han denunciado un fraude electoral, el asesinato de miembros de la oposición y el continuo uso de la fuerza contra granjeros blancos y trabajadores negros.

Orígenes del conflicto: 1890- 1929

Zimbabue fue colonizado por Inglaterra en el siglo XVIII. La colonia, habitada por 700.000 africanos de origen shona y ndebele principalmente, fue gobernada por la Compañía Británica de Suráfrica, dirigida por el magnate de diamantes Cecil Rhodes —de donde proviene el nombre colonial que mantuvo hasta su independencia: Rhodesia—, hasta ser transferida al Gobierno de Gran Bretaña en 1923. Durante casi cuarenta años, la Compañía Británica entregó grandes extensiones de tierra a los colonos ingleses, lo que dio lugar a numerosos con-

Carolina María Rudas Gómez es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes de Bogotá y Master en Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford (Inglaterra)

flictos entre los blancos y la población negra. En la Primera *Chimurenga* (guerra por la liberación), entre 1896 y 1897, los pobladores locales se rebelaron en contra de la usurpación de la tierra por parte de los colonos. Después de arrasar los cultivos y la ganadería de los rebeldes y asesinar a 8000 personas, los colonos crearon un Estado colonial.

A partir de 1905, bajo una nueva política de adjudicación de tierras, se crearon 60 reservas nativas que ocuparon el 22% del territorio y en las que vivían aproximadamente la mitad de la población negra. Los colonizadores británicos impusieron, en muchos casos mediante la violencia, nuevas formas de utilizar la tierra y forzaron a los nativos a trabajar en las fincas, explotándolos y abusando de ellos.

Escalamiento del conflicto: 1930 – 1959

En 1931, el Estado elaboró el Land Apportionment Act (LAA), en el que se diseñó una política racista de distribución de tierras por la que se otorgó un mayor número de hectáreas a los colonos. Asimismo, surgieron problemas demográficos por el incremento tanto de la población autóctona como de la europea. En 1945, la población blanca era de 140.000 personas, mientras que la africana ascendió a 4 millones. En 1955, 55 de las 98 reservas nativas estaban superpobladas. En 1963, bajo el mandato del Frente de Rhodesia (RF), liderado por Ian Smith, se fortalecieron aún más las leyes para proteger las tierras de los colonos.

Entre 1966 y 1979, la Unión Popular Africana de Zimbabue (ZAPU), comandada por Joshua Nkomo, y la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU), liderada por Robert Mugabe, combatieron contra el Estado colonial en una cruenta lucha por la liberación que supuso la Segunda *Chimurenga*. Tanto las Fuerzas de Seguridad de Rhodesia como las guerrillas torturaron y asesinaron a miles de civiles. Alrededor de 50.000 personas, principalmente nativos, perdieron la vida.

Independencia y reformas agrarias: 1980-1999

En 1980, el escalamiento del conflicto armado forzó al Gobierno a negociar. Con el Acuerdo de Paz de Lancaster House finalizó la guerra civil y se llegó al siguiente pacto: la nueva Constitución debería permanecer sin reformar durante diez años y los derechos de propiedad de las granjas comerciales deberían ser protegidos. Bajo estos términos, el Gobierno británico donó 44 millones de libras esterlinas para la redistribución de la tierra, con el impedimento de que el Gobierno sólo podría expropiar tierras a vendedores voluntarios.

En febrero de 1980, se realizaron las primeras elecciones multirraciales, en las que Robert Mugabe alcanzó la victoria convirtiéndose en el primer ministro negro de Zimbabue. En 1983 las tensiones políticas entre el ZANU y el ZAPU, junto con el inicio de una gran sequía, hizo caer la producción agrícola de más

de 2 millones de toneladas (en 1981), a sólo 620 mil. En 1987, Mugabe fue nombrado presidente, posición que ha mantenido hasta ahora. Su Gobierno abolió la legislación racista y reconstruyó la economía, muy afectada tras siete años de guerra. El Producto Nacional Bruto (PNB) creció el 7%, la zafra agrícola anual alcanzó marcas históricas y se registró un alza importante del consumo popular.

Las peticiones de los campesinos negros, que esperaban una reforma agraria, se oponían a las limitaciones impuestas en los acuerdos de Lancaster House que impedían expropiar haciendas de blancos; y a las negativas de los ingleses y estadounidenses de otorgar los recursos prometidos para la distribución de tierras aduciendo que el dinero que habían donado había sido acaparado por políticos corruptos. La Unión de Agricultores Comerciales, formada por blancos y considerada prácticamente intocable debido a que generaba el 90% de la producción agrícola y representaba el 40% de las exportaciones de Zimbabue, bloqueó muchas iniciativas de reasentamiento rural del Gobierno.

La acomodación de la población desplazada se volvió parte integral del problema de la distribución de la tierra, entre otras razones, por el considerable aumento de la densidad poblacional que de 3,9 millones de habitantes en 1982 pasó a 5,1 millones en 1987.¹ Para 1982, el Gobierno planificó reasentar 162.000 familias en 10 millones de hectáreas. En 1990 sólo había adquirido 3,5 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 19% eran de tierra utilizable. Ese mismo año, Zimbabue enfrentó una crisis respecto a la utilización de la tierra, tanto en agricultura como desde el punto de vista ambiental, que propició una alta deforestación y una pérdida general en biodiversidad.

En diciembre de 1987, Mugabe y Nkomo se reconciliaron y crearon el Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU-PF). Desde entonces, y gracias a la alianza de varios diputados blancos con el ZANU, el país se orientó hacia un régimen de partido único.

En 1992, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Mugabe, aprobó el Land Acquisition Act, que permitía la adquisición forzosa de tierras comerciales por parte del Gobierno, provocando las protestas de los propietarios blancos. La falta de fondos necesarios para las indemnizaciones contempladas en la Constitución impidió que la redistribución de tierras se llevara a cabo. Como respuesta al fracaso del Land Acquisition Act, campesinos sin tierra empezaron a ocupar extensiones pertenecientes a políticos, a la elite negra y a colonos blancos.

Veteranos de guerra: 1990-2000

Muchos excombatientes que lucharon en las guerras de independencia fueron víctimas de la crisis socioeconómica y del SIDA, que constituye uno de los principales problemas en Zimbabue. Aunque el Gobierno intentó iniciar una política

*La
acomodación
de la
población
desplazada se
volvió parte
integral del
problema de
la distribu-
ción de la
tierra*

¹ Zimbabue Government Population Census, 1983, 1987.

de compensación para los veteranos durante la década de 1980, ésta demostró ser altamente ineficiente y corrupta. Frente a la incapacidad del Ejecutivo de compensar financieramente a los antiguos soldados, los de mayor experiencia se organizaron en la Asociación de Veteranos de Guerra de Zimbabue (ZWVA). Algunos colonos blancos que habían luchado en la guerra también quisieron ser considerados veteranos, argumentando que deberían tener compensaciones al igual que los negros. Los campesinos, que no habían combatido en la guerra pero fueron sus principales víctimas, buscaron sus propias compensaciones organizándose en la Asociación de ex Detenidos y en la Asociación de los Colaboradores de la Guerra.

En los años noventa, con el objetivo de impedir que los veteranos de guerra se convirtieran en una fuerza política alternativa al partido de gobierno, el Ejecutivo neutralizó el problema a través de la negociación, compensación, deslegitimación y coerción. Se adjudicaron billones de dólares a los antiguos soldados y a las víctimas del conflicto, y se investigó las irregularidades financieras en la Asociación de Veteranos de Guerra minando la credibilidad y poder de este grupo. A los campesinos se les prometió tierra en manos de los blancos a cambio de su voto por el partido de Mugabe.

En noviembre de 1997, el presidente Mugabe anunció que la reforma agraria seguiría adelante expropiando 4 millones de hectáreas sin compensaciones económicas. Al mismo tiempo, hizo un llamamiento al Gobierno británico para que asumiera su responsabilidad financiera en las compensaciones. Un total de 1500 fincas se declararon susceptibles de expropiación. En junio de 1998, mientras Mugabe anunciaba la segunda fase de su programa de reformas, se produjeron las primeras ocupaciones ilegales de granjas por parte de veteranos de guerra. Dicha tensión se vio agravada por un colapso en el dólar de Zimbabue, asociado a la costosa incursión militar en el norte de la República Democrática del Congo llevada a cabo ese mismo año.

En 2000, Mugabe convocó a un referéndum para cambiar la Constitución y legitimar el programa de expropiación de tierras sin compensación. Inesperadamente, el Gobierno perdió. Las violentas ocupaciones de los ex soldados, patrocinados y entrenados por el ZANU-PF, se utilizaron para reprimir y atemorizar a los simpatizantes de la oposición.

En abril de 2001, Mugabe cambió unilateralmente la Constitución para continuar con las expropiaciones de tierra. Desde entonces, las ocupaciones han aumentado en número e intensidad. En los últimos 18 meses, 9 granjeros blancos y 30 líderes negros de la oposición han sido asesinados sin que el Ejecutivo hiciera nada para impedirlo. En agosto de ese mismo año, Mugabe extendió su reforma agraria para incluir 8,3 millones de hectáreas más, correspondientes al 70% de las tierras pertenecientes a los blancos.

La derrota en el referéndum y la existencia de una alternativa real de gobierno encarnada en el Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), hicieron suponer que ocurrirían cambios políticos importantes en Zimbabue. El MCD, un partido laborista liderado por el ex sindicalista Morgan Tsvangirai, obtuvo 57 de los 120 escaños del Parlamento en los comicios de junio de 2001. La mayoría de los simpatizantes del MCD provienen de las principales ciudades (Harare y Buluwayo), mien-

tras que Mugabe cuenta con el apoyo de la población rural que todavía cree en su reforma agraria.

En septiembre de 2001, bajo la dirección de Thabo Mbeki, presidente de Suráfrica, y Olusegun Obasanjo, presidente de Nigeria, la Commonwealth instituyó el Acuerdo de Abuja, por el cual el Gobierno de Zimbabue prometió restaurar el orden y poner fin a las ocupaciones de tierra. En respuesta, Gran Bretaña apoyaría financieramente el programa de redistribución de tierras.

Perspectivas de futuro

A principios de 2002, la última encuesta concedía el 60% de los votos a Tsvangirai y el 40% a Mugabe. Ante estos resultados, el Gobierno de Mugabe inició una campaña de cooptación de votantes por medio de la intimidación y del cambio directo de tierras por votos. Asimismo, obligó a salir del país a los observadores electorales de la Unión Europea.

A pesar de las numerosas condenas internacionales y del amplio descontento popular, el ZANU-PF logró nuevamente la victoria en las elecciones celebradas del 9 al 11 de marzo de 2002, asegurando otro periodo para el presidente Mugabe. La sociedad civil de Zimbabue denunció unánimemente el fraude electoral. La misión de observadores de Noruega declaró que la elección careció de los mínimos criterios globalmente aceptados, encontrándose errores desde el registro de los votantes hasta en la campaña misma. Mugabe y su partido intimidaron y encarcelaron a sus oponentes, persiguieron a periodistas independientes, vetaron a la mayoría de observadores neutrales e impidieron votar a decenas de miles de personas.

Los Gobiernos occidentales condenaron las fraudulentas elecciones, mientras que los líderes africanos expresaron su apoyo a Mugabe. Por su parte, la Commonwealth suspendió a Zimbabue por un año. La UE y EEUU han ampliado las sanciones contra la elite en el país africano. Dinamarca cerró su Embajada en Harare y Suiza anunció que iba a imponer sanciones contra Zimbabue siguiendo los ejemplos de la UE y EEUU.

Las reacciones sobre el proceso electoral todavía son inciertas. La violencia puede incrementarse debido a que sindicalistas y grupos civiles preparan huelgas generales frente a las que el Gobierno ya ha dispuesto ejército, policía y veteranos de guerra. Después del anuncio gubernamental de que se retomarían las expropiaciones, se han reiniciado las invasiones de tierra. El Ejecutivo ha patrocinado la violencia en contra de los miembros del MDC y se ha firmado una ley de censura a los medios de comunicación.

Frente a esta situación, varios organismos internacionales han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas coercitivas más fuertes que obliguen al régimen de Mugabe a convocar nuevas elecciones que contemplen los procedimientos democráticos, se desmovilicen las milicias de veteranos armados controladas por el Gobierno, y se realice una reforma constitucional concertada y acordada con los demás grupos de la sociedad civil para lograr una verdadera reforma agraria.

Actores

Partidos políticos

Unión Popular Africana de Zimbabue (ZAPU)

Creado en 1960 como un movimiento de liberación, sus miembros pertenecían en su mayoría al pueblo ndebele. Cuando Robert Mugabe ganó la presidencia, su líder Joshua Nkomo huyó a Londres. Retornó a finales de 1987 al lograr un compromiso de respeto por su vida y formó un partido común con el ZANU denominado ZANU-Frente Patriótico (ZANU-PF).

Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU)

Se originó en 1963 como una guerrilla marxista nacionalista que buscaba la independencia y la libertad de la población negra. La mayoría de sus miembros forman parte del pueblo shona. Liderada por Robert Mugabe, negoció la independencia de Zimbabue junto con el ZAPU. Al ganar las primeras elecciones multirraciales en 1980, Mugabe se convirtió en primer ministro, para ser elegido presidente en 1987. Ese mismo año formó una alianza con el ZAPU creando el Frente Patriótico. ZANU-PF es el actual partido de gobierno.

Según varias organizaciones internacionales y nacionales, el Ejecutivo de Mugabe ha cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. A pesar de que la distribución de la tierra es su principal reivindicación, no ha logrado una verdadera reforma agraria. Existen indicios y varias denuncias de que el ZANU apoya y patrocina a los veteranos de guerra que ocupan las tierras de los blancos como una forma de realizar una reforma agraria a la fuerza.

Movimiento por el Cambio Democrático (MDC)

El MDC es el partido de oposición oficial en Zimbabue. Nació en septiembre de 1999 a partir de las huelgas organizadas por el Congreso de Sindicalistas de Zimbabue, dirigidas por Morgan Tsvangirai (actual presidente del partido) y Gibson Sibanda (actual vicepresidente). Está apoyado por organizaciones comerciales, la Iglesia, organizaciones de mujeres, derechos humanos y grupos cívicos.

Actores regionales

Suráfrica

Es uno de los países con más interés en encontrar una solución pacífica a la crisis ya que el colapso económico de Zimbabue tiene consecuencias graves para su economía. A pesar de apoyar al Gobierno de Mugabe, actualmente, se han generado confrontaciones entre ambos países debido a los constantes flujos migratorios de personas de Zimbabue hacia Suráfrica.

Nigeria

Junto con Suráfrica, Nigeria fue la principal fuerza del Acuerdo de Abuja. Aunque menos afectada económicamente por la situación de Zimbabue, Nigeria reconoce

la necesidad de mejorar la imagen internacional de África para atraer las inversiones extranjeras. El presidente Obasanjo quiere demostrarle al mundo que a través de un verdadero liderazgo africano es posible resolver los conflictos en este continente.

República Democrática del Congo, Libia, Botswana y Mozambique

Hasta ahora han demostrado su apoyo incondicional al Gobierno de Mugabe, aunque la situación económica en la región supone una fuerte presión que los podría hacer cambiar de posición.

Comunidad internacional

Gran Bretaña

El Ejecutivo británico ha mostrado su descontento con respecto a la reforma agraria de Mugabe. En ausencia de un programa gubernamental conforme a los principios acordados en 1998, manifestó que daría 7.840.800 euros, a partir de 2000, sólo a través de canales no gubernamentales. En Abuja, Gran Bretaña manifestó estar dispuesta a comprometerse financieramente para apoyar la reforma agraria. Mugabe, por su parte, ha acusado a Gran Bretaña de querer restituir de nuevo el colonialismo en Zimbabue.

Unión Europea

En octubre de 2001, la UE dio a Mugabe 75 días de plazo para demostrar su voluntad de cumplir con los compromisos sobre derechos humanos, gobernabilidad, acabar con la violencia política, permitir la libertad de prensa, dar independencia al órgano judicial, finalizar con la ocupación ilegal de propiedades y permitir las elecciones de 2002 de manera justa y transparente. En febrero de 2002, cuando se impidió el acceso a los observadores internacionales para las elecciones, la UE sancionó a los miembros claves del Gobierno de Mugabe.

EEUU

El Ejecutivo estadounidense ha condenado en repetidas ocasiones la violencia política en Zimbabue en 2000 y 2002. En enero de 2001, el Congreso aprobó una enmienda en la que se impedía extender o adjudicar nuevos préstamos a Zimbabue por parte de las instituciones financieras. Para levantar estas medidas, el Gobierno de EEUU pone como condiciones la restauración del orden, el respeto por los títulos de propiedad y un compromiso para lograr una reforma agraria equitativa, legal y transparente conforme a los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Donantes para la Reforma Agraria y el Reasentamiento. En febrero de 2002, EEUU introdujo sanciones similares a las de la UE.

Commonwealth

El 6 de septiembre de 2001 se firmó un acuerdo en Abuja (Nigeria), entre los ministros de Relaciones Exteriores de la Commonwealth y el Gobierno de Zimbabue en el que se reconoció la necesidad de una distribución de la tierra equitativa y

*Mugabe ha
acusado a
Gran Bretaña
de querer
restituir de
nuevo el
colonialismo
en Zimbabue*

transparente. La delegación del país africano aseguró que no habría nuevas ocupaciones de tierra y que la ley y el orden serían restaurados para lograr una reforma agraria. Gran Bretaña, a su vez, reafirmó su compromiso de contribuir de forma significativa a dicha reforma. A pesar del compromiso, la violencia política aumentó y las ocupaciones de tierra no cesaron. Tras las elecciones, en abril de 2002, Zimbabue fue expulsado de los Consejos de la Commonwealth durante un año.

Naciones Unidas

El Secretario General de la ONU ha criticado la línea de reforma agraria propuesta por Zimbabue. En enero de 2002, pidió al Gobierno africano que implementase las acciones prometidas en el Acuerdo de Abuja, incluyendo asegurar la libertad de prensa, admitir observadores internacionales, investigar la violencia política y restablecer la ley y el orden.

Organización para la Unidad Africana (OUA)

La OUA ha apoyado al Gobierno de Mugabe reiterando la demanda de que Gran Bretaña debe cumplir con su obligación colonial de dar financiación al programa de reasentamiento y reforma agraria.

Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC)

Los países miembros de la SADC han apoyado al presidente Mugabe, haciendo énfasis en la necesidad de que Gran Bretaña financie la reforma agraria en Zimbabue. Aún así, y debido a la crisis económica de la región, algunos jefes de Estados pertenecientes a la SADC han criticado la reforma agraria propuesta por Mugabe. En diciembre de 2001, los ministros de Relaciones Exteriores de la SADC manifestaron su oposición a las sanciones colocadas por EEUU y por la UE.

ONG nacionales

ZimRights

Fundada en 1992 como un equipo de activistas de derechos humanos que surge de las comunidades, en la actualidad posee aproximadamente 15.000 miembros. Pretende desarrollar una cultura de derechos humanos entre los individuos y todos los sectores de la sociedad de Zimbabue. Su misión es promover, proteger y defender los derechos humanos en Zimbabue para "empoderar" a las personas a través del trabajo en equipo, programas de educación, apoyo legal y *lobby*.

Amani Trust

La Fundación Amani Trust, creada en 1993, provee servicios para la rehabilitación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente la tortura, violencia represiva y violencia institucional.

Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue

Formada en 1998 por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos

para dar asistencia legal y psicológica a las víctimas de las Huelgas de Comida en enero de 1998. Actualmente también provee asistencia a las víctimas de la violencia organizada.

Otras ONG

Zimbabwe Election Support Network; Zimbabwe Civic Education Trust; Law Society of Zimbabwe; Zimbabwe Lawyers for Human Rights; Media Institute of Southern Africa; Zimbabwe Union of Journalists (ZUJ); Zimbabwe Congress of Trade Unions; Training and Research Support Center (TARSC); Women in Parliament Support Unit (WIPSU); National Constitutional Assembly (NCA); The Commercial Farmers Union Farm Invasions and Security Report; Transparency International Zimbabwe; Crisis in Zimbabwe Committee.

Derechos humanos

Violencia política

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Genocide Watch, han denunciado la organización de milicias por parte del ZANU-PF. Estas milicias, reclutadas, entrenadas y armadas por el ZANU, han asesinado líderes de la oposición, incluyendo a candidatos del Parlamento, y se han unido a los veteranos de guerra para atacar a los opositores del Movimiento por el Cambio Democrático. También han intimidado a granjeros blancos y negros, profesores, periodistas y residentes de áreas rurales que se suponen apoyan al MDC. El Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabwe ha denunciado que en 2000 fueron asesinadas, al menos, 80 personas. En 2001, aproximadamente 48 personas perdieron la vida por motivos políticos. Según varios grupos de derechos humanos, las amenazas e intimidación de trabajadores de fincas aumentaron a finales de 2001 y principios de 2002.

Violencia étnica

El régimen de Mugabe ha cometido varias masacres genocidas. Según un informe de la Comisión de Justicia y Paz en Zimbabwe y la Fundación de Recursos Legales de Zimbabwe, de 1982 a 1983, la Quinta Brigada, compuesta principalmente por shionas, asesinó entre 2000 y 8000 ndebeles al suroeste de Zimbabwe. Los asesinatos masivos fueron asistidos por las milicias shiona organizadas actualmente por el ZANU-PF. Los crímenes incluyeron la muerte de pueblos enteros, violaciones y torturas. Hasta ahora nadie ha sido procesado por estas masacres y los comandantes que las realizaron se encuentran actualmente en altos cargos de las Fuerzas Armadas de Zimbabwe.

Violencia sexual

Según Amnistía Internacional, las milicias patrocinadas por el Estado continúan con asaltos y actos de violencia sexual como una venganza contra la oposición. En enero de 2002, Amani Trust denunció un nuevo patrón de violencia sexual en el que las milicias obligaban a los hombres a violar a mujeres y hombres de su mis-

ma comunidad. También se ha denunciado la violación de mujeres por parte de los milicianos y de soldados del Ejército, así como el forzarlas a realizar actos sexuales en público, como venganza por vivir en una comunidad percibida como de apoyo a la oposición. La Asociación de Mujeres Abogadas de Zimbabue estima que 1000 mujeres han sido capturadas y permanecen en los campos de las milicias.

Violación del derecho a la propiedad

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, toda persona tiene derecho a la propiedad, aunque también está reconocido el derecho a que los Gobiernos adquieran tierras de interés público. La protección efectiva de los derechos sociales y económicos requiere medidas redistributivas, incluyendo disposiciones que no proveen una compensación total del valor de lo que ha sido expropiado. La reforma agraria en Zimbabue no estaría entonces violando el concepto de redistribución pero sí la necesidad de que ésta siga criterios básicos de debido proceso y de no discriminación.

Derecho al debido proceso y a la no discriminación

Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un programa de reforma agraria que discrimina en hecho o en derecho, basado en creencias políticas, comprende una violación al Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo a varios tratados internacionales, las reglas para la compra de tierras deben estar claramente establecidas en la ley, y aquellos afectados tienen el derecho de oponerse y de llevar el caso ante una Corte imparcial y competente.

Derecho a la alimentación

La Organización de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas predijo que, para finales de 2001, en Zimbabue más de 700.000 personas sufrirían una emergencia alimentaria. Amnistía Internacional ha recibido evidencias de que oficiales del ZANU-PF a cargo de distribuir suplementos alimenticios en áreas rurales, están discriminando a aquellos que creen apoyan al MDC. Se ha denunciado que una milicia compuesta por veteranos de guerra controla el mercado de alimentos en Matabeleland, provincia del Norte, requiriendo la tarjeta del partido ZANU-PF antes de dejar a la gente comprar maíz. También se han recibido informes de este tipo en Kwekwe, Norton, Plumtree, Beitbridge, Victoria Falls, Chipinge, Kariba y Tsholotsho, al Norte de la región de Bulawayo.

INFORMACION INTERNET

Datos generales

CIA World Factbook - www.cia.gov/cia/publications
Guía del Mundo - <http://www.guiadelmundo.org.uy>
Foreign and Commonwealth Office - www.fco.gov.uk

ONG locales

Zimbabwe Human Rights NGO forum - <http://www.hrforumzim.com>
Acceso a otras ONG -
<http://www.hrforumzim.com/members/amani/amanitext.htm>
NGO network alliance project - <http://www.kubatana.net/>

ONG internacionales

Centre for Conflict Resolution and the Media Peace Centre -
http://ccrweb.ccr.uct.ac.za/two/9_1/zimbabwe.html
Genocide Watch - <http://www.genocidewatch.org/alerts/zimbabwe200202.htm>
International Crisis Group - www.crisisweb.org
Amnesty International - www.web.amnesty.org

Medios de comunicación

Afrol News - http://www.afrol.com/es/index_netscape.htm
The independent - <http://www.theindependent.co.zw>
The Zimbabwe standard online - <http://www.mweb.co.zw/standard/>
International Human rights newsmagazine - <http://www.hri.ca/cfribune/templates/article>
Africanet - <http://www.africanet.com/africanet/country/zimbabwe/history.htm>
Observatorio Barcelona - <http://observatorio.barcelona2004.org>
Zwnews.com - www.zwnews.com
Allafrica.com - www.allafrica.com
The Daily Newspaper Zimbabwe - www.dailynews.co
Noticias humanitarias - <http://www.irinnews.org>

Gobierno

<http://www.gta.gov.zw/>

Partidos políticos

Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) - <http://www.mdczimbabwe.com/>
Frente Patriótico-Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZAPU-PF) -
<http://www.zanupfpub.co.zw/>

Sindicatos

Unión de Agricultores Comerciales - www.mweb.co.zw/cfu/

Links sobre el conflicto en Zimbabwe

Derechos.org - <http://www.derechos.org/human-rights/afri/#esp>

Derechos Humanos

Country Reports on Human Rights Practices Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor Departamento de Estado (EEUU) - <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/af/852.htm>

Human Rights Watch Informes de Derechos Humanos - <http://www.hrw.org/reports/2002/zimbabwe/ZimLand0302-07.htm#TopOfPage>

Zimbabwe Action Alerts by the Media Institute of Southern Africa - www.misanet.org/zimbabwe.html

Naciones Unidas

“High Commissioner For Human Rights Concerned Over Deteriorating Situation In Zimbabwe,” UNHCHR, January 16, 2002 -

<http://www.unhcr.ch/hurricane/hurricane.nsf/view01/3AE6CD8A9E747C1256B43004B98D4?opendocument>

UNDP Interim Mission Report, January 2002 - www.undp.org/rba/pubs/landreform.pdf

DATOS BÁSICOS

Zimbabue es un país de 390.580 km² situado al sur de África. Limita al Este con Mozambique, al Sur con Suráfrica y Botswana, y al Norte con Zambia. Su territorio está caracterizado por ser una planicie alta, con montañas en el Este. Tiene recursos naturales como carbón, asbesto, oro, níquel, cobre, hierro, vanadio, litio, aluminio y platino. El 7% de su superficie es cultivable, el 13% son pastos permanentes y el 23% bosques. Presenta altos niveles de deforestación, erosión de suelos, degradación de la tierra, polución del aire y del agua y una importante reducción de la fauna, principalmente del rinoceronte negro.

Población: 11.365.366 de habitantes

Tasa de crecimiento poblacional: 0,15% (2001 est.)

Tasa de nacimientos: 24,68 nacimientos/1.000 habitantes (2001 est.)

Tasa de mortalidad: 23,22 muertes/1.000 habitantes (2001 est.)

Tasa de mortalidad infantil: 62,61 muertes/1.000 nacimientos vivos (2001 est.)

Expectativa de vida al nacer: 37,13 años (2001 est.)

Tasa de VIH/SIDA en adultos: 25,06% (1999 est.)

Personas con VIH/SIDA: Zimbabue es el país con mayores tasas de infección de SIDA del mundo. 1,5 millones (1999 est.)

Muertes por VIH/SIDA: 160.000 (1999 est.)

Grupos étnicos: africanos 98% (shona 71%, ndebele 16%, otros 11%), mestizos y asiáticos 1%, blancos menos del 1%

Religión: sincrética (cristiana y creencias nativas) 50%, cristianos 25%, creencias nativas 24%, musulmanes y otras 1%

Lenguas: inglés (oficial), shiona, sindebele y numerosos dialectos tribales

Alfabetismo: 85%

Nombre del país: República de Zimbabue

Tipo de gobierno: Democracia parlamentaria

Capital: Harare

Divisiones Administrativas: 8 provincias y 2 ciudades con estatus de provincia: Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands

Independencia: 18 de abril de 1980 (de Gran Bretaña)

Constitución: 21 de diciembre de 1979

Gobierno: Presidente: Robert Gabriel Mugabe

Economía: Muy débil, con tasas de inflación muy altas (32% en 1998, 59% en 1999 y 60% en 2000). Presenta elevados niveles de endeudamiento externo. La alta incidencia del SIDA ha afectado mucho a la economía. EL Producto Interior Bruto per capita es el doble de las naciones subsaharianas más pobres.

PIB: 28,2 billones de dólares (2000 est.)

Tasa de crecimiento real: -6,1% (2000 est.)

Población debajo de la línea de pobreza: 60% (1999 est.)

Tasa de desempleo: 50% (2000 est.)

Industrias: minería, textiles, cemento, químicos, fertilizantes

Productos agrícolas: maíz, algodón, tabaco, trigo, café, caña de azúcar, y ganado

Deuda externa: 4,1 billones de dólares (2000 est.)

Fuente: <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html>

Mapa de Zimbabue



Fuente: Guia del Mundo

<http://www.guiadelmundo.org.uy/gdm2001/cd/countries/Zimbabue/Map.html>

**Comunicación social y pensamiento
único desde la pedagogía crítica**

113

ERIC JALAÍN FERNÁNDEZ

Comunicación social y pensamiento único desde la pedagogía crítica

Actualmente, en Occidente se observa la implantación de un nuevo analfabetismo funcional: el pensamiento único, que impone sus discursos y su lenguaje a una población con cada vez más dificultades para percibir críticamente las nuevas realidades y pensar el mundo de forma autónoma y colectiva. ¿Cómo pasar de espectadores a actores de la realidad, evitando las estériles y peligrosas derivas del espectáculo y de la violencia? ¿Cómo romper el discurso único y recuperar un verdadero diálogo social abierto y participativo? La pedagogía de la liberación de Paulo Freire, elaborada en los años sesenta y setenta, aporta algunas claves.¹

El método de Freire plantea que el primer e ineludible paso hacia el aprendizaje crítico consiste en la problematización de la realidad. Sólo cuando las situaciones se comiencen a percibir como “problemas”, es decir, cuando los seres humanos se sientan implicados en ellas, sujetos activos de las mismas, se convertirán en desafíos, y por lo tanto se podrá aspirar al compromiso colectivo de transformación de la realidad.

¹ “Los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás es un difícil pero imprescindible aprendizaje”. Ernani María Fiori, “Aprender a decir su palabra: El método de alfabetización del profesor Paulo Freire”, en Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido*, Siglo XXI de España, Madrid, 1978.

Eric Jaláin Fernández es doctorando en Teoría de la Comunicación Social, miembro de la Escuela Popular de Adultos “La Prospe” (Madrid). Autor de la investigación *La otra guerra. La representación de los conflictos armados en los medios informativos*

La no problematización de la realidad conduce a su aceptación sumisa, lo que Freire denomina “pensamiento mágico o ingenuo”. Dicha categoría define la aceptación de los acontecimientos como son porque es lo natural, sin margen para cuestionamientos, ni por lo tanto para la autonomía ni para la acción. El pensamiento mágico es un pensamiento alienado; es lo contrario al pensamiento crítico. Es la socialización del pensamiento único.

Éste es definido por Ignacio Ramonet, principal difusor de esta expresión, como: “La traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial del capital internacional”.² No se trata de un fenómeno nuevo. Hace más de un siglo, Marx y Engels ya planteaban: “Toda clase que toma el lugar de otra que dominó antes, está obligada aunque sólo fuera por alcanzar su objetivo, a representar su interés como interés común de todos los miembros de la sociedad, o sea, para expresarlo en forma idealista, a dar forma universal a sus propias ideas, a presentarlas como las únicas relaciones y universalmente válidas”.³ Es lo que los nazis denominaban *Gleichschaltung* (puesta a punto), o instauración de la conformidad, y que Hitler definió como: “que todo impreso, desde el alfabeto con el cual los niños aprenden a leer, hasta la última revista, todos los teatros y todo el cine, toda columna periodística y toda publicidad sirva a esta única y gran misión”.⁴ El pensamiento único no es más que el intento de eliminación intelectual de cualquier modelo o ideología diferente a la hegemónica, de manera que cualquier alternativa devenga sencillamente impensable. A esta estrategia responde el “fin de la Historia” y el “fin de las ideologías”, proclamados por algunos pensadores neoliberales.

Para el pensamiento mágico los acontecimientos se naturalizan y los procesos aparecen como inevitables; es el triunfo del esencialismo y del fatalismo. En consecuencia, el neoliberalismo deja de percibirse como una opción política e ideológica más, con actores e intereses detrás (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, multinacionales) y es aceptado como un fenómeno natural cuyo avance es imparable. Las migraciones masivas se transforman en oleadas sin historia, irracionales, catastróficas. La violencia bélica o terrorista parece emanar de la esencia violenta de determinados pueblos, religiones o culturas, ocultándose los intereses económicos, geoestratégicos y de poder que la originan. La teoría del “choque de civilizaciones” pretende naturalizar en una mística fatalista (en la que el islam pasa a encarnar la esencia del Mal) los conflictos derivados del dominio y explotación del Sur rico en recursos como el Magreb, Oriente Medio y el sudoeste asiático.

La aceptación conformista y fatalista de la injusticia, la miseria y la guerra como procesos naturales que nos son ajenos aunque los suframos, en lugar de como problemas que nos plantean desafíos, es la base del pensamiento mágico o único. Pero, ¿cómo se reproduce y socializa éste?

² Ignacio Ramonet, “Pensamiento único y nuevos amos del mundo”, en Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, *Cómo nos venden la moto*, Icaria, Barcelona, 1997, p. 58.

³ Karl Marx y Friedrich Engels, *La ideología alemana*, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 52.

⁴ Dirk Haubrich, “La propaganda política en la Alemania nazi: Ideología y reproducción del nacionalsocialismo”, *Voces y Culturas*, 1996, I semestre, Nº 9, p. 99.

Cuando el discurso se impone al diálogo

Existe un paralelismo entre el sistema educativo y los medios de comunicación de masas, siendo posiblemente las dos instituciones de socialización con mayor peso e incidencia en la actualidad. La educación formal es un tipo de comunicación, y la comunicación masiva, en la medida en que interpreta y valora la realidad, tiene mucho de formativa. Ambas se organizan y gozan de autoridad para aportar representaciones y valoraciones sobre el mundo y la realidad.

Freire critica duramente el establecimiento en la escuela de “relaciones de naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertante. (...) Narración o disertación que implica un sujeto —el que narra— y objetos pacientes —los educandos—. (...) el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es ‘llenar’ a los educandos con los contenidos de su narración”.⁵

Es lo que Freire denomina “educación bancaria”, que concibe a los seres humanos como: “espectadores y no recreadores del mundo. (...) Esta concepción ‘bancaria’ de la educación considera que el papel del educador es el de disciplinar ‘la entrada’ de los contenidos y conocimientos del mundo de forma ordenada y coherente. Su trabajo será imitar el mundo; ordenar lo que ya se hizo espontáneamente. Desde este planteamiento, cuanto más adaptadas estén las personas, tanto más educadas serán, en tanto adecuados al mundo.”⁶

Basta sustituir educación por comunicación, educadores por informadores o comunicadores y educandos por receptores, para incorporar estas reflexiones a una crítica de la comunicación social desarrollada por los medios de comunicación masiva.

La comunicación consiste en una puesta en común de información, por lo tanto se trataría de un intercambio, de una interacción. Esto se verifica en gran parte de la comunicación interpersonal y de la colectiva a pequeña escala, donde los actores adoptan sucesivamente los roles de emisores y receptores, modificando así sus representaciones y las de sus interlocutores. Negocian colectivamente las interpretaciones de la realidad estableciendo diálogos. Se trata de una relación multidireccional y tendencialmente horizontal, abierta, recíproca y participativa.

Esto no es posible en la comunicación mediática masiva tal y como está planteada. Ésta establece un modelo comunicativo “bancario” (discursivo, no-dialógico), jerarquizado (vertical, autoritario) y poco accesible (no participativo). Los roles comunicativos en la relación mediática se cristalizan jerárquicamente, puesto que una elite profesional y empresarial cuasi monopoliza la producción y difusión de comunicación mientras que la mayoría de la gente es relegada a ser receptora, sin acceso a los canales informativos ni control sobre ellos.⁷ La sociedad carece de

*Los roles
comunicativos
en la relación
mediática se
cristalizan
jerárquica-
mente:
una elite
profesional y
empresarial
cuasi
monopoliza la
producción y
difusión
mientras que
la mayoría de
la gente es
relegada a
ser receptora*

⁵ Paulo Freire, *op. cit.*, p. 75.

⁶ *Ibidem*, pp. 82-83.

⁷ Aunque nada impide formalmente a cualquier ciudadano o grupo fundar y mantener su propio medio de comunicación, la realidad es que la comunicación masiva actual es tan compleja y tan costosa en términos financieros que tan sólo queda al alcance de unas pocas grandes corporaciones y de los Estados. En la actualidad, el valor de una multinacional mediática competitiva en el mercado global puede alcanzar cifras tan astronómicas como entre 1,5 y 3 billones de pesetas. Robert W. Mcchesney, “The political economy of global media”, *Media Development*, 1998, N° 4, pp. 3-8.

participación en medios masivos a través de los que difundir mensajes y representaciones con incidencia pública. Se dificulta un verdadero diálogo social, imponiéndose los monólogos de poder y los diálogos entre las elites.

Sin embargo, “la intersubjetividad, o la intercomunicación es la característica primordial de este mundo cultural e histórico”, y “la comunicación implica una reciprocidad que no puede romperse” pues “el sujeto pensante no puede pensar solo: no puede pensar sin la coparticipación de otros sujetos”, afirma Freire.⁸ Si ser humano es pensar, para ello hay que comunicar, o mejor dicho, intercomunicarse, pues sólo el diálogo humaniza. Una comunicación social discursiva, como la mediática, es tendencialmente alienante.

El pensamiento único no es más que la imposición del discurso frente al diálogo. ¿Supone esto el fin de la participación social en la comunicación pública?

Incomunicación, espectáculo y violencia

El sistema mediático priva a casi toda la población de la posibilidad de desempeñar el rol de actor de la comunicación pública, si entendemos por actor aquel que interactúa (en este caso, comunicando) y que por lo tanto puede ser indistintamente emisor y receptor de información. Pero aunque la interacción desaparece, la relación comunicativa no se rompe sino que se jerarquiza, pues si bien los receptores pierden su calidad de actores (pues no pueden ser emisores ni productores), conservan la de sujetos de la comunicación (como receptores o consumidores). Se transforman así en opinión pública, y por lo tanto en interlocutores mudos a los que los medios dirigen sus mensajes.

Los medios de comunicación, como mediadores, no pretenden asfixiar la interacción social sino controlarla y dirigirla. La población ve drásticamente reducido su poder de construcción simbólica de la realidad, aunque conserva cierto poder de acción social. La audiencia puede boicotear aquellos productos comunicativos que le disgusten. Ciertos grupos pueden llevar a cabo acciones que les permitan puntualmente convertirse en pseudo-actores de la comunicación, y aprovechar este efímero protagonismo para emitir sus discursos y comunicados.

Pero esta azarosa vía para utilizar los medios como difusores no está exenta de peligros. Si una de las características clave de la información mediática es la búsqueda de la espectacularidad, el precio a pagar por los actores sociales interesados en ocupar unos minutos de telediario o unas líneas de periódico, es la espectacularización de sus mensajes, e incluso de sus prácticas, proyectos y planteamientos. Además, en un espacio y tiempo escasos, no se puede establecer un diálogo, ni tan siquiera desarrollar discursos mínimamente enriquecedores. Tan sólo caben consignas, eslóganes, fragmentos de comunicados. Como apunta Bourdieu, refiriéndose al drástico racionamiento de tiempo informativo, “impone al discurso tantas cortapisas que resulta poco probable que pueda decirse algo”.⁹

⁸ Paulo Freire, *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural*, Siglo XXI de España, Madrid, 1985, pp. 73-75.

⁹ Pierre Bourdieu, *Sobre la televisión*, Anagrama, Barcelona, 1998, p. 19.

La violencia es el espectáculo que más vende. Ser violento normalmente deriva en una mayor relevancia e incidencia pública. Habida cuenta de las dificultades para acceder a la esfera pública, la vía violenta espectacular se convierte en el atajo estratégico más atractivo. La “invisibilidad” mediática de las alternativas sociales pacíficas y dialogantes refuerza el fatalismo, como plantea el investigador sueco Johann Galtung: “Este puede ayudar a engendrar aun más violencia, cuando la gente no recibe imágenes ni información sobre posibles soluciones pacíficas ni sobre propuestas conciliadoras”.¹⁰

Los grupos terroristas, con sus acciones armadas, no buscan tanto una victoria militar, como irrumpir en la agenda de los medios, de manera que multiplique su impacto público y, en consecuencia, su potencia política para negociar. La opción terrorista suele ser elegida por su enorme rentabilidad mediática y simbólica. Aún siendo conscientes de que no basta con ser vistos para ser comprendidos, pues la dimensión profunda y el contexto de su conflicto rara vez serán traducibles a rápidas imágenes de actualidad, algunos entienden que es preferible ser “mal vistos” que pasar desapercibidos.

Algunos anarquistas decimonónicos consideraban los atentados y magnicidios como actos comunicativos, parte de la “propaganda por el hecho”. Las Brigadas Rojas italianas entraron en los años ochenta en una espiral de enfrentamiento-represión que les hizo derivar hacia una pedagogía de la violencia resumida en su terrible consigna: “Golpear a uno para educar a mil”. Esta didáctica violenta busca con sus atentados romper el silenciamiento de los medios e instrumentalizarlos como difusores amplificadores. La intelectual comunista Ulrike Meinhoff escribía en 1967: “La coraza de silencio impuesta en los medios de opinión pública a cualquier idea contestataria es rota solamente por acciones audaces e inteligentes de pequeñas minorías”.¹¹ Entre los años ochenta y noventa, el estadounidense Theodore Kaczynski envió decenas de cartas bomba a empresarios e investigadores en nuevas tecnologías. Una vez captada la atención mediática, culminó su campaña con el envío a los medios de un extenso manifiesto político de corte libertario individualista titulado *The Industrial Society and Its Future*, publicado íntegramente el 15 de septiembre de 1995 por dos de los diarios estadounidenses más importantes: el *New York Times* y el *Washington Post*. De haber enviado este documento antes que las bombas, no hubiera recibido difusión alguna, lo que sin duda da que pensar sobre las implicaciones de la fascinación mediática por la violencia.

La simbiosis de espectáculo mediático y violencia política genera una “espiral viciosa”. Por lo general, los medios carecen de tiempo y disposición para contextualizar adecuadamente la violencia armada. Deslumbrados por la espectacularidad de los atentados, no pueden evitar caer en una doble contradicción: magnifican estas acciones, cumpliendo la función de extender el terror que generalmente condenan duramente; y, por otro lado, despojan a sus representaciones de cualquier elemento que permita comprender el origen de esta violencia política extre-

¹⁰ “Violence in the media: twelve ways media mispresent violence”, *Action*, noviembre 2001, N° 239, p. 2.

¹¹ *Konkret*, 1967, N° 5

*Habida
cuenta de las
dificultades
para acceder
a la esfera
pública, la
vía violenta
espectacular
se convierte
en el atajo
estratégico
más atractivo*

ma, dificultando con ello la apertura de perspectivas de soluciones reales más allá de la represión.

Los sectores sociales que recurren al espectáculo público, violento o no violento, para irrumpir en el escenario mediático, corren el riesgo de superficializar tanto su postura que quede hueca y artificiosa. Pero, sobre todo, se arriesgan a que su intervención en el diálogo social derive contradictoriamente hacia la emisión de discursos, reducidos a sus más mínimas expresiones: consignas y retazos de comunicados y de panfletos mediatizados. Así recaen en la misma comunicación bancaria y discursiva que tanto critican.

¿Qué hacer?

La mejor forma de abordar y socializar la comunicación social es la lectura crítica, desmitificación y deconstrucción de los discursos mediáticos.

Es necesario una nealfabetización para aprender a descodificar y analizar críticamente la compleja retórica y funcionamiento mediáticos (lenguaje, estructuración textual, uso de fuentes de información, organización, propiedad y estructura empresarial). Para ello, convendría recuperar las dinámicas “freirianas” de los “círculos de cultura”, centrados en el aprendizaje, debate y acción colectiva. En la educación de adultos, estos círculos funcionarían con la máxima horizontalidad (sin profesores o con un coordinador) y consistirían en la lectura colectiva y crítica de noticias, acompañada de debate, investigación y acciones participativas. Esta lectura dialogada permite reforzar la capacidad de análisis y crítica de cada receptor, ampliar y complementar información, y adquirir autonomía con respecto a los discursos del pensamiento único. En cuanto a la educación infantil y juvenil, urge incluir en el *currículum* escolar un primer acercamiento básico y crítico a la comunicación social y mediática en sus aspectos teóricos, técnicos y lingüísticos.

Pero esto no es suficiente, pues aunque críticos, seguiríamos dependiendo altamente de los medios (de su agenda y de su selección temática) para informarnos. Por otro lado, continuaríamos sin apenas poder expresarnos públicamente, sin ser comunicadores sociales. Para ello hay que crear redes de comunicación alternativas en lo local y global, y socializar la tecnología comunicacional más accesible, participativa y potencialmente descentralizadora. En el ámbito local resultan muy valiosas las experiencias de las radios libres europeas durante las últimas dos décadas. Las nuevas herramientas informáticas de edición a pequeña escala permiten igualmente la producción sencilla y a bajo coste de boletines, publicaciones e incluso documentos audiovisuales de contrainformación. En lo global, internet es una herramienta tremendamente accesible, económica y ágil para intercomunicar libremente a los actores y movimientos de la sociedad civil.

El objetivo sería doble: tejer una densa red comunicativa paralela (y no mercantilizada) que difundiera aquella información silenciada por los medios masivos; y asegurar el acceso y participación social más amplia posible en la misma. De esta forma, se lograría difundir información alternativa al pensamiento único y abrir espacios de expresión y diálogo social.

Resultaría necesario desarrollar también una segunda dimensión de este nuevo modelo de comunicación social, pues incluso la comentada red de medios descentralizados y horizontales corre el riesgo de derivar hacia derroteros discursivos y panfletarios, quedando en manos de una elite intelectual, especializada y politizada, si no es continuamente reforzada por un denso tejido de diálogo social a todos los niveles. Urge recuperar formas y espacios de comunicación colectiva no mediada, en agónica extinción debido a la desestructuración urbana y laboral. Fomentar la creación de espacios sociales de encuentro (libres del mercado y de la tutela estatal), resucitar el asociacionismo, la convivencia barrial, el trabajo de base y cotidiano; éste es el auténtico caldo de cultivo del diálogo social y de la verdadera democracia directa y participativa.

La labor de base y cotidiana, aunque más lenta y trabajosa, previene contra derivas espectaculares, elitistas y sectarias. Tampoco se trata de que el activismo social ignore a los medios masivos, pues la implantación popular de estos es enorme e ineludible, sino de dotarse de medios propios y participativos, y de no basar la acción social y política en función de la atención de los medios masivos. Si los movimientos sociales disponen de sus propios medios de comunicación y del respaldo de una base y diálogo social sólidos, pueden imponer a los medios masivos sus condiciones y prerrogativas como verdaderos actores de comunicación, y no a la inversa.

Conviene recordar la sugerente propuesta de los activistas antiglobalización: "No odies a los medios, conviértete en los medios. Otra comunicación es posible".

Lecturas sobre educación

LIBROS SOBRE VIOLENCIA EN LA ESCUELA

En los últimos años, la preocupación social por el fenómeno de la violencia en la escuela se ha incrementado alcanzando protagonismo no solo en los medios de comunicación, sino también en relación con la puesta en marcha de políticas educativas desde la Administración. La comprensión del fenómeno se ha realizado a partir de diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, generando aproximaciones conceptuales y actuaciones de intervención socio-educativas. Con el fin de tener una perspectiva amplia sobre el tema de la violencia en la escuela, en este texto se hace referencia a publicaciones elaboradas desde la Psicología, la Pedagogía, y la Educación para la Paz, siendo algunas las más representativas. Desde la Psicología, gran parte de los autores revisados han centrado su atención, principalmente, en un tipo de violencia que se presenta con frecuencia en los centros educativos: la agresión entre compañeros. También se refieren al maltrato entre iguales como el resultado de la interacción entre estos y otros factores que surgen de diferentes contextos en los que vive el individuo como la familia, la escuela, el grupo de amigos o los medios de comunicación, recursos educativos, culturales, etc. Uno de los autores que se destaca en esta disciplina es Dan Olweus,

catedrático de Psicología de la Universidad de Bergen (Noruega). Fue uno de los pioneros en investigar sobre este tema en Europa. Sus estudios han sido modelo de investigaciones desarrolladas en otros países europeos. En su libro *Conductas de Acoso y Amenazas entre Escolares*¹ define el maltrato entre iguales como la situación en que un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida e intencionada, a acciones negativas como amenazas, burlas, poner motes, etc. Además, describe las características generales de las víctimas y de los agresores, así como los posibles indicios de estos en la escuela y en la familia. También presenta los estudios realizados en centros educativos de diferentes países escandinavos en etapas de primaria y secundaria; un programa de intervención para aplicar en la escuela a través de actuaciones para desarrollar en el centro, el aula; y medidas individuales para intervenir con los agresores, las víctimas y los padres de los implicados. Otro autor que ha analizado el tema de la violencia en la escuela, junto a su equipo de trabajo de la Universidad de Sevilla, es Rosario Ortega. La primera parte de su publicación *Educación para la convivencia para prevenir la violencia*,² ofrece una visión sobre el problema de la violencia

¹ Olweus, *Conductas de Acoso y Amenazas entre Escolares*, Morata, Madrid, 1998.

² Rosario Ortega, *Educación para la convivencia para prevenir la violencia*, A. Machado Libros, Madrid, 2000.

escolar, dentro del análisis de las relaciones interpersonales de los alumnos en el aula. Define el fenómeno de agresividad y violencia entre iguales, haciendo referencia a uno de los modelos que se aprenden en el ámbito de los iguales, el esquema dominio-sumisión, en el que una persona está sometida por parte de sus compañeros a una relación de poder y control. Al igual que Olweus, presenta los estudios europeos realizados sobre el tema, pero además incluye un resumen de las investigaciones elaboradas en España, lo que permite conocer cómo se ha abordado y manifestado el fenómeno en el país.

En la segunda parte, presenta un modelo de prevención de la violencia que se articula en tres programas: el de trabajo cooperativo, gestión democrática y el programa de educación de sentimientos, actitudes y valores. También da a conocer otros modelos como son el de autoformación del profesorado, el proyecto medio ambiental para educar la convivencia y las alternativas que ofrece para incorporar a los padres y madres del centro en un proyecto anti-violencia.

En la tercera parte del libro, aborda el tema de la intervención directa con alumnos y alumnas en riesgo de padecer o provocar la violencia entre sus compañeros; y se proponen estrategias, desde el enfoque del aprendizaje social, tanto para desarrollar con los propios compañeros como para realizar con el orientador del centro. Como contribución de esta publicación se puede destacar el

modelo de intervención que plantea mejorar la convivencia, a través de las relaciones interpersonales entre los grupos que forman parte del centro: el profesorado, el alumnado, las familias.

Otra publicación importante dentro de la Psicología es la realizada por el defensor del pueblo: *Informes, Estudios y Documentos. Violencia Escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria*.³ Este libro representa el primer estudio sobre la incidencia de los diferentes tipos de maltrato entre iguales realizado en España. En la primera parte se presenta una revisión de las investigaciones e intervenciones realizadas en países europeos. Además, realiza un análisis amplio de los modelos de intervención en el ámbito educativo, incluyendo las actuaciones llevadas a cabo en España. Éstas significan un aporte fundamental, en tanto que permiten conocer las diversas experiencias pedagógicas y psicológicas que se han desarrollado, dirigidas no solo a los implicados, sino también al contexto que los rodea, el centro, el aula y la familia. Presenta una aproximación al tratamiento jurídico de la violencia contra menores en relación a la violencia escolar.

En la segunda parte, da a conocer el estudio en los centros de educación secundaria, la metodología de la investigación y el análisis de los resultados. En estos se determina el grado de las diferentes modalidades de maltrato (físico, verbal, social),

³ Defensoría del Pueblo, *Informes, Estudios y Documentos. Violencia Escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria*, Madrid, 2000.

tanto desde el punto de vista de las víctimas como de los agresores y testigos. Describe también las circunstancias en las que se produce el maltrato desde la perspectiva de estos tres agentes; y los escenarios en los que se dan las acciones de maltrato en el contexto del centro educativo. Sintetiza las estrategias de comunicación y resolución de conflicto a que recurren quienes lo protagonizan, así como el papel del profesorado en la detección y resolución del problema. Éste es un aporte fundamental de este estudio, en la medida en que se involucra la visión del docente en situaciones habituales que ocurren en los centros educativos.

Y en la tercera parte ofrece las conclusiones y recomendaciones para orientar las actuaciones preventivas y correctivas tendentes a erradicar la violencia entre alumnos en el ámbito escolar.

Otra psicóloga española que ha abordado el tema de la violencia en la escuela es María José Díaz Aguado, catedrática de la Universidad Complutense, quien elaboró los *Programas de Educación para la Tolerancia y Prevención de la Violencia en los Jóvenes*.⁴ La publicación de estos programas consta de 4 tomos y dos vídeos. El primer tomo presenta la fundamentación psicopedagógica y las condiciones básicas del programa. El estudio que presenta esta autora tiene como punto de partida el análisis de las causas que pueden conducir a la intolerancia y la violencia en los jóvenes.

En el segundo tomo ofrece las pautas y unidades de

intervención describiendo los principios, actividades y materiales que, según las investigaciones realizadas, han demostrado ser eficaces para prevenir la violencia desde la educación secundaria. Se presentan 7 unidades temáticas entorno a las cuales se concreta la intervención: 1) racismo e intolerancia, 2) violencia, 3) perspectiva intercultural, 4) inmigración y refugiados, 5) derechos humanos y 6) democracia.

En el tercer tomo se ofrecen una serie de materiales de apoyo para trabajar en el aula con los que llevar a cabo las actividades propuestas, entre los que se pueden encontrar textos científicos y literarios, declaraciones históricas y artículos de prensa.

En el cuarto volumen se recogen los estudios realizados sobre estos programas que han permitido comprobar la eficacia de estos y del modelo de formación de los profesores. Los instrumentos de evaluación que se incluyen permiten determinar la situación de los alumnos para adaptar los programas a dicha situación y evaluar el progreso producido al aplicar estos.

Los dos vídeos que acompañan estos tomos son un curso de formación del profesorado a través del cual se desarrollaron los programas, y el otro son documentos audiovisuales relacionados con sus unidades temáticas para aplicar en las actividades con los alumnos. Esta publicación, al igual que la anterior, ofrece actuaciones de intervención, principios

⁴ María José Díaz Aguado, *Programas de Educación para la Tolerancia y Prevención de la Violencia en los Jóvenes*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Juventud, Madrid.

democráticos utilizando técnicas cooperativas para favorecer la convivencia en los centros, y para el aprendizaje de actitudes positivas hacia los otros. Por otra parte, se puede destacar que los programas *Educación para la Tolerancia y Prevención de la Violencia en los Jóvenes* contribuyen de manera significativa a las actuaciones de los profesores de secundaria, en tanto que se pueden aplicar desde diferentes áreas.

Paulina Fajardo
Colaboradora del proyecto
Violencia en la Escuela
del Centro de Investigación para
la Paz (CIP)

Derechos Humanos

**El rechazo de EEUU al Tribunal Penal
Internacional**

127

KENNETH ROTH

El rechazo de EEUU al Tribunal Penal Internacional

En un audaz acto de chantaje internacional, el Gobierno estadounidense amenazó, en junio y julio de 2002, con acabar con las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU si los ciudadanos de EEUU no quedaban excluidos de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI). Este extraordinario episodio de presión de una superpotencia, pone de relieve la profundidad del odio que existe en el Gobierno del presidente estadounidense George W. Bush hacia esta nueva institución de la justicia creada para juzgar los peores crímenes del mundo contra los derechos humanos.

El Gobierno de Bush justificó su torpe conducta alegando que era necesaria para proteger a los soldados estadounidenses de enjuiciamientos injustos. Desde ese punto de vista, la iniciativa tiene poco sentido, pues el TPI cuenta con numerosas salvaguardias frente a las injusticias en los enjuiciamientos. En lugar de colaborar con la Corte para garantizar que estas salvaguardias se aplican a conciencia, el Ejecutivo estadounidense prácticamente le ha declarado la guerra. Sus ataques contra esta histórica institución sólo aumentan la animadversión antiestadounidense que el Gobierno teme podría desembocar en un enjuiciamiento politizado.

Una facción cada vez más poderosa dentro del Gobierno de Bush ha adoptado la visión radical de que EEUU debería estar por encima del Derecho Internacional. Según esta perspectiva, a EEUU, con su extraordinario poder, ya no le sirve el imperio internacional de la ley. Esta resistencia a rendir cuentas en el ámbito internacional puede hallarse no sólo en la actitud del Gobierno hacia el TPI, sino también en su rechazo a los tratados sobre el cambio climático, la defensa nuclear, las armas pequeñas y las inspecciones de armas biológicas.

Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch

Human Rights Watch es una organización de defensa de los derechos humanos con sedes en EEUU y Europa

Traducción: Berna Wang

El triunfo de esta óptica en Washington dependerá en gran medida de la firmeza de la reacción de la Unión Europea (UE). Durante la controversia sobre el mantenimiento de la paz y el TPI, ésta dio señales de esperanza al resistirse a las exigencias más extremas de EEUU. No obstante, al consentir en última instancia una versión menos radical, pero aun así inaceptable, de estas condiciones, la actitud de la UE fue decepcionante. En el futuro será necesario que la Unión adopte una postura más firme para impedir que Washington lance nuevos ataques contra el TPI y el imperio de la ley.

Bajo la superficie hay algo más profundo

Los tiranos cometen genocidios y otras atrocidades cuando creen que pueden quedar impunes. Un asesino individual podría tener muchas posibilidades de acabar en prisión, pero por lo general, un déspota que asesina a miles de personas puede esperar, en el peor de los casos, un cómodo exilio en algún paraíso tropical. Con ciertas dosis de violencia e intimidación cuidadosamente dirigidas, los opresores pueden eludir con demasiada frecuencia el enjuiciamiento y el castigo en su país.

El TPI ataca esta impunidad. Un tribunal internacional con sede en La Haya está fuera del alcance de los déspotas. Puede intervenir incluso cuando el poder judicial nacional está debilitado y no puede actuar. A partir del 1 de julio, fecha en que entró en vigor la jurisdicción de la Corte, cualquier persona que cometa genocidio, crímenes de guerra o crímenes de *lesa humanidad* corre un riesgo mucho mayor de ser detenida, juzgada y castigada.

La mayoría de las democracias consideran que el TPI es un instrumento para disuadir y, en caso necesario, perseguir a los Sadam Husein y Pol Pot del futuro. Toda la Unión Europea ha ratificado el Estatuto de la Corte, así como Gobiernos de países tan dispares como Senegal y Brasil, Jordania y Suráfrica. El Gobierno de Bush, en principio, apoya el objetivo de esta justicia, pero se opone a él debido a la remota posibilidad de que un ciudadano estadounidense sea juzgado injustamente por ella.

Hay que reconocer que EEUU tiene muchos enemigos que podrían iniciar un enjuiciamiento injustificado. Pero el TPI cuenta con numerosas salvaguardias frente a los casos insustanciales, incluidos unos derechos exhaustivos al debido proceso, delitos definidos con detalle, múltiples apelaciones ante salas integradas por magistrados independientes y el énfasis en las peores atrocidades. Lo que es más importante, el TPI debe dar preferencia a las investigaciones y enjuiciamientos nacionales que se realicen de buena fe. Cualquier Gobierno puede bloquear totalmente la jurisdicción de la Corte simplemente investigando y, en su caso, procesando a sus propios presuntos criminales de guerra, que es exactamente lo que dice y hace EEUU.

Washington pone objeciones a la idoneidad de estas garantías, pero sus motivos de preocupación se derrumban ante un examen atento. Una de las afirmaciones del Gobierno de Bush es que el fiscal del Tribunal no "rendirá cuentas" ante ningún órgano político. En realidad, los países que ratifican el Estatuto de la Corte

—y que integran la Asamblea de los Estados Partes— pueden, por mayoría simple de votos, separar al fiscal de su cargo por falta grave. No es probable que Washington aceptara el único mecanismo más directo de rendición de cuentas: la obligación del fiscal de informar ante un parlamento mundial elegido mediante votación popular, o incluso ante un poder ejecutivo mundial. En realidad, la auténtica objeción que opone Washington no es que el fiscal no tenga que rendir cuentas, sino que no rinda cuentas exclusivamente ante el Gobierno estadounidense. A los ojos de casi todo el mundo, menos del Gobierno de Bush, esto no es un defecto.

En segundo lugar, el Ejecutivo estadounidense afirma que es injusto someter a los ciudadanos de EEUU a la jurisdicción del Tribunal, si EEUU no ha ratificado el Estatuto de Roma. Pero EEUU no se lo pensaría dos veces antes de enjuiciar a personas en aplicación de tratados antiterroristas o antidroga sin el consentimiento de sus Gobiernos. Es decir, EEUU insistiría en enjuiciar, por ejemplo, a un narco-trafficante colombiano o a un terrorista libio sin el consentimiento de Bogotá o Trípoli. De modo similar, si un ciudadano estadounidense comete un delito común en España, por ejemplo, el Gobierno español puede enjuiciarlo con independencia de lo que opine Washington. Y si el delito es grave —un crimen de guerra u otra atrocidad—, Madrid tiene todo el derecho, si así lo decide, de delegar sus facultades de enjuiciamiento en el TPI. Y tampoco sería necesario el consentimiento de EEUU. Este procedimiento encaja perfectamente dentro de los límites del funcionamiento actual del mundo.

En tercer lugar, hay quien alega que los delitos que perseguirá el Tribunal son invenciones modernas, infracciones creadas por profesores de universidad y ONG que después han endilgado a ejércitos desprevenidos. En realidad, estos delitos pueden hallarse en la Carta de Nuremberg de 1945, en la Convención sobre el Genocidio de 1948, los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos de 1977 de estos Convenios. EEUU participó estrechamente en la elaboración de cada uno de estos tratados, los ha ratificado y considerado que determinadas partes de los mismos constituyen normas vinculantes del Derecho Internacional consuetudinario. Algunas de estas normas sí reflejan una loable evolución de los principios internacionales desde la II Guerra Mundial —como el endurecimiento de las medidas sobre el bombardeo indiscriminado de ciudades—, pero esa evolución viene asentándose firmemente desde hace decenios.

En cuarto lugar, el Gobierno de Bush aduce que los delitos de los que se va a ocupar la Corte son demasiado imprecisos o maleables. Pero son los mismos delitos que el Gobierno de EEUU exige a sus tropas que eviten cometer, y están tipificados por los tratados internacionales e incorporados en los propios códigos militares estadounidenses. Hace años que se vienen aplicando en los tribunales penales de EEUU y de todo el mundo. De hecho, EEUU ha desempeñado un papel fundamental en la redacción de muchos de ellos.

Subjetividad, aceptable depende para quien

Durante las negociaciones sobre el TPI, sólo un delito preocupaba al Departamento de Defensa de EEUU: la prohibición de los ataques contra objetivos militares

*El Ejecutivo
estadouniden-
se afirma que
es injusto
someter a los
ciudadanos
de EEUU a la
jurisdicción
del Tribunal,
si EEUU no
ha ratificado
el Estatuto de
Roma*

que causen daños desproporcionados a civiles. El Pentágono temía que esta norma fuera demasiado subjetiva para ser aplicada por un tribunal internacional. Así pues, los redactores del Estatuto de Roma adoptaron, palabra por palabra, la alternativa que sugirió EEUU: que para ser enjuiciables, los daños causados a civiles deben ser “manifiestamente excesivos” en relación con la ventaja militar que se prevea.

Incluso la norma más sencilla puede toparse con casos difíciles en los que su aplicación no sea evidente. Cuando lo que se dilucida es un enjuiciamiento penal, la incertidumbre del campo de batalla suele exigir confiar en los esfuerzos realizados de buena fe por soldados y mandos para respetar las normas internacionales. Sin duda, no debe sacrificarse la libertad de un individuo a interpretaciones perfectas a posteriori o novedosas de la ley. La dependencia del TPI del respaldo de sus Estados miembros para todo, desde la aprobación de su presupuesto hasta la detención de presuntos criminales, tenderá a consolidar esta dirección conservadora. La UE tendrá un papel especialmente importante que desempeñar para garantizar este enfoque prudente hacia el uso de un instrumento tan poderoso como los enjuiciamientos penales. Pero, el respeto a los criterios militares de buena fe en casos límite es muy diferente de la abdicación de la revisión internacional que propugna el Gobierno de Bush.

Imparcialidad de las normas

Las normas para un tribunal imparcial están ahí. Ahora la tarea es garantizar que se aplican imparcialmente. Y eso dependerá de la calidad de los magistrados y del fiscal, y de la cultura del tribunal.

Incluso sin ratificar el Estatuto de la Corte, el Gobierno de Bush podía haber tenido una influencia positiva en estas materias colaborando con el Tribunal y ofreciendo asesoramiento sobre normas, personal, procedimientos y enjuiciamientos. La mayoría de los Gobiernos habría dado la bienvenida a esta colaboración, confiando en que, con el tiempo, pudiera hacer que EEUU se incorporara a la Corte como miembro de pleno derecho. En una situación muy similar, la estrecha colaboración del Gobierno de EEUU (así como de la Unión Europea) con los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y para la ex Yugoslavia ha contribuido a crear unas instituciones serias e imparciales. Esto quedó demostrado, por ejemplo, cuando el fiscal del Tribunal para la ex Yugoslavia se negó, con razón, a acusar de crímenes de guerra a la OTAN en el asunto, lleno de connotaciones políticas, del bombardeo de Yugoslavia.¹ En lugar de promover una visión académica o “progresista” de la ley, el Tribunal mantuvo correctamente su análisis dentro de las normas generalmente aceptadas.

¹ La OTAN había vulnerado el Derecho Internacional Humanitario, como concluyó Human Rights Watch en un detallado estudio realizado sobre el terreno, pero estas violaciones no alcanzaron el grado de crímenes de guerra

Teniendo en cuenta estas ventajas de la participación, el presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma en diciembre de 2000. Al revocar la firma en mayo de 2002, el Gobierno de Bush desaprovechó esa influencia sin obtener nada a cambio, pues esta revocación no postergó la creación del TPI ni limitó el alcance de sus facultades de enjuiciamiento. El 1 de agosto, habían ratificado el Estatuto setenta y seis Estados: una cifra muy superior a los sesenta necesarios para que la Corte comenzara a funcionar. Muchos Estados más están a punto de ratificarlo. Si un soldado estadounidense comete un crimen de guerra o una atrocidad en territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto, EEUU tendrá que enfrentarse al dilema de realizar su propia investigación (y, si es necesario, ordenar un enjuiciamiento) o arriesgarse a someterse a la jurisdicción del TPI.

Pero Washington guardaba otra baza: su disposición a tomar las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU como rehén de sus esfuerzos para eximir a los soldados estadounidenses de la jurisdicción del TPI. Ese flagrante ejemplo de presión de EEUU sólo aumentó la indignación mundial hacia el Gobierno de Bush al tiempo que no servía a los intereses estadounidenses.

El Ejecutivo de Bush trató de invocar una estipulación del Estatuto del TPI –el artículo 16–, que permite que el Consejo de Seguridad de la ONU suspenda, en determinadas circunstancias, la investigación o el enjuiciamiento de la Corte. Cuando el órgano jurisdiccional estaba a punto de abrir sus puertas, el Gobierno estadounidense trató de convencer al Consejo de Seguridad para que ampliara dicho artículo y concediera inmunidad a las tropas autorizadas de la ONU por tiempo indefinido, hasta que el Consejo de Seguridad votara ponerle fin. De acuerdo con este plan, el Gobierno de EEUU habría podido utilizar su derecho a veto en el Consejo de Seguridad para impedir la actuación de éste y mantener así indefinidamente la inmunidad de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Tras tensas deliberaciones, el resto del Consejo rechazó por unanimidad este hábil pero transparente intento de exonerar a los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción del TPI.

Ante esta firme oposición, el Gobierno de Bush tuvo que llegar a un acuerdo relativo. El Consejo de Seguridad votó a favor de eximir durante un año a las fuerzas autorizadas de la ONU del sometimiento a la jurisdicción de la Corte, con la condición de que toda prórroga adicional exigiría una nueva votación del Consejo, tal como prevé el artículo 16. Con este acuerdo, el veto de Washington deja de ser decisivo. Si un soldado encuadrado en una operación autorizada por la ONU comete un crimen de guerra, siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad, o cualquiera de los cinco miembros permanentes que tienen derecho a veto, pueden bloquear la acción del Consejo, permitiendo así que proceda el fiscal del TPI.

Este acuerdo tiene la virtud de mantener el principio de que ningún Gobierno puede librar por su cuenta a sus ciudadanos de la jurisdicción de la Corte cuando dichos ciudadanos cometen una atrocidad en territorio de un Estado miembro del TPI. Preservar este principio era esencial para la legitimidad y credibilidad de la Corte, y por tanto, para su capacidad de juzgar a los peores violadores de los derechos humanos del mundo.

EEUU ha empezado a presionar activamente a los Estados europeos para que formalicen con él acuerdos con arreglo al artículo 98

La torpeza estadounidense

La intención expresa de los redactores del Estatuto de la Corte era que el artículo 16 se aplicara caso por caso, y no de forma general; es decir, que se invocara para una acusación concreta de crimen de guerra, y no para futuros crímenes de guerra indeterminados que puedan cometer los miembros de cualquier operación autorizada por la ONU durante un año. Varios Estados podrían presentar un recurso legal para determinar si el Consejo de Seguridad se ha extralimitado al volver a redactar de hecho un tratado multilateral. Si la UE hubiera mantenido su compromiso declarado con la preservación de la integridad del Estatuto de la Corte, habría rechazado también esta propuesta de EEUU.

Además, una postura más firme de la Unión Europea habría tenido posibilidades de imponerse, pues las amenazas de Washington no eran tanto como parecían. La principal de ellas era poner fin, con algunos meses de antelación, a una misión de la ONU de entrenamiento policial en Bosnia. Estaba previsto que la misión fuera entregada a la UE antes del 1 de enero del 2003, así que asumir esta responsabilidad unos meses antes no hubiera sido un desastre. Además, la amenaza de Washington de cancelar todas las operaciones de mantenimiento de la paz se habría topado enseguida con la tozuda realidad de que la operación de la ONU en el sur del Líbano era una de las siguientes. Ni siquiera el Gobierno de Bush tenía la intención de entregar a Hezbollah la frontera norte de Israel.

Lo peligroso es que Washington interprete la disposición de Europa a negociar sus principios como una invitación a lanzar nuevos asaltos contra el TPI. De hecho, ya ha iniciado un nuevo ataque. El artículo 98 del Estatuto de Roma exige que el Tribunal respete los acuerdos entre Estados que regulen cuál de ellos tiene prioridad para enjuiciar un crimen cometido por soldados de un Estado en territorio de otro. Como se ha señalado, el Estatuto requiere que éste se someta a las investigaciones y enjuiciamientos nacionales; si la Corte resuelve que los esfuerzos nacionales se han realizado de buena fe, no asumirá la jurisdicción del caso. En estas circunstancias, los "acuerdos del artículo 98" pueden ser una vía útil para establecer el orden lógico entre los Gobiernos nacionales que tengan interés potencial en un caso. El respeto por parte del TPI a estos acuerdos es congruente con su respeto a los enjuiciamientos nacionales en general.

Pero lo que no tiene sentido es formalizar acuerdos conforme a lo previsto en el artículo 98 con EEUU, si su efecto será la entrega de presuntos criminales a un Gobierno (Washington) que se niega a reconocer el TPI, por no mencionar su derecho a supervisar la buena fe de los enjuiciamientos nacionales. En tales circunstancias, un acuerdo conforme al artículo 98 se convierte en una vía hacia la impunidad, en lugar de ser una herramienta para establecer un procedimiento ordenado con el fin de hacer justicia. EEUU ha empezado a presionar activamente a los Estados europeos para que formalicen con él acuerdos con arreglo al artículo 98. Los Gobiernos europeos deben responder con un "no" decidido hasta que Washington reconozca la responsabilidad de supervisión del TPI cuando se comete un crimen en el territorio de un Estado que haya ratificado el Estatuto de Roma.

Reacción internacional

Las torpes tácticas de Washington han engendrado una considerable animadversión en todo el mundo. Esto parece lo último que querría el Gobierno estadounidense si deseara realmente reducir el riesgo de que el TPI enjuiciara injustificadamente a un ciudadano de EEUU. Además, los ataques de Washington contra la Corte probablemente dificultarán la campaña antiterrorista estadounidense. Washington está pidiendo a sus aliados que cooperen en sus esfuerzos para hacer cumplir la ley localizando a presuntos terroristas. Pero al oponerse a una institución de referencia, concebida para aplicar la ley y jugar crímenes de gravedad similar, el Ejecutivo estadounidense sólo puede perder el apoyo de estos aliados. De hecho, esta oposición difícilmente puede contribuir a los esfuerzos de Washington por obtener ayuda para mantener la paz en Afganistán, cuando el Gobierno de Bush amenaza con acabar con las operaciones de mantenimiento de la paz en otros países dentro de su lucha contra el TPI.

Entonces, ¿por qué ha dado Washington estos pasos? El Gobierno de Bush ha dado varias justificaciones, ninguna de las cuales se sostienen. La explicación más habitual se basa en la responsabilidad única de EEUU sobre la seguridad internacional. Debido al tamaño y a la sofisticación de su ejército, EEUU asume una carga especial respecto de la seguridad, pero sólo el más ferviente partidario de la unilateralidad sugeriría que esta responsabilidad debe dar a EEUU licencia para cometer crímenes de guerra. Además, el de EEUU no es el único Gobierno que tiene tropas desplegadas en zonas de guerra peligrosas; el personal estadounidense representa sólo una pequeña fracción de las tropas de la ONU para el mantenimiento de la paz. No obstante, otros Gobiernos que contribuyen con tropas aceptan que, especialmente cuando actúan en nombre de la seguridad mundial, es esencial el respeto a las normas mundiales. Hace mucho que se entiende que el estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario es un atributo fundamental de cualquier guerra justa.

A veces, el Gobierno de Bush aduce el temor al uso indebido del delito de "agresión". La Corte no tiene actualmente facultad para enjuiciar este delito, pero podría obtenerla en el plazo de siete años si siete octavas partes de sus miembros acuerdan una definición. Según Washington, esta facultad podría politizarse e irá en contra de la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU para declarar un acto de agresión. Pero el Estatuto de Roma exige que toda definición de agresión deberá ser congruente con la Carta de Naciones Unidas, lo que significa que habrá de preservarse la función del Consejo de Seguridad. Dado que Washington podrá, por tanto, vetar cualquier acusación infundada de agresión, no debería sentir ningún temor a que el TPI obtenga esta facultad de enjuiciamiento.

Otra objeción de EEUU se expresa en términos humanitarios. El Departamento de Defensa estadounidense, se alega, será reticente a auxiliar a las personas que necesiten ayuda si teme un enjuiciamiento injustificado por parte de un tribunal internacional. Pero el Pentágono bombardeó Bosnia en 1995 y Yugoslavia en 1999, y ello a pesar de que sometía a los soldados estadounidenses al riesgo de ser enjuiciados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En realidad, en todo caso, el Tribunal para la ex Yugoslavia representaba mayores riesgos

que el TPI, pues tiene la jurisdicción primaria sobre cualquier crimen que decida perseguir. Es decir, puede asumir un caso incluso si las autoridades nacionales desean enjuiciarlo. Sin embargo, el TPI tiene únicamente la jurisdicción secundaria, lo que le permite ocuparse de un crimen sólo si no lo hacen las autoridades nacionales.

Intoxicado por el poder

Lo único que ha cambiado desde las campañas de bombardeo sobre Bosnia y Yugoslavia es el Gobierno de Washington. El Ejecutivo de Clinton estaba dispuesto a vivir con el pequeño riesgo de enjuiciamiento porque entendía que la justicia internacional era una herramienta esencial para abordar atrocidades como las cometidas por Slobodan Milosevic. El Gobierno de Bush, por el contrario, ha permitido que su aversión ideológica hacia la justicia internacional prevalezca sobre todo lo demás.

Rebatidas las diversas excusas y racionalizaciones que alega el Gobierno de Bush para oponerse al TPI, existe una explicación inquietante. Aparentemente, el Gobierno estadounidense cree que, teniendo en cuenta el extraordinario poder de EEUU, el imperio internacional de la ley ya no le beneficia. En términos generales, el Gobierno se limita a decir que no quiere que unos jueces extranjeros cuestionen a posteriori las acciones militares de EEUU. Pero, dado que ninguna concepción moderna de la justicia permite eximir de ella a los más poderosos, la opinión del Gobierno estadounidense es en realidad un ataque contra cualquier imperio de la ley en las relaciones internacionales.

Al parecer, el Gobierno de Bush ha observado que, habida cuenta del extraordinario peso militar y económico de EEUU, normalmente Washington puede obtener lo que desea sobre cualquier asunto concreto mediante la presión. Así pues, alega, ¿por qué someter a EEUU a un derecho internacional que podría imponer resultados inoportunos en el futuro, inferiores a lo que podría haber negociado Washington caso por caso? ¿Por qué no rentabilizar al máximo la facultad discrecional de EEUU para oponerse a cualquier aplicación del Derecho Internacional a EEUU?

El problema de este razonamiento es que ningún orden mundial eficaz puede basarse únicamente en la coacción. Todas las naciones –incluso una potencia tan dominante como es EEUU en la actualidad– se benefician de un orden mundial en el que la mayoría de los Gobiernos respetan voluntariamente unas normas comunes, ya sea de comercio, de democracia o de paz. Hasta la llegada del Gobierno de Bush, Washington parecía comprender la importancia no sólo de construir el poder militar estadounidense, sino también de promover valores como el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. El liderazgo responsable tenía tanta prioridad como la acumulación de poder.

Pero el Gobierno de Bush, intoxicado por el poder sin parangón de EEUU, ve pocas razones para seguir sometiéndose a las normas internacionales. Parece creer que estaría mucho mejor en un mundo de libertad estadounidense sin límites. Pero esa visión es peligrosamente corta de miras. Es imposible que la super-

potencia mundial rechace las normas internacionales para sí misma sin debilitar esas normas para todos. No es sostenible que haya un conjunto de directrices para EEUU y otro para los demás. Un mundo sin normas, en el que no se cumplen voluntariamente unos principios internacionales generalmente aceptados, que no es más que una selva "hobbesiana" de poder y coacción, no beneficia a nadie. A Europa corresponde, como continente que se siente mucho más cómodo con el imperio internacional de la ley, poner de relieve lo peligrosa que es, en realidad, la visión radical del Gobierno de Bush.

Testimonio

Regreso a Chicken Street

138

JORDI RAICH

Regreso a Chicken Street

Este artículo está basado en varios capítulos del libro "Afganistán también existe" (RBA Libros, Barcelona, 2002), y narra las experiencias del autor durante los tres años que vivió en el país asiático entre 1994 y 2002. El texto recoge las primeras impresiones del escritor durante su quinto viaje a Afganistán, el primero sin los talibán, en noviembre y diciembre de 2001.

Kabul. La simple mención de su nombre evoca imágenes de exotismo oriental envuelto en la bruma de las mil y una noches. Más de 3.000 años de historia emplazados en las alturas. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se llama Kabul. La leyenda más poética cuenta que es el resultado de combinar las palabras persas *ab*, agua y *gul*, flor. Las cumbres del Hindu Kush la rodean coronándola reina de las montañas. El río homónimo atraviesa la ciudad donde más que en ninguna otra parte se mezclan un millón de representantes de las diferentes etnias de Asia Central y Oriente Medio hablando en trece lenguas y dialectos. George Foster, viajero inglés del siglo XVIII, la describió como la ciudad más limpia de Asia. El emperador Babur, fundador de la dinastía mogol de India, la amó con pasión y le dedicó odas y poemas. Durante los dos últimos siglos y medio, por sus palacios y fuertes pasaron más de treinta reyes, emires y presidentes, todos fueron depuestos de forma violenta o asesinados. Árabes, mongoles, uzbekos, británicos, soviéticos, tayikos y pashtunes intentaron controlar desde Kabul un país más escurridizo que un pez húmedo. Los talibán fueron los últimos en intentarlo y también fracasaron. Y ahora, ¿qué?

Kabul era la única población merecedora de llamarse ciudad en Afganistán. En los setenta fue lugar de moda entre los hippies europeos de paso hacia India o Irán. Se alojaban en el hotel Ziggy de Chicken Street, escuchaban las canciones de Janis Joplin, tocaban la guitarra en las calles, compraban opio o marihuana en cualquier esquina y comida en el supermercado ruso. El parque zoológico exhibía canguros de Australia. El Museo Nacional albergaba miles de joyas, estatuas de terracota, relieves y utensilios de todas las épocas. La Embajada británica organizaba suntuosas recepciones en su edificio victoriano. Algunas chicas llevaban

Jordi Raich es
master en
Relaciones
Internacionales.
Investigador del
Instituto de
Estudios sobre
Conflictos y Acción
Humanitaria
(IECAH)

minifalda y tacones de aguja por las calles. En el Hotel Intercontinental servían vino y hacían espectáculos de cabaré. La tienda de Marks & Spencer estaba frente a la Mezquita Azul.

Un día fue así. El presente era diferente, decrepito. Los monumentos y edificios oficiales o culturales estaban destruidos o bien ocupados por militares y desplazados venidos de las montañas. Los diplomáticos habían evacuado el país una década atrás, casi todos los animales del zoo habían muerto por las bombas o de inanición, las aulas de las facultades estaban vacías y las piezas del Museo Nacional podían adquirirse en las tiendas de antigüedades del bazar. A pesar de las oleadas de violencia que de forma recurrente azotaban Afganistán, la capital sobrevivió relativamente intacta hasta la retirada soviética de 1989. Kabul fue destruida por las guerras fratricidas entre los grupos muyahidín de la primera mitad de los años noventa. Hasta que aparecieron los talibán. Estos la asediaron durante muchos meses y la ocuparon en septiembre de 1996. Los talibán fueron recibidos como libertadores. Ahmad Shah Masud —líder guerrillero antitalibán— y Burhanuddin Rabbani —ex presidente del país y líder de la Alianza del Norte— abandonaron la capital, entonces les tocó a ellos bombardearla durante cinco años desde sus bases al norte de la ciudad. Dos días antes de los atentados de Nueva York y Washington, el León del Panjshir¹ fue asesinado por un par de falsos periodistas suicidas. No fue una casualidad. Después del 11 de septiembre llovieron sobre Kabul misiles “inteligentes” lanzados desde cazas de combate estadounidenses que abrieron el camino de retorno de los hombres de Rabbani y el general Fahim, el militar que reemplazó a Masud. El 13 de noviembre de 2001 los guerrilleros de la Alianza del Norte entraron en la capital, también fueron recibidos como libertadores. Treinta mil, cincuenta mil, setenta mil, ¿cuántos residentes de Kabul habían muerto o quedado mutilados para toda la vida durante todos aquellos años? Nadie lo sabe con certeza.

Bienvenida con sello estadounidense

En viajes anteriores siempre había llegado a Kabul por tierra o por el aeropuerto internacional pegado a la ciudad. Esta vez nos vimos obligados a aterrizar en la pista de la base aérea de Bagram, a una hora y media en coche al norte de Kabul. El aeropuerto de la capital había sido dañado por el bombardeo aliado. Al pie de la escalerilla de la avioneta, dos soldados estadounidenses uniformados, hombre y mujer, me dieron la mano. Prolongaron el saludo unos segundos más de lo habitual para permitir al periodista militar que les acompañaba tomar fotos del evento y de mi rostro sorprendido.

– *Hi! Welcome to our home* (Hola. Bienvenido a nuestro hogar) –dijo el soldado.

– Gracias –fue lo único que acerté a responder estupefacto por el recibimiento y la frasecita de llegada.

Bagram, ¿hogar estadounidense? Supongo que aquella imagen debió publicarse en algún boletín o revista interna de la *US Army*.

¹ Sobrenombre con el que se conocía a Ahmad Shah Masud.

Pisé territorio afgano con más ansiedad que nunca. Inspiré varias veces profundamente el aire puro y helado como para adaptarme a la nueva situación. Miles de personas habían perdido la vida por el trozo de tierra bajo mis zapatos. La base aérea de Bagram fue una de las zonas que cambió de manos con más frecuencia durante la guerra entre los talibán y la Alianza del Norte. Un hombrecillo afgano sin barba, con una chaqueta de piel negra más grande y pesada que él, se me acercó y pidió el pasaporte. Sin revisarlo estampó la entrada en una de sus páginas y agradeció mi presencia en Afganistán. Miré el sello: “Ministerio de Asuntos Exteriores, Estado Islámico de Afganistán”. El Emirato Islámico y los talibán que lo inventaron habían desaparecido o, mejor dicho, estaban en vías de extinción.

La llamada Operación Libertad Duradera, antes Justicia Infinita, consecuencia de los atentados contra EEUU, había expulsado a los talibán de todo el norte, oeste y centro del país devolviéndoles a su reducto en las provincias pashtunes del sur. El mulá Omar y sus fieles seguidores todavía resistían en Kandahar y sus alrededores. La guerra de la coalición internacional dio comienzo el 7 de octubre y se efectuaba desde el aire a golpe de mortífera tecnología. A nivel de tierra, los muertos y el trabajo sucio de EEUU y Europa los ponía la Alianza del Norte, que hacía de infantería subcontratada e iba ocupando el espacio dejado por los talibán en retirada. La milicia islámica fundamentalista perdió en poco más de un mes lo que tardó seis años en conquistar. Ocurrió precisamente cuando controlaba todas las grandes poblaciones y la victoria final talibán parecía inmediata, entonces su reconocimiento internacional sería inevitable.

Subí al coche en cuyo interior me esperaban Qassim y Amanullah, viejos conocidos de anteriores visitas a la capital. Ambos se habían quitado la barba y dejado bigote, no habían abandonado el *shalwar camiz*² y sonreían de oreja a oreja. Después de los abrazos y saludos nos dirigimos a la puerta de salida de la base. Avanzamos por el asfalto rodeados de construcciones sin techo vigiladas por marines, casi todos negros y latinos, aburridos, sentados en las piedras. Al otro lado de la verja principal, una marea humana y mecánica se agolpaba atraída por los nuevos inquilinos de la base. Salimos del enclave estadounidense y entramos en el Afganistán real cercados por una multitud que golpeaba las ventanillas del coche y gesticulaba. Bajé el cristal para oír lo que decían los exaltados.

–*Welcome, welcome, how are you?, good, good, Michael Jackson, yes, American?, American?*—chillaban cien cabezas atolondradas.

– No. No soy americano, soy de España, *Hispania* —respondí en dari estrechando varias manos a la vez.

– *Hispania* está en América ¿no?

– No, está en Europa.

– Europa está en América ¿no?

– No. Europa está en Europa.

–*Yes, yes, America, America...*

Las tropas estadounidenses aún no habían pisado el exterior de la base donde se habían atrincherado y la “americanmanía” ya había calado en la cultura local.

Los muertos y el trabajo sucio de EEUU y Europa los ponía la Alianza del Norte, que hacía de infantería subcontratada e iba ocupando el espacio dejado por los talibán

² El *shalwar camiz* es la indumentaria que llevan casi todos los afganos. Consiste en unos pantalones bombachos y una chilaba de manga larga que llega hasta las rodillas.

– ¿Conoces a Mónica Lewinsky?

Probablemente Mónica no lo sabía pero era una estrella sexual en Afganistán. A los afganos les encantaba que hubiera humillado al presidente estadounidense, pero al mismo tiempo envidiaban a Clinton de forma inconfesable.

– No, no la conozco.

– ¿Ahora está con Bush?

– No tengo ni idea, tal vez esté con Bin Laden.

Mi tontería desató una andada de carcajadas, aspavientos y ¡ooohs!

– Para, para el coche, toma té con nosotros æseguían gritando las voces a nuestro alrededor.

– Es Ramadán, no podemos tomar té æadvertí mientras acelerábamos.

– *Welcome, welcome, very good, yes Monica, yes, friend, friend, American, American...*

Todo seguía igual... o casi

Pasé semanas dando vueltas por la ciudad, hablando con la gente en sus calles, bazares y jardines, escudriñando el paisaje urbano en busca de cambios. Algunos eran obvios, por ejemplo la desaparición de bastantes barbas y la aparición de unos cuantos pantalones tejanos y camisetas estampadas, sobre todo entre los más jóvenes. También se hacían notar los kioscos de música que en tiempos talibán solo vendían abiertamente arengas de mulás y ahora tenían altavoces en plena calle con lo último de estrellas indias a todo volumen. Algo parecido ocurría con las tiendas de televisores, antenas satélite y cintas de vídeo. En general, había más coches, más animación y una especie de aire festivo en los rostros, en los masculinos claro está porque los femeninos, como era previsible, seguían borrados por un burka, aunque los talibán estuvieran a muchos kilómetros de allí.

– Ya verás, espera al final de Ramadán. Cuando lleguen las fiestas de Id las mujeres saldrán a la calle, se quitarán los burkas y los quemarán públicamente –me dijo con entusiasmo el vendedor de una de las tiendas de alfombras de la avenida Akbar Khan–. Todas irán destapadas.

Aquella fanfarronada no se la creía ni él. Puse a prueba su teoría con lo más sagrado, su propia familia.

– Entonces, para celebrar Id y que los talibán se han marchado para siempre, permitirás a tu mujer, hijas y hermanas salir a la calle sin el burka, solo con el pelo cubierto con un pañuelo.

– No, no, no, no, no. En nuestra familia nunca permitiríamos eso, nuestras mujeres han de ir tapadas. Sólo la gente educada se destapará.

Chicken Street y Flower Street, las calles del pollo y la flor respectivamente. Las visitaba cada vez que iba a la capital. Algo así como una mezcla cutre de las neoyorquinas Quinta Avenida y Chinatown metidas en la parte nueva de Kabul. Sus comercios estaban especializados en la venta de artículos y productos al gusto de los expatriados. Joyas, marihuana, alfombras, artículos de piel, heroína, armas viejas, antiguallas británicas, piedras semipreciosas, todo de pésima calidad y tres veces más caro que en cualquier otra tienda de la ciudad. Los propie-

tarios de los establecimientos podían pasar horas y horas contando historias increíbles sobre sus clientes de la segunda mitad del siglo XX. Los hippies fumados sin un duro y los generosos diplomáticos de los sesenta y setenta, las juergas con prostitutas y ríos de alcohol de los soviéticos en los ochenta y los “virtuosos” humanitarios de los noventa bajo las bombas muyahidín y la represión talibán. Escuchar a los charlatanes de Chicken Street era como revivir en directo la historia reciente de Kabul. Ahora esperaban añadir a su larga lista a los soldados estadounidenses, consumidores modélicos con “dólares, muchos dólares”, pero todavía no habían llegado a la calle del pollo. En cada tienda las preguntas eran similares.

– ¿Cuándo vienen los americanos? –decían frotándose las manos.

Parecía una versión pirata asiática de *Bienvenido Mister Marshall* de Berlanga, de Villar del Río a Kabul.

– Están en Bagram y, por lo que se ve, no salen mucho de allí.

– Entonces, ¿para qué han venido a Afganistán? Tienen que salir y venir a comprarnos cosas, a gastar sus dólares.

– Ya se lo diré la próxima vez que los vea.

– Turistas, ¿cuándo vienen los turistas? Los japoneses, ¿cuándo vienen los turistas japoneses?

– Creo que aún falta un poco para eso. Paciencia.

En pleno centro de la capital, conocido de forma significativa como la Plaza de Pashtunistán, se encontraba el macizo edificio de correos, siempre a rebosar de clientes. A la salida me encontré con Obaidullah, probablemente el panadero más culto de la capital. Treinta años antes había enseñado literatura inglesa e historia en la Universidad de Kabul, cuando la monarquía tocó a su fin perdió el empleo acusado de anticomunista. Resignado, abrió una panadería con uno de sus hermanos muy cerca de la casa donde yo me alojaba cada vez que visitaba Kabul. Decidió unirse a mi tour urbano. Detrás de correos estaba el Hotel Spinzar un clásico de otros tiempos, un parador de primera en las últimas que recordaba días de gloria pasada gracias a la marabunta de periodistas que había invadido la ciudad. Deambulaban por todas partes, filmaban y tomaban fotos a diestra y siniestra, algo casi imposible durante los años talibán. Además, muchos kabulíes tenían auténticas ansias de ser fotografiados, parecían querer recuperar el tiempo perdido después de varios años alejados de las cámaras. El paraíso de los periodistas eran las ruinas de la calle Jad-e-Maiwand. Muchos hacían entrevistas y enviaban las crónicas en directo con la desolación de fondo, supongo que era lo que más vendía o, como dirían algunos de ellos, “es lo que el público quiere ver”, como si nada tuviera que ver lo que se quiera enseñar. Al final de la calle tuvimos que rescatar con el coche a una joven fotógrafa inglesa de un periódico amarillista que estaba a punto de ser engullida por una jauría de afganos más excitados que enojados. Sarah vestía botas de montaña, pantalones elásticos pegados como una segunda piel y una camiseta dos tallas más pequeña. Saltaba a la vista que era su primera vez en Afganistán. La chica era todo curvas y los afganos hacía mucho que no conducían. Las cosas todavía no habían cambiado tanto en Afganistán, un país donde las innovaciones súbitas no gustan nada y todo necesita mucha calma y mucho tiempo.

La CIA buscó debajo de las piedras algún pashtún que poner al frente de un posible gobierno provisional

A rey muerto, rey puesto

La salida de los talibán de Kabul creó un vacío de poder en la ciudad. La capital había sido ocupada por soldados armados de Jamiat-e-Islami, la facción principal de la inestable coalición de partidos muyahidín que era la Alianza del Norte. En 1992, cuando las tropas de Jamiat al mando de Masud conquistaron la capital, EEUU y Europa reconocieron al tayiko Burhanuddin Rabbani como presidente legítimo del Gobierno de Afganistán. Siguieron haciéndolo después de la entrada de los talibán en Kabul en septiembre de 1996 y durante todos los años siguientes. En octubre y noviembre de 2001, el papel del presidente Rabbani y el de su partido fueron clave en el desarrollo de la operación Libertad Duradera, la Alianza del Norte proporcionaba la carne de cañón para la "Guerra total contra el terrorismo". Cuando los talibán fueron expulsados de la capital y llegó el momento de la verdad, Occidente se echó atrás y decidió impedir a toda costa que Rabbani siguiera en el cargo. De la noche a la mañana el aliado se convirtió en un estorbo. La Casa Blanca temía enojar a los líderes de las tribus pasthunes si continuaba reconociendo a Rabbani en su cargo, algo que había hecho contra viento y marea durante los últimos nueve años. Los aliados occidentales no querían ser vistos como defensores de los tayikos, un poco tarde para eso. Alguien en Washington y Londres no se había leído la historia reciente de Afganistán.

La CIA buscó debajo de las piedras algún pashtún que poner al frente de un posible gobierno provisional. En Pakistán encontró al antiguo muyahid Abdul Haq. El hombre elegido entró en Afganistán acompañado de tres soldados estadounidenses para buscar apoyo entre los líderes pashtunes, una operación secreta del espionaje estadounidense de la que todo el bazar local estaba informado. Abdul Haq fue capturado y ahorcado por los talibán, los marines lograron escapar. Después apareció Hamid Karzai, un pashtún relativamente desconocido, hijo de políticos que sirvieron en tiempos del rey Zahir Shah. Fue a la universidad en India y luego se instaló en Quetta, Pakistán, donde su familia tenía negocios de hostelería con ramificaciones en Chicago, San Francisco, Boston y Nueva York, lugares a los que viajaba con frecuencia. Karzai ocupó el cargo de viceministro de Exteriores en el Gobierno muyahid de Rabbani de principios de los años noventa. Decepcionado con la experiencia, apoyó abiertamente el nacimiento de los talibán a los que consideraba hombres decorosos y buenos musulmanes. Más tarde se distanció de ellos y comenzó a oponérseles. Karzai se perfilaba como el favorito de la Casa Blanca para el cargo de presidente interino de un gobierno de transición multiétnico que se decidiría en una conferencia de paz en Bonn a finales de noviembre. El tema de discusión en los bazares era la composición étnica y faccional del futuro nuevo gabinete y la lucha de poder que estaba desarrollándose entre bastidores.

A rey muerto, rey puesto. La ciudad entera sufría una invasión de fotografías tamaño folio de Ahmad Shah Masud. Su imagen estaban en todos los escaparates, bares, tiendas, plazas y parabrises de taxis y vehículos militares. La única película que pasaban en el resucitado cine Bakhtar era un documental propagandístico sobre sus hazañas bélicas. Tras su asesinato, los dirigentes de Jamiat-e-Islami pusieron en marcha una campaña masiva de entronización del León del Panjshir. En su tumba estaban erigiendo un mausoleo. No había ni gobierno pero

ya se hablaba de la ubicación del monumento que querían dedicarle y de nominarle para el Premio Nobel de la Paz. En realidad, la construcción del mito Masud había comenzado varios años atrás con el apoyo del Gobierno francés, discreto al principio y escandaloso más tarde con audiencias y ruedas de prensa en París, documentales panegíricos de televisión y libros sobre su vida. Masud había estudiado en el Liceo Francés de Kabul, provincianismo al mando de la política exterior gala. Masud era un brillante estratega militar y relaciones públicas. El León del Panjshir era de todo menos un santo. Su lluvia de morteros contribuyó a la destrucción de Kabul. Entre 1992 y 1996, mientras reinó en la capital, las escuelas femeninas fueron clausuradas, los cines convertidos en mezquitas, supervisó la matanza de centenares de hazaras³ de la ciudad y provocó el desplazamiento de miles de civiles. También hizo todo lo posible para que los planes de paz diseñados por Naciones Unidas fracasaran uno tras otro. Masud no era peor que los demás líderes muyahidín o los talibán pero tampoco era mejor que ellos. Aunque, ¿quién dijo que los héroes o los políticos tuvieran que ser santos? El mulá Omar ha muerto, viva el León del Panjshir.

En la calle las bromas y chismes sobre la evolución del conflicto eran el pan de cada día. Las burlas más abundantes eran las relacionadas con el paradero de Bin Laden y el mulá Omar y las meteduras de pata de los marines. La más celebrada, y con razón, era la del mulá Omar escapando en motocicleta del cerco estadounidense en las montañas al norte de Kandahar tras la caída de la ciudad. Cualquiera que conociera un poco Afganistán sabía que aquello era imposible, ¡una motocicleta en las montañas!, ¡conducida por el tuerto Omar! Todos, menos la Casa Blanca que dio la noticia al mundo, tenían la certeza de que se trataba de una tomadura de pelo mayúscula. Los líderes pashtunes de la región despistaban a los agentes de la CIA, les prometían que estaban negociando con el mulá Omar su redición cuando el dirigente talibán probablemente se encontraba a miles de kilómetros de allí.

Tierra de todos

Mientras tanto, en Kabul nadie y todo el mundo mandaba. Cada día llegaban a la capital una media de mil nuevos desplazados. Vivían bajo plásticos por todas partes, en las afueras, en los descampados y entre los cascotes. El delito común y la venganza de deudas pendientes se habían disparado tanto en la ciudad como en las carreteras. Antiguos desacuerdos familiares, políticos o económicos se saldaban con acusaciones falsas de pertenecer a Al Qaeda que la CIA tomaba en serio. La gente seguía sin trabajo, sin dinero, sin comida y sin escuelas. Un día aparecieron varios camiones militares rusos en el centro de la ciudad. Los soldados abrieron la parte posterior de los toldos y ofrecieron a los paseantes paquetes de comida y libros en ruso. Al principio los afganos se mostraron tímidos y con razón ¿Los odiados rusos otra vez en Kabul? ¿Otra invasión? Volvieron las memorias de diez

³ Etnia de Afganistán.

años de ocupación soviética, un millón de muertos y desaparecidos y cuatro millones de desplazados y refugiados. Una multitud desconfiada fue creciendo alrededor de los amables y jóvenes reclutas. Los soldados anunciaron que iban a construir un hospital de campaña para atender a la población civil. Las mujeres fueron las primeras en dejarse de tonterías y aceptar los regalos, los tiempos no estaban para andarse con reparos. Hacía doce años que los invasores de Moscú habían abandonado Afganistán humillados y aquí estaban de nuevo, reconvertidos en ejército humanitario. Esta vez eran los estadounidenses los que lanzaban las bombas. Por si fuera poco, en Bagram estaba acampado el ejército británico, otra potencia diezmada por las cuadrillas afganas durante las dos guerras que les enfrentaron en el siglo XIX. Los ingleses también habían vuelto a Afganistán, pero para bombardear con los hombres de George Bush. ¿Revancha histórica?

Como era de esperar, las denuncias sobre nuevas atrocidades cometidas por los soldados de la Alianza del Norte no tardaron en llegar. Robos, ejecuciones masivas durante la toma de Kunduz, desapariciones, el aplastamiento brutal del motín de la prisión de Qala-e-Jangi. Las reglas de la nueva "Guerra total contra el terrorismo" eran las viejas reglas de siempre. Todo aquello violaba de forma escandalosa el Derecho Internacional Humanitario más básico y esencial. No eran prácticas novedosas en el conflicto afgano en absoluto pero esta vez los combatientes de la Alianza del Norte trabajaban para la coalición occidental. El Pentágono dirigía el curso de la guerra por control remoto desde Washington, las bases militares de Uzbekistán y desde sus seguros aviones a varios kilómetros de altura sobre suelo afgano. Sobre el terreno, los jóvenes soldados estadounidenses vivían atrincherados en los aeropuertos convencidos de que todos los afganos eran terroristas extremadamente peligrosos y fanáticos dispuestos a secuestrar un avión en cualquier momento y pilotarlo contra el primer edificio alto que encontrarán. La Alianza del Norte recibía uniformes, armas, dinero, asesoría y órdenes de los oficiales estadounidenses. Por muchas piruetas diplomáticas y legales que George Bush intentara, las masacres cometidas por el ejército subcontratado de la Alianza del Norte eran también responsabilidad suya.

Los hombres y mujeres de a pie, la inmensa mayoría de afganos, solo querían paz desde hacía un cuarto de siglo. Deseaban con vehemencia que las tropas internacionales, lideradas por EEUU, se quedaran unos años en el país para estabilizarlo y garantizar la seguridad. Confiaban en ellas porque no les quedaba nadie más en quien confiar. Tenían todas sus esperanzas puestas en Occidente porque ya no tenían esperanzas. Pero se sentían muy preocupados por el panorama que se estaba dibujando tras la caída del régimen talibán. Tenían buenas razones para ello. A mí me daba la sensación de haber hecho un viaje de siete años atrás en el tiempo, de vuelta a mi estancia de 1994, cuando los talibán no eran nadie y el país estaba dominado por las facciones muyahidín. La situación era idéntica a la de entonces, un caos de reinos taifa gobernados por comandantes en constante lucha los unos con los otros, aliándose hoy para pelearse mañana.

El Gobierno interino pactado en la conferencia de Bonn tomó posesión el 22 de diciembre, justo después del Id musulmán, justo antes de la Navidad de la coalición aliada occidental. Como era previsible el pashtún Hamid Karzai fue nombrado presidente. El gabinete incluía cinco vicepresidentes, veintitrés ministros y dos

mujeres. Los tres puestos clave, Exteriores, Interior y Defensa, fueron acaparados por tres tayikos del valle del Panjshir. Aquello no iba a gustar nada a Dostum, ni a los pashtunes, ni a los chiies. El Afganistán talibán estaba dejando paso al Afganistán de siempre, el de las facciones, esta vez con el auspicio de la comunidad internacional.

Fui a tomar algo al UN Club, un bar decadente regentado por Naciones Unidas. Solo tenían whisky Johnnie Walker y latas de cerveza imbebible encontradas en los sótanos de la Embajada estadounidense en Kabul abandonada desde 1989.

Entrevista

**Entrevista a François Houtart:
Otras formas de pensar el mundo**

151

ANA BELÉN MARTÍN VÁZQUEZ

Entrevista a François Houtart, director del Centro Tricontinental (Bélgica) y de la revista *Alternatives Sud*

Otras formas de pensar el mundo

En junio de 2002, el Centro de Investigación para la Paz (CIP) de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) presentó el primer número de la edición española de la revista "Alternatives Sur". Su referente internacional, "Alternatives Sud", nació gracias a la iniciativa de François Houtart y del Centro Tricontinental (CETRI) de Lovaina hace nueve años. Con motivo de la presentación de la edición española, Houtart, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y autor de "El otro Davos" y "La tiranía del mercado", ofreció en Madrid su visión sobre las relaciones Norte-Sur y las alternativas que el movimiento de globalización alternativa plantea.

Ana Belén Martín Vázquez es responsable de comunicación de la Fundación Hogar del Empleado

Pregunta: Esta revista se ha consolidado en otros países difundiendo ideas y propuestas generadas en el marco de la globalización alternativa, ¿qué quiere aportar *Alternatives Sur*?

Respuesta: Que *Alternatives Sud* cuente con una edición en español es muy importante y contribuye al objetivo de la revista de difundir en el Norte el pensamiento, las ideas y experiencias del Sur. En Europa hemos creído siempre que el Sur era un vacío en cuanto a ideas y propuestas, y siempre le hemos mirado con una cierta superioridad, de ahí la importancia de difundir el pensamiento del Sur, tanto de América como de Asia y África. El Sur no es un desierto de ideas, muy al contrario, hay muchas y tienen que ser oídas puesto que es la voz y la alternativa que plantean los que más sufren, aunque no en exclusiva, las consecuencias de la globalización económica neoliberal. Por tanto, el Sur puede expresar los problemas de forma más convincente.

La revista *Alternatives Sur* se inscribe en esta línea, puesto que frente a la globalización es necesaria la acción, pero también el pensamiento, la reflexión que permite encontrar soluciones y, sobre todo, la reflexión alternativa del Sur.

P: ¿Cuáles serían los principales temas que aborda la revista?

R: La revista plantea temas como la relación entre el mercado y la democracia, la cultura como forma de resistencia, el papel de las ONG como instrumentos del liberalismo o como alternativas de cambio, las teologías de la liberación, el comercio de armas, el agua, los organismos económicos internacionales, la deuda externa, la relación de la educación superior y el mercado, el petróleo, entre otros. Todos ellos son temas para el futuro, un amplio panorama de cuestiones que se analizan siempre en función del Sur.

P: La evolución del capitalismo ha dejado un mundo de grandes contrastes entre ricos y pobres. ¿Cabe la posibilidad de que este modelo económico llegue al colapso por esta misma dinámica?

R: El sistema capitalista actual está deslegitimado no sólo por razones éticas, sino también por las estrictamente económicas. En teoría, la economía debía permitir la vida física y espiritual de los seres humanos, y está claro que no lo ha conseguido. Así lo demuestra que el 20% más rico de la población mundial absorbe más del 80% de las riquezas, mientras que el 20% más pobre comparte sólo el 1,4%, aunque éste es sólo uno de los aspectos de las injusticias sociales a escala mundial.

Frente a esta realidad, hay personas que saben que no podemos seguir por este camino. La crisis del modelo neoliberal, en el que el capitalismo financiero se ha impuesto al capitalismo productivo, lleva a replantearse las cosas. Ya hemos visto la crisis de Argentina, ya veremos cuál es el próximo.

El capitalismo está en un callejón sin salida, no porque vaya a desaparecer, sino por la realidad que tenemos ante nosotros y por la inquietud que se está generando dentro del sistema económico actual. Existen límites económicos, pero también sociales, políticos y culturales que cuestionan las tendencias generadas por el sistema actual.

P: ¿Cuáles serían esos otros límites?

R: Hay cuestiones medioambientales como el problema del cambio climático o el deterioro del planeta, que representan la frontera más clara de hasta dónde se puede llegar. Pero, también estamos alcanzando otros límites. En el terreno social, el fenómeno de los sin techo, también en el primer mundo, los trabajadores que tienen que recurrir al pluriempleo para subsistir, las comunidades campesinas que han desaparecido como consecuencia de la apertura de los mercados, etc. Cada vez están quedando más personas fuera del sistema y eliminar a tanta gente conduce al genocidio. Se está dando la destrucción de grupos sociales en todo el mundo y el sistema está dejando fuera a todos aquellos que no pueden consumir, porque no interesan.

En los límites políticos, podemos analizar lo ocurrido en Francia en las últimas elecciones. La derecha se ha convertido en el brazo político del capitalismo; la izquierda, que quiso acabar con el capitalismo, lo ha acabado gestionando; y, al final, la extrema derecha acaba recibiendo el voto de los excluidos del sistema.

En cuanto a los límites culturales, estamos asistiendo a la mercantilización de la educación, sobre todo, de la superior. Las universidades se transforman en escue-

las técnicas en función del mercado, caen las humanidades y las nuevas cátedras vienen patrocinadas por empresas transnacionales. También se podría hacer una crítica de la falta de una ética social y de la concentración de los grupos de comunicación, lo que supone una concentración del poder que limita la libertad.

P: ¿Hasta qué punto la globalización económica ha aumentado la distancia que separa el Norte del Sur?

R: Las desigualdades han crecido y no sólo en el terreno económico. El Norte se apodera del sobre producto del Sur, sobre todo, porque el tipo de globalización que existe es una globalización en función del interés del capital y no de los seres humanos. Existen muchos mecanismos que provocan las transferencias desde el Sur al Norte. Por ejemplo, mientras el precio de los recursos minerales del Sur lleva una tendencia a la baja, los productos industriales del Norte suben, con lo cual el Sur es cada vez más incapaz de comprar. Además, están las políticas proteccionistas del Norte en la agricultura o la economía industrial, que cuando afectan al mercado del Norte provoca su reacción, mientras que el Sur no puede reaccionar. Otros ejemplos claros son la deuda externa, el Sur paga al año más de 200 billones de dólares en concepto de deuda mientras recibe 50 billones de dólares en la ayuda de cooperación al desarrollo; los paraísos fiscales del Norte, donde los ricos del Sur ponen su dinero, y la atracción de cerebros. En EEUU hay más médicos argentinos que en la propia Argentina y Alemania quiere recibir 50.000 informáticos procedentes de la India. Es decir, profesionales cuya formación ha pagado el Sur que no devuelven nada al Sur.

P: Usted sostiene que la situación es consecuencia de la economía capitalista actual y de la falta de políticas que corrijan las tendencias del mercado. En este contexto, ¿qué papel juegan los dirigentes mundiales?

R: En efecto, este panorama no es un accidente, sino fruto de la lógica del capitalismo cuyo fin es el provecho económico y no el provecho que se pueda generar en la gente.

Vemos en las cumbres mundiales muchas promesas en las que se dice que en un número determinado de años se acabará, por ejemplo, con el hambre. Pasados esos años, los líderes políticos mundiales se vuelven a reunir para decir que no se ha conseguido esa meta. Tenemos la obligación y el deber de pensar en cuánta gente se muere de hambre desde que acaba una cumbre hasta que empieza la siguiente. Es inaceptable, además, que esta situación se dé cuando jamás la humanidad ha tenido tantos recursos como ahora para resolver estos problemas. Y ¿por qué no se resuelven? Porque no hay voluntad política de hacerlo, ya que la política no se plantea actuar sobre las causas sino que quiere resolver los efectos. El hambre es un efecto del sistema, pero no se plantean las causas que la originan.

Las soluciones existen, la misma ONU ha señalado que con una tasa del 4% sobre las 250 fortunas mayores del planeta se acabaría con el hambre, el analfabetismo, algunas de las enfermedades del Tercer Mundo y la situación de los que viven sin techo, pero no hay interés político, dado que los políticos, cada vez más, deciden según los intereses de las transnacionales.

P: En este contexto, ha surgido una respuesta creciente a la globalización económica. ¿Quiénes integran el movimiento antiglobalizador y qué pretenden?

R: Frente a esta situación han ido surgiendo resistencias. El neoliberalismo ha tenido su impacto socio-económico y cultural, y ha originado el individualismo y transformado al ciudadano en consumidor. Así, la lucha por la subsistencia se convierte en un movimiento de resistencia que cada vez está más radicalizado y que ha unido a gente de sectores muy distintos: campesinos, mujeres, ecologistas, sindicatos, grupos indígenas, entre otros, que llegan juntos porque ven lo que está pasando y entienden el desafío de plantar cara a las decisiones que les afectan.

Al final, si me permite la broma, los líderes mundiales acabarán encontrándose en un satélite, ya que no van a hallar sitios donde reunirse, donde no se congregate la gente que ha empezado a decir “no”, forzando el encuentro entre la sociedad civil de arriba, que es la que se reunió en Davos, y la sociedad civil de abajo, que es la de Porto Alegre.

De toda esta reacción, lo más importante es que no sólo ha habido protesta sino también la creación de una agenda propia con alternativas. En 1999, en la reunión del Otro Davos, pudimos decir que existen otras formas de pensar el mundo, y esto fue en parte el origen de Porto Alegre en 2000, un movimiento convergente cada día más internacionalizado y más numeroso.

P: Sin embargo, se habla muy poco de las propuestas y mucho de la violencia de algunos grupos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R: Desde los medios de comunicación hay una gran responsabilidad cuando insisten en esos episodios de violencia que se dan en algunos encuentros. Pero la violencia del sistema, por la cual alguien se muere de hambre en el mundo cada cuatro segundos, es una violencia mucho mayor. Los grupos violentos están siendo utilizados por las fuerzas del orden y por los que quieren deslegitimar el movimiento. Además, se está tratando de criminalizar a las organizaciones antiglobalización, equiparándolas con grupos terroristas. La movilización es imprescindible y ahí queremos contar con los intelectuales, debemos levantar la voz por todos los pueblos que no son escuchados.

El movimiento antiglobalización tampoco se corresponde con la imagen folkórica que también se propaga desde los medios. Es un movimiento de debate donde existen propuestas para que otro mundo sea posible. En Porto Alegre las hubo, se celebraron más de ochocientos seminarios y la página web refleja todas esas otras alternativas que no se llevan a cabo por falta de voluntad política, una voluntad que cambiaría si lográramos establecer una nueva relación de fuerzas.

P: ¿Cuáles serían algunas de las principales propuestas que se han expresado en las reuniones del Foro Social Mundial?

R: Al plantear las posibles alternativas, hay que diferenciar tres niveles: primero, el de las utopías, y después, las medidas que se pueden adoptar tanto a medio como a corto plazo. En el nivel de las utopías, lo que nos estamos planteando es qué tipo de agricultura, de empresa, de medios de comunicación, de

ocio, en suma, qué tipo de sociedad queremos tener y dejar a las generaciones venideras.

A medio plazo, existen iniciativas que requerirán su tiempo puesto que son más complejas y habrá resistencia frente a ellas: reintegrar la economía dentro de la sociedad, redistribuir la riqueza, reorganizar el sistema económico y reemplazar la lógica capitalista, organizar la ONU de forma más democrática, conseguir la ratificación de los acuerdos sobre el cambio climático, etc.

A más corto plazo, estarían cuestiones como la aplicación de la tasa Tobin, que es posible si hay voluntad política, o la abolición de la deuda externa. En este último punto, hay dos ejemplos elocuentes: EEUU es el país que más debe del mundo, pero su deuda no importa, sólo importa la deuda de los países pobres. Por otro lado, destaca el caso de Pakistán, país que ha conseguido el escalonamiento de la deuda cuando ha interesado políticamente, es decir, tras la situación internacional surgida a raíz del 11 de septiembre.

Guerra y olvido. La Unión Europea y la prevención de conflictos en África Subsahariana / Alerta 2002. Informe sobre derechos humanos, conflictos armados y transferencia de armas / La situación del mundo 2002	159
El juego global	164
Guerras profanas. Afganistán, Estados Unidos y el terrorismo internacional	167
La debacle de Argentina: una Argentina que muere y otra que bosteza	169
A agenda perdida da reconstrução pós-bélica: o caso de Timor Leste	171
Guerras que yo he visto / Bombas de risa	173
El debate humanitario	174

**GUERRA Y OLVIDO. LA
UNIÓN EUROPEA Y LA
PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS EN
ÁFRICA
SUBSAHARIANA**

Mariano Aguirre y Cecilia
Bruhn (coords.)
Intermon Oxfam,
Barcelona, 2002,
149 páginas.

**ALERTA 2002. INFORME
SOBRE DERECHOS
HUMANOS,
CONFLICTOS
ARMADOS Y
TRANSFERENCIA DE
ARMAS**

Universidad Autónoma de
Barcelona
Cátedra UNESCO, Escola de
Cultura de Pau, UAB,
Barcelona, 2002,
79 páginas.

**“Rompiendo la relación
entre recursos y represión”
LA SITUACIÓN DEL
MUNDO 2002**

Michael Renner
Worldwatch Institute
Icaria editorial, Fundación
Hogar del Empleado,
Barcelona, 2002,
pp. 255-285.

La prevención de conflictos
entendida como las “medidas que
se toman antes de que una disputa
escale hasta la violencia; las que

se adoptan para que no se
expanda a otras zonas; y las que
se orientan a evitar que resurja la
violencia entre las partes que han
alcanzado un acuerdo”, tal como
se define en el primero de los
libros mencionados, es un
concepto que ha ganado terreno
en la política en los últimos años.
Los Gobiernos, las organizaciones
multilaterales y las ONG
coinciden en que el costo de los
conflictos es mucho mayor que
las inversiones económicas y
políticas necesarias para
prevenirlos. A pesar de las
virtudes inherentes a la
prevención, tanto en términos de
gastos y medios utilizados como
de resultados a mediano y largo
plazo, la Unión Europea diseñó
políticas en esta dirección de
manera bastante tardía. El
Comunicado de la Comisión
Europea sobre la Prevención de
Conflictos de abril de 2001 y el
Programa de la UE para la
Prevención de Conflictos
Violentos de junio de 2001 han
sido, hasta el momento, las
primeras declaraciones de
intenciones y de compromisos en
esta línea. Todavía es necesario
que las obligaciones adquiridas se
mantengan y se traduzcan en
medidas prácticas y eficaces que
permitan desarrollar una política
europea de prevención.

Los dos informes y el artículo
aquí comentados ofrecen algunas
herramientas, propuestas e
instrumentos para lograr una
política de prevención de
conflictos más operativa y
coherente desde tres campos de
acción: la política de la UE en
África subsahariana, la política de
transferencia de armas, y la
necesidad de reconocer la relación
intrínseca entre conflictos
armados y la explotación legal e
ilegal de recursos naturales.
Guerra y Olvido. La Unión

Europea y la prevención de conflictos en África subsahariana, coordinado por Mariano Aguirre y Cecilia Bruhn, analiza las diferentes situaciones de los conflictos en África subsahariana contrastándolas con las respuestas de la comunidad internacional. A partir de este análisis bidireccional, se propone una serie de recomendaciones generales y puntuales para el desarrollo de la política de prevención de la Unión Europea en esta región y en el resto del mundo.

África, con 23 de los países más pobres del mundo y 34 de los menos desarrollados; con poblaciones con esperanza de vida media entre 40 y 50 años debido al impacto del SIDA y de otras enfermedades como malaria, fiebre amarilla o dengue; con crisis de alimentación y escasez de recursos; con la mayor cantidad de conflictos armados del mundo; y con recurrentes violaciones de los derechos humanos, ofrece un escenario que pone a prueba la política de prevención y reconstrucción de la UE para operar en otras regiones. Países como Burundi, Congo-Brazzaville, Guinea-Bissau, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Uganda, Zimbabue, Kenia, Tanzania, Chad, Costa de Marfil y Sudán presentan situaciones conflictivas o pre-conflictivas que llaman la atención sobre las medidas de actuación de las políticas de prevención. Para su diseño es especialmente importante tener en cuenta, por una parte, las raíces de los conflictos: la herencia colonial, la debilidad de los Estados, el alto endeudamiento externo y las luchas étnico-religiosas. Por otra, las condiciones que los sostienen:

existencia de democracias limitadas, corrupción, comercialización de recursos naturales como diamantes, petróleo y madera, expansión del SIDA y otras enfermedades, tráfico ilegal de armas, incidencia de otros Estados de la región en los conflictos internos y la violación de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta tanto las particularidades de cada país como las raíces de los conflictos y las condiciones que los perpetúan, se sugieren seis áreas sobre las que hacer especial énfasis para la política de prevención de conflictos de la UE:

- 1) priorizar la cooperación al desarrollo para prevenir y abordar el conflicto violento mediante la ejecución del Acuerdo de Cotonou y la mejora de las relaciones euromediterráneas,
- 2) reforzar el papel de la UE en la gestión de la crisis integrando los aspectos civiles y militares,
- 3) control de armas ligeras y de pequeño calibre,
- 4) combatir el terrorismo internacional y el crimen organizado,
- 5) colaboración con el sector privado, y
- 6) reforma de las instituciones de la UE.

En relación al control de armas ligeras y de pequeño calibre, *Alerta 2002. Informe sobre derechos humanos, conflictos armados y transferencia de armas*, elaborado por la Unidad de Alerta de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, ofrece instrumentos para orientar la política de transferencia de armamento, de cooperación para el desarrollo y de rehabilitación

política con el fin de contribuir a la prevención de conflictos violentos.

Partiendo de los ocho criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas aprobado por el Consejo de la UE el 25 mayo de 1998, la Unidad de Alerta ha diseñado 34 indicadores que permiten interpretaciones más rigurosas y que corresponden a la situación de los países a los que se exporta armas. Cada territorio es analizado en función de tales indicadores para determinar en qué contextos es necesario denegar una exportación de armas con el fin de que dicha exportación no incida en el desarrollo y la paz de la región. El análisis también sirve como herramienta para orientar las acciones con relación a la cooperación para el desarrollo y la rehabilitación posconflicto armado. Los indicadores se construyen a partir de seis categorías que corresponden a los siguientes temas:

- Las sanciones dictadas a los países por parte de Naciones Unidas, la UE o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), respecto al comportamiento frente a la comunidad internacional en cuanto a la ratificación de tratados o a infringir compromisos internacionales.
- Violaciones de los derechos humanos por parte del Estado tomando en cuenta fuentes tan variadas como los informes de los Relatores de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo Europeo y algunos organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
- Clasificación de los países

según conflictos de alta o media intensidad y presencia de movimientos de refugiados o de desplazados internos, elaborada por institutos de investigación especializados.

- La militarización de un país contemplando el porcentaje de gasto militar con respecto al producto interior bruto (PIB), el porcentaje de soldados con respecto a la población, las compras de armamento con respecto al PIB y el índice de militarización BIC3D elaborado por el Bonn International Center for Conversion.
- El desarrollo bajo la lógica de que no es razonable que los países que presentan un alto endeudamiento, que enfrentan escasez de alimentos, una elevada mortalidad de las mujeres por falta de salud reproductiva, que pertenecen al grupo de países menos desarrollados o que tienen altos niveles de corrupción, dediquen sus escasos recursos a la compra de armamento.
- La calificación de país como paraíso fiscal o que permite el blanqueo de dinero.

Con el cuadro resultante se contrasta cómo solamente 19 Estados están sometidos a embargos de armas tanto por Naciones Unidas, la UE o la OSCE, mientras que hay 56 países con derechos humanos en alerta, 14 con conflictos de alta intensidad, 11 con conflictos de media intensidad, 18 con altos niveles de militarización y 24 con mayor gasto militar que social. Estados como Burundi, Guinea Ecuatorial o Laos son considerados en alerta por al menos 16 indicadores, no tienen ningún tipo de sanción y, lo más grave, es que prácticamente son ignorados en el diseño de políticas

de cooperación. El informe proporciona una herramienta fundamental, no sólo para los centros de decisión política de los Estados de la Unión Europea, sino también para las ONG y otros agentes sociales que dirijan sus acciones a presionar por una política de transferencia de armas y de cooperación para el desarrollo más acorde con la realidad.

Por otro lado, resulta conveniente analizar de dónde proviene el dinero que es utilizado para la compra de armas con las que se perpetúan los conflictos armados. Michael Renner, en su artículo "Rompiendo la relación entre recursos y represión", publicado en *La Situación del Mundo 2002*, hace un interesante análisis de la relación entre conflictos violentos, extracción ilegal de recursos, tráfico de armas, violación de derechos humanos y destrucción medioambiental. Renner argumenta que existe una conexión entre el tráfico de armas ligeras y el comercio legal e ilegal de materias primas como minerales, madera y diamantes. Las rutas por las que las armas y las mercancías son traficadas son las mismas, y los ingresos obtenidos al vender las materias primas financian la compra de armas y equipamiento militar. El autor va más allá de la simple relación armas-recursos, al buscar las conexiones entre el comercio de recursos naturales y la existencia de conflictos armados. El comercio de petróleo, minerales o metales permiten que continúen guerras provocadas por factores ideológicos o étnicos. En ocasiones, la violencia se desencadena para mantener el control sobre los territorios ricos en recursos lucrativos como minerales o madera o en las rutas que siguen para su comercio. En

estos casos, los actores que se benefician con la exportación y el mercado ilegal ven necesaria la prolongación del conflicto armado. Se genera entonces "un círculo vicioso en el que el botín de la explotación de recursos financia la guerra y ésta permite mantener el control sobre los mismos". Las consecuencias sobre la población son cada vez más cruentas puesto que las facciones en este tipo de guerra dependen de la extorsión, el pillaje, la toma de rehenes, el tráfico de drogas, la explotación laboral y la confiscación de la ayuda humanitaria. Llama la atención los numerosos ejemplos que Renner cita de empresas multinacionales que han apoyado directa o indirectamente la perpetuación de estos conflictos, que coincide con la quinta recomendación que se sugiere en *Guerra y Olvido*: la colaboración con el sector privado para que las empresas multinacionales se comprometan seriamente a realizar estrategias de reducción de los conflictos y de la pobreza en sus áreas de influencia. Mediante un seguimiento de los casos de Angola, Sierra Leona, República Democrática del Congo, Indonesia y Papua Nueva Guinea, Renner ilustra el papel que han desarrollado actores tan diversos como los Estados, las fuerzas militares regionales, las empresas multinacionales, las guerrillas internas, las elites del poder y la comunidad internacional para perpetuar la explotación de recursos que generan conflictos de gran escala. Para prevenir posibles conflictos basados en el uso indebido de recursos es necesario, además de la democratización y el respeto a los derechos humanos, facilitar la diversificación de la economía, alejándola de la fuerte

dependencia de materias primas por medio de mayores inversiones en desarrollo humano y proporcionando oportunidades para el avance económico y social. Renner concluye que ésta debe ser la prioridad a seguir no sólo por el Banco Mundial y otras agencias multilaterales de desarrollo, sino también por los países ricos que durante mucho tiempo se han beneficiado de los suministros de materias primas baratas haciendo caso omiso de la destrucción que con ello desencadenaban. A pesar de que los casos analizados por Renner se centran en la lucha por recursos naturales como la madera, el petróleo o los minerales, y dejan de lado las drogas, sus conclusiones podrían extrapolarse al fenómeno de la producción y tráfico de narcóticos permitiendo iniciar un cambio de mentalidad en los países consumidores sobre las consecuencias de la “guerra contra las drogas” en los países productores. Estos dos informes y el artículo de Michael Renner son una muestra de las posibles herramientas, instrumentos y consideraciones que la Unión Europea debería aplicar para construir una verdadera política de prevención de conflictos. La conclusión que se desprende de cada trabajo es que existe una interrelación entre las situaciones políticas, sociales, económicas y culturales que provoca el desencadenamiento de los conflictos. Por lo tanto, si el objetivo es prevenirlos es necesario que en cada línea de acción y en cada política diseñada por la UE se tenga en cuenta la posibilidad de dicha interrelación. Si se continúan diseñando políticas desde perspectivas parciales que no toman en cuenta el conjunto de las situaciones y

sus consecuencias a escala local, regional e internacional, lo más probable es que las medidas de la Unión Europea sean costosas y poco efectivas pues afrontan los conflictos solamente en el momento en que son desencadenados con la consecuente pérdida de vidas humanas y destrucción de sociedades y de culturas.

Carolina María Rudas Gómez
Colaboradora del Centro de
Investigación para la Paz (CIP)

**EL JUEGO GLOBAL
Maldesarrollo y pobreza en
el capitalismo mundial**

José María Tortosa

Icaria - Antrazyt,

Barcelona, 2001,

247 páginas.

En el prólogo de esta obra, en una extensión de apenas media docena de páginas, el autor narra varias anécdotas vividas personalmente. La primera transcurre en la costa cingalesa, otras tienen lugar en China o en Dakar, y varias se desarrollan sobre el telón de fondo de los países andinos. Todas, en mayor o menor medida, están relacionadas con lo que constituye el meollo de esta publicación, tal como se expresa en el subtítulo: la pobreza en el mundo. Y el *maldesarrollo*. Excelente neologismo, que viene como anillo al dedo para lo que en estas páginas se trata, y ejemplo de vocablo acorde con el “genio de la lengua”, lejos de otras barbaridades idiomáticas recientemente importadas del inglés, como el atroz *empoderamiento*, a las que tan difícil es resistirse. Capturada la atención desde el comienzo, por la primera de las anécdotas citadas, el lector difícilmente dejará la lectura del libro, a medida que éste penetra en los vericuetos, escalofriantes a veces, pero siempre preocupantes, de un mundo que se *maldesarrolla* ante nuestros ojos y donde la creciente pobreza se revela para muchos como el principal problema a resolver por el conjunto de la humanidad. A los que ya conocen algunos de los libros anteriores del profesor Tortosa, no les sorprenderá la metodología aplicada en éste, su

clara y cartesiana estructuración —que facilita el desarrollo de las ideas en él expuestas— y la vasta apoyatura bibliográfica citada. Desde este punto de vista, es un excelente texto académico. Pero es mucho más que esto. También es un manual, de fácil utilización, para los lectores profanos que desean conocer los diversos aspectos que confluyen en la pobreza —y en lo que antes se llamaba “subdesarrollo”— a escala mundial. Son éstos, precisamente —los consumidores habituales de los medios de información—, quienes no pueden asimilar el aluvión diario de noticias relacionadas con el hambre, la pobreza, la miseria, la opresión o, simplemente, el diario malvivir de tantos millones de seres humanos, sin sentir la perentoria necesidad de comprender tantos porqués. ¿Por qué hay hambre y pobreza? ¿Desde cuándo? ¿Cómo y dónde se trazan las líneas que separan al pobre del que no lo es? ¿Por qué unos llegan a esas situaciones de miseria y otros se escapan de ellas? ¿Qué habría que hacer para rectificar tan evidente situación de injusticia mundial? ¿Seguirán así las cosas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Podrá soportar la humanidad esa situación? A estas preguntas y a muchas otras más se da respuesta cumplida en este libro. Dar respuesta no significa proveer soluciones, sino entender los complejos mecanismos sociales, económicos y políticos que propician situaciones de pobreza y *maldesarrollo*. Así, el autor no induce a sus lectores a abrigar falsas esperanzas. Poco antes del punto final escribe: “La pobreza es parte del sistema en que vivimos y lo ha sido de los otros sistemas históricos que

conocemos”. Tras recordar que la pobreza no es el resultado de una escasa producción a escala mundial de los bienes que la podrían aliviar, sino de los defectos de la distribución y la organización social, Tortosa concluye afirmando que “el sistema funciona bajo el supuesto de que haya pobres”. ¿Obligaría tal afirmación a arrojar la toalla y rendirse ante lo imposible? ¡De ningún modo! Tras la lectura completa del libro algún lector puede sentir desánimo, pero se verá obligado a aceptar que “es posible y deseable responder a las necesidades básicas locales, crear condiciones a nivel estatal y buscar ‘vacunas’ a nivel global”. En los tres niveles —local, estatal y global— el autor analiza a fondo lo que ocurrió en el pasado, lo que sucede ahora y lo que podría hacerse para atenuar en el futuro esa pobreza y ese *maldesarrollo* que constituyen el hilo conductor a lo largo de toda la obra. Ésta se cierra con una inquietante suposición: “Los sistemas pasan, la lucha continúa aunque podría suceder que la cosmocracia se mantuviera en sus trece y nos condenara no a un imposible fin de la historia sino a un probable fin del mundo”. El profesor Tortosa no se para en barras e introduce el escalpelo sin temor en el cuerpo de una humanidad doliente. Abre la Introducción afirmando que “la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”, requiere valentía y claridad de ideas. Aunque después se afirme que la cosa es algo más complicada y tal historia es también la historia de las mujeres. Y la de los países poderosos que quieren serlo más. Para poner todavía más de relieve la complejidad de la cuestión, se recuerda que, además, “la historia

de la humanidad es la historia de sus desigualdades y la de las luchas por defenderse del lado negativo de esas desigualdades, que incluyen las de clase [...] Es la historia de la inequidad y la historia de la lucha por la equidad y la justicia”. Después descubriremos también que es la “historia de la lucha *contra* la naturaleza”, que empieza a parecer como un empeño suicida. Y la del “cambio cultural y los mestizajes”, para terminar de completar el caleidoscópico panorama.

El profesor Tortosa desarrolla sobre tres ejes lo que propone al lector. Dos ya se han comentado: la pobreza y el desarrollo. El tercero es la prospectiva: estudiar qué se puede hacer. Al tratar de esta cuestión es cuando surge el título del libro, porque el autor considera que lo más importante a este respecto consiste en adivinar la lógica del sistema, es decir, “las reglas del juego” (de *El juego global*), lo que permitiría descubrir cuáles son “las posibilidades más probables”. No se trata de hacer futurología, pues estamos, como indica Tortosa, ante “sistemas abiertos en los que poco campo hay para la profecía”. Ese juego global tiene unas reglas muy flexibles. El autor desvela algunas de ellas, como las que permiten “que las clases dirigentes utilicen al Estado como instrumento para satisfacer sus intereses de forma que pueden predicar el ‘menos Estado, más mercado’ o el intervencionismo y proteccionismo, a tenor de cómo les vayan las cartas”. Las noticias de cada día corroboran esta afirmación: EEUU predica la libertad de comercio pero protege a sus acerías o a sus agricultores, y las pugnas comerciales entre países desarrollados se

promueven por análoga razón. España manifiesta su preocupación por el mundo más desfavorecido, pero quiere seguir evitando la competencia de algunos de esos países cuando ponen en peligro, por ejemplo, la pesca o la agricultura local. No se va a resumir en estas líneas el amplio desarrollo que tan variadas cuestiones reciben en el libro comentado, como es natural. Pero sí se pueden poner de relieve algunos de los asuntos en él tratados, a los que los lectores deberían prestar especial atención. En esta “era de la globalización”, con el uso obsesivo y abusivo de esta expresión, no sobra la reflexión del profesor Tortosa sobre la diferencia entre la globalización, como proceso real, observable y objetivo, de una economía que traspasa las fronteras y el “globalismo”, como ideología. Este último, como tal ideología, niega otros aspectos del problema, porque su finalidad es “legitimar una determinada posición [...] basándose en una particular deformación de [la] realidad”. La conclusión es que “el globalismo funciona como una nueva legitimación de una vieja expansión: la expansión del sistema capitalista desde sus orígenes históricos en la Europa del XV-XVI hasta la actualidad, en la que ya cubre el planeta entero”. No es fácil expresarlo más claramente ni con más rotundidad. Los papanatas de la globalización, tan abundantes hoy, deberían reflexionar sobre si no están rindiendo culto a la nueva ideología: el globalismo impuesto por los poderosos, que a la larga solo repercutirá en enriquecer más a los que ya son ricos. Convendría también llamar la atención del lector sobre el

planteamiento del “derecho al desarrollo”, que el autor expone implacablemente, a partir del texto de la correspondiente declaración de la Asamblea General de 1986. La lógica más elemental confirma que tal derecho “se podrá o no se podrá practicar, pero, desde el punto de vista de los más débiles, mejor que exista que no exista”. El pobre, el débil, necesita todas las armas, aunque se traten de textos simplemente proclamativos de una Asamblea General que solo sirven, a la larga, como desahogo del menesteroso. Aquí es posible recordar la historia más reciente y sospechar que el sistema, en último término, solo entrega a los pobres las “armas” suficientes para evitar que salten los resortes sociales que mantienen el desequilibrio, y que el consuelo que el autor encuentra en esa posibilidad presenta unas perspectivas muy cortas y desalentadoras. Un detalle final. Cierra este volumen una recopilación de libros recomendados. A pesar de que el profesor Tortosa ha escrito mucho, y ampliamente, sobre la cuestión que aquí nos ocupa, no se incluye a sí mismo en la amplia lista alfabética de autores aconsejables. No parece habitual esta práctica, y menos en el mundo académico. El vacío se llena, naturalmente, con algunas llamadas a pie de página que orientan al lector hacia otros textos del mismo autor, relacionados con lo que en cada momento se está tratando. Todos ellos satisfarán, como el que aquí se comenta, la necesidad de saber más sobre estas críticas cuestiones. Aunque siga sin resolverse, durante muchos años —decenios o siglos— una situación que en 1999 permitía que las tres personas más ricas

del mundo poseyesen activos que superaban el Producto Interior Bruto de los 48 países menos ricos; o que los 225 habitantes más opulentos del planeta dispusiesen de una riqueza igual a la de los 2500 millones de habitantes más pobres del mundo, como nos recuerda el autor.

Alberto Piris
Analista del Centro de
Investigación para la Paz (CIP)

**GUERRAS PROFANAS.
AFGANISTÁN, ESTADOS
UNIDOS Y EL
TERRORISMO
INTERNACIONAL**

John K. Cooley
Siglo Veintiuno de España,
Madrid, 2002,
466 páginas.

El islam político representa una densa paradoja de la política internacional. Por un lado, la entente Riad-Washington es la mejor expresión de las “afinidades electivas” que pueden existir entre el imperio estadounidense y los privilegiados exponentes del islam más conservador. Por otra parte, Osama Bin Laden , hijo prodigo de la sociedad saudí, nos recuerda que el núcleo duro del islam expresa una profunda desconfianza y animadversión por los valores seculares de la sociedad industrial y de su, al parecer, imparable expansión política y cultural. Con el trasfondo de esta paradoja transcurre la narración de John K. Cooley.

El autor, viejo periodista inglés con más de 30 años de rica experiencia, desmonta el conjunto de reacciones provocadas por la invasión soviética a Afganistán de diciembre de 1979. El primer capítulo —el más interesante del libro— ausculta las condiciones que hicieron posible la ocupación y nos muestra cómo una pequeña camarilla de viejos líderes del Politburó tomó la fatal decisión a pesar de la oposición de altos jefes militares.

El resto del libro se ocupa del conjunto de alianzas, lideradas por EEUU, pergeñadas para enfrentar la invasión,

principalmente a través de la financiación y apoyo a los muyahidín. Con el firme propósito de hacerle morder el polvo al oso ruso, miles de millones de dólares estadounidenses y saudíes conformaron una potente orquesta político-militar donde Egipto, la República Popular China y Pakistán estuvieron entre los más activos, cada uno, por supuesto, por motivos diferentes. Para el autor la estrategia de financiar a los muyahidín de forma tan incondicional fue equivocada porque no previó el furor antioccidental que se derramaría por todo el islam político a medida que los viejos combatientes, envalentonados por su victoria sobre los rusos, volvían a sus respectivos países y conformaban una especie de “internacional islámica”, de la que Al Qaeda parece ser una de las tantas subsidiarias o, quizás, la cabeza del *holding*. Esta crítica supone que los estrategas deben tener la clarividencia suficiente para prever las consecuencias de sus actos a diez años vista, virtud irreal.

Aunque como reconoció Brzezinski, el consejero de Seguridad Nacional de Carter y uno de los primeros ideólogos a favor de la alianza islámica contra la invasión, “qué importa pagar ese precio a cambio de la caída del imperio soviético”. El desastre ruso en Afganistán fue el prolegómeno del fin del imperio y también agudizó las turbulencias políticas en Pakistán y Afganistán y en otros países del mundo islámico. Los talibán demostraron aquel viejo adagio que sostiene que donde se siembran vientos se cosechan tempestades. Cooley hace un extenso, y a veces confuso, análisis de cómo algunas de esas

tormentas afectaron a Egipto, Argelia, Pakistán o Filipinas. Fruto de una labor periodística intensa, el libro es rico en detalles y anécdotas. Queda para el lector discriminar lo esencial de lo accesorio, una tarea difícil, aunque imprescindible, si se desea comprender el complejo entramado de las relaciones entre las fuerzas del islam político y las potencias occidentales.

Cesar Docampo

Politólogo y analista en temas de seguridad y conflictos regionales

**LA DEBACLE DE
ARGENTINA:
UNA ARGENTINA QUE
MUERE Y OTRA QUE
BOSTEZA**

Carlos Gabetta
Icaria,
Barcelona, 2002,
215 páginas.

A manera de crónica, el autor muestra el devenir y la decadencia de un pueblo en el último cuarto de siglo, la devastación económica y el sentimiento nacional. Este libro está basado en una cuidadosa selección periodística que asoma al lector al consciente y premeditado saqueo de la República Argentina. El periodo analizado transcurre desde la época de los horribles acontecimientos que propiciaron las dictaduras militares, hasta el recuento de las tristes y recientes imágenes de la multitud hambrienta que deambula en las otrora prósperas ciudades argentinas.

La rendición de las tropas argentinas ante un comandante inglés fue el comienzo del fin para la dictadura. La Iglesia católica había colaborado con los militares, aún a costa de algunos de sus jerarcas y clérigos. Durante la guerra, también colaboraron los grandes medios de comunicación, las corporaciones empresariales, buena parte de la dirigencia sindical, los partidos políticos y hasta el partido comunista. Ninguna de las masacres fue esclarecida hasta condenar a los culpables. La casi totalidad de los crímenes quedaron en la impunidad.

Pese a los logros obtenidos desde 1918 en los sistemas de educación y salud y el aumento en el nivel de vida, comparable o superior al de algunos países europeos, Gabetta señala cómo Argentina es hoy el cuarto país más endeudado del planeta — 140 mil millones de dólares —, y las condiciones de vida han descendido a los niveles de la década de 1960.

El autor recuerda que hasta 1930 la oligarquía de ese país se enriqueció fabulosamente y el signo del fraude sistemático y la corrupción determinaban la política. Ese año se dio el primer golpe de Estado de la serie que concluiría en 1983. Desde 1930 hasta la primera elección de Perón (1945), Argentina pasó un periodo denominado “la década infame”. El proyecto integrador de Perón, válido en 1945, ya no era viable en 1973, y en medio del caos generalizado, en 1976 el General Videla derrocó el tercer Gobierno peronista.

Durante las dictaduras, la deuda externa (de 7.500 millones de dólares) se multiplicó por seis, sin que se hubiesen realizado inversiones productivas u obras de infraestructura. “La dictadura militar y sus asesores y apoyos civiles iniciaron el desmantelamiento del Estado y, sobre todo, cambiaron una economía que producía —aún con sus enormes defectos— por otra, si se le puede llamar así, de frenética especulación”, afirma el autor.

En democracia, pocos presidentes argentinos han obtenido un apoyo popular tan grande como Raúl Alfonsín, y ninguno ha generado tanta expectativa para la solución de la crisis dejada por los militares y sus colaboradores. La deuda externa pública y privada, la

legítima y la ilegítima, se confundieron para cargársela al Estado, el aparato productivo no se reactivó y se mantuvo la especulación con altas tasas de interés, la frustración nacional e internacional fue enorme, la deuda externa aumentaba y las condiciones de vida seguían deteriorándose. Los militares fueron beneficiados con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Y a todo ello se sumaba la hiperinflación de 1989. Carlos Menem y su ministro Domingo Carvalho acompañaron su mandato con la recesión y la paridad del peso. La deuda llegó a 150 mil millones de dólares y el número de marginados de la actividad productiva y los servicios públicos aumentó. Mientras tanto, la elite argentina aún mantiene 90 mil millones de dólares en el exterior. Fernando de la Rúa no logró reestructurar la deuda externa. Los Gobiernos se suceden. Carvalho, llamado con urgencia, no logra conjurar la crisis económica que pone en cuestión el modelo seguido y la democracia argentina. El capital extranjero pide más garantías, los planes y programas del MERCOSUR se van posponiendo, el FMI se resiste a prestar más dinero, se imponen nuevas y más severas condiciones, surgen organizaciones populares que pueden devenir en un nuevo partido que tome el control del Estado y represente una República autónoma e igualitaria. Dice el autor que el problema de Argentina no es que la salven, sino salvarse a sí misma. Encontrar el modo, porque los medios existen y las propuestas se multiplican. “Jóvenes sin futuro, personas mayores desamparadas,

trabajadores empobrecidos, clase media en descomposición, marginalidad, inseguridad, corrupción, desnacionalización.... ¿Dónde ha quedado el ‘granero del mundo’, el país de futuro que vislumbró Clemenceau?”.

Hernando Perdomo Blanco
Colaborador del Centro de
Investigación para la Paz (CIP)

A AGENDA PERDIDA DA RECONSTRUÇÃO PÓS-BÉLICA: O CASO DE TIMOR LESTE

Mónica Rafael Simões
Quarteto,
Coimbra, 2002,
119 páginas.

Mónica Rafael Simões hace en este libro una serena invitación a la reflexión sobre la solidaridad que brinda la comunidad internacional a los pueblos que durante años han estado inmersos en guerras interestatales, a los que han logrado acuerdos y consiguieron superar el conflicto armado, y a instituciones internacionales de distinto orden. La reflexión se centra en la solidaridad ofrecida en el curso de los procesos de reconstrucción en aras de lograr la consolidación de la paz.

En la primera parte de este interesante libro, la autora analiza con agudeza, en lo que denomina el “debate teórico”, la trascendencia de los conflictos interestatales: el daño a la población civil y al tejido social, a las infraestructuras y a las instituciones sumergidas en el caos.

Con acierto, Simões señala que el fin de los conflictos armados es el resultado de negociaciones de paz que permiten alcanzar un acuerdo sobre los principales desequilibrios que los originaron, y que estos han de ser el núcleo central de las mismas. Para la autora, el fin de la guerra no significa el fin de la confrontación ideológica, es el principio de un proceso largo y exigente de construcción de una nueva sociedad basada en la ausencia de violencia. Si no se procura la resolución de las causas intrínsecas del conflicto, estas

continuarán como una herida curada apenas superficialmente, que podrá ser reabierta en cualquier momento si no hay una renovación del *status quo*. También destaca que la consolidación de la paz transita por las distintas apreciaciones sobre reconstrucción y rehabilitación en sus diferentes etapas, y su adecuada aplicación: los acuerdos, la participación ciudadana, la recomposición de los poderes públicos, la desmovilización y reintegración de los antiguos combatientes, la creación de fuerzas armadas combinadas, la destrucción de las minas antipersona, la asistencia financiera internacional, la rehabilitación material y económica, el regreso de los refugiados, la atención e integración a mujeres y menores y la reconciliación nacional. Todo ello dentro de un cuadro de respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Profundizando en el análisis, describe con detenimiento el recorrido de las formulaciones y acciones de Naciones Unidas sobre la paz ante los desafíos y las exigencias del nuevo sistema internacional, las consideraciones presentadas en 1992 por el Secretario General, Boutros Ghali, ante la Asamblea General sobre la diplomacia preventiva, el restablecimiento de la paz y el mantenimiento de la paz, todo ello como un conjunto de disposiciones con vistas al desarme de los adversarios y el restablecimiento del orden, y la adopción de medidas de protección de los derechos humanos. Para 1995, el Secretario General de Naciones Unidas creó un grupo de trabajo responsable de la identificación de las tareas requeridas y de la evaluación de las respuestas

dadas por la organización en esta materia.

En 1998, Kofi Annan presentó una definición más global sobre la consolidación de la paz al finalizar los conflictos, reconociendo que ésta requiere de un abordaje en varios frentes que conduzca al no desencadenamiento de las hostilidades. Las principales recomendaciones para la consolidación de la paz se dirigen a propiciar la reintegración de los combatientes, la reestructuración del sistema judicial y la reconstrucción de la sociedad civil. La protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales también ha sido, desde el inicio de las misiones de consolidación de la paz, un objetivo a cumplir, siendo identificada como la piedra nodal y componente esencial de todos los esfuerzos para promover una paz duradera.

Mónica Rafael Simões resalta que al finalizar algunos conflictos o regímenes represivos, varias sociedades también han admitido la absoluta necesidad de revelar la verdad sobre su pasado, como medio para conseguir las nuevas bases sociales y alcanzar formas políticas distintas a las anteriores. Investigaciones serias sobre las violaciones y crímenes cometidos en el pasado, en busca de la verdad y la justicia, son fundamentales para obtener la unidad y reconciliación nacional. Las Comisiones de la Verdad han sido el medio más eficaz para el efecto, divulgando los crímenes, dignificando a las víctimas, presentando recomendaciones para el juzgamiento y condena de los responsables y los medios para compensar a las víctimas.

El último capítulo del libro está dedicado al análisis detallado de la reconstrucción de Timor Oriental, con especial atención a cómo los

derechos humanos y la intervención humanitaria están siendo aplicados en la primera nación del siglo XXI. Se trata de una de las más recientes tentativas de reconstrucción posbélica por parte de la comunidad internacional, “después de cuatro siglos de colonialismo, seguidos de veinticinco años de ocupación brutal y desgarradora violencia, en poco menos de dos años los timorenses afrontan ahora la pesada tarea de reconstruir un país salido de las cenizas del conflicto”, afirma la autora.

Ésta considera que la comunidad internacional tiene en este caso la oportunidad de contribuir a la creación de una nación fundada en la democracia, el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y la autonomía para decidir sobre su futuro.

Las acciones humanitarias de socorro inmediato en 1999 han sido complementadas hasta hoy con ayudas económicas, planes de retorno para refugiados internos y externos, la reposición de las Fuerzas Armadas, la rehabilitación política y administrativa y la rehabilitación económica y social. El fin de estas acciones y el desafío que encierran es la transición hacia una paz sustentable y duradera.

Por ahora, parece que los tribunales indonesios no son capaces de juzgar a los responsables de la barbarie cometida en Timor Oriental. Lo evidente es que no hay capacidad ni disposición para cumplir el cometido. Naciones Unidas y los Estados comprometidos han de propiciar la creación de un tribunal internacional, necesario para la reconstrucción y la reconciliación nacional en Timor Oriental.

Claudia Clavijo
Colaboradora del Centro de

Investigación para la Paz (CIP)
**GUERRAS QUE YO HE
 VISTO**

Luisa Muraro, Clara Jourdan,
 Ida Dominijanni, Simone
 Weill, Virginia Wolf, Delfina
 Lusiardi, Annarosa
 Buttarelli, María Zambrano,
 Elena Laurenzi

BOMBAS DE RISA

Pat Carra
 Colecc. Cuadernos
 Inacabados,
 Ed. Horas y Horas,
 Madrid, 2001,
 175 páginas.

Este “es un libro doble, con dos caras y dos cuerpos. Un yo y otro, capacidad femenina de ser dos. Capacidad femenina de dolerse con el mundo y, por otro, de gozar y reír con la vida”, como expresan sus editoras.

En su primera parte, la obra recoge el pensamiento de diez mujeres filósofas que, a lo largo del siglo XX, sorprenden con su sabiduría y sentido común. Completan estos textos un escrito de la pensadora española María Zambrano y una introducción de Elena Laurenzi. Todas reflexionan sobre lo atroz de la guerra. Algunas la han vivido. Coinciden en la necesidad de una educación para la paz. Aún más, piensan que hay que tratar de establecer la vida en vista de la paz. Como dice Zambrano, “la paz es, además de ausencia de guerra, un modo de vivir, un modo de habitar en el planeta, un modo de ser persona. Entrar en ‘estado de paz’ significa traspasar el umbral entre toda la historia pasada y una nueva historia. Se

trata pues de una verdadera revolución, a la que no hay que renunciar”.

Virginia Wolf plantea la lucha por la libertad sin armas, con la creación de ideas de paz para transmitir las a los jóvenes. Dice que hay que ser capaces de encender la mecha para ponerlas en acción. Contrarrestar el efecto que produce el torrente de palabras que desbordan los políticos alentando a la lucha por defender la libertad; una lucha que destruye y que mata. El joven soldado no está dirigido solamente por las palabras de las arengas, de los discursos; está dirigido también por voces que están dentro de sí mismo: instintos alimentados por la tradición y la educación. De ahí la importancia de educar para la paz a la sociedad en general y a los jóvenes en particular.

Simone Weil, que vivió la II Guerra Mundial habla de guerra de religiones. Reflexiona sobre el efecto de la religión en las sociedades, entre los poderosos y los miserables. Analiza la idolatría como una forma de religión.

Hay dos capítulos que tratan dos mitos de la literatura clásica, Casandra y Antígona, basándose en la opinión de algunos estudiosos de la civilización clásica griega, de que los mitos fueron creados para dar palabras a los conflictos sociales; de que los personajes femeninos de estas tragedias brindan a sus autores un medio para describir esos conflictos, no nombrables de otra manera. Crean ver, también, la diferencia en el modo de luchar por la libertad entre hombres y mujeres: con las armas o con la palabra y la actitud ante la vida. En la segunda parte del libro, Pat Carra, dibujante de cómic, nos hace sonreír aunque se empañen

los ojos. Comparto la idea: “La risa es una expresión placentera que invita a la relación”. En este caso es una expresión de solidaridad con quien sufre la violencia.

Los dibujos caricaturizan hechos tan reales que si no fuesen crueles nos arrancarían la carcajada en lugar de la sonrisa.

Es recomendable y sano detenerse a leer este libro que refrescará las ideas de paz que tenemos dormidas, tan necesarias hoy cuando múltiples conflictos nos rodean. Se estará o no de acuerdo con algunas de las autoras cuando dicen que la guerra es cosa de hombres. Porque el libro es subjetivo, como casi todos, por cierto. Pero aquí está: para recordar, para reflexionar, para reír y para llorar. Eso sí: no nos deja indiferentes.

Elsa Velasco
Centro de Investigación para la
Paz (CIP)

EL DEBATE HUMANITARIO

Francisco Rey Marcos y
Víctor de Currea-Lugo
Icaria,
Barcelona, 2002,
143 páginas.

Durante los años noventa se ha experimentado una sucesión de crisis que por su impacto político, social, económico y su amenaza a la seguridad mundial ha puesto la cuestión humanitaria en la agenda internacional. Los errores e incapacidades de los organismos multilaterales y del sector no gubernamental, y la falta de respuesta de algunos Estados en las crisis de Bosnia-Herzegovina, Ruanda o ex-Zaire han abierto el debate en torno a la acción humanitaria. Esta última es cuestionada una vez más con motivo de la guerra en Afganistán como respuesta a los acontecimientos del 11 de septiembre. Esto supone revisar los principios que la fundamentan, las formas de actuación, los móviles que persigue, y las responsabilidades y los derechos de los actores. La acción humanitaria requiere soluciones políticas consensuadas y respuestas coordinadas capaces de llevar a cabo acciones acordes a las situaciones particulares de crisis.

Los cambios en el contexto internacional y en las características de los conflictos en el periodo de la postguerra fría, han dado paso a respuestas humanitarias que se distancian de la de corte meramente asistencial. Si bien la finalidad continúa siendo salvar vidas humanas en condiciones dignas, la “acción humanitaria dejó de ser sinónimo de ayuda de emergencia para

incluir atención a refugiados en crisis largas, prevención y otros componentes”, como afirman los autores de este libro.

Los conflictos actuales, en los que la población civil comporta el 90% de las bajas, exigen renovados esfuerzos para brindar asistencia y protección a las víctimas. La creciente relevancia de las cuestiones humanitarias, que se expresa en el aumento progresivo de fondos públicos y privados y en la atención de los medios de comunicación, denotan un marcado interés desde los gobiernos y la sociedad civil. En este tipo de conflictos la necesidad de intervenciones humanitarias es mayor. Sin embargo, como indican estudios de la pasada década, la ayuda se puede convertir en parte de la dinámica del conflicto, y ser disputada por los grupos beligerantes para financiar los enfrentamientos o para desplazar a la población. Se trata de un escenario donde los actores se han multiplicado y la eficacia de la ayuda es puesta en entredicho. En este contexto, es crucial la evaluación de los efectos sociopolíticos, económicos y medioambientales sobre la población beneficiaria y las zonas de alcance. A su vez, la rendición de cuentas es un requisito para los donantes, la propia organización y la población afectada.

Este libro describe el estado actual del debate sobre la acción humanitaria en sus dimensiones ética, jurídica y operacional, a través de sus transformaciones desde los años noventa hasta la actualidad. Presenta las discusiones en torno a los principios y los valores éticos que la guían; el estado jurídico de la cuestión, haciendo hincapié en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sus alcances

y limitaciones; y los principios operativos que rigen la acción sobre el terreno, es decir, proyectos como Esfera o Qualité y los principales cuestionamientos en torno a los mismos.

Los cambios acontecidos en la década de 1990 muestran un nuevo tipo de crisis humanitaria, denominadas emergencias complejas, sobre las que “cabe preguntarse si son emergencias políticas o humanitarias, porque sus consecuencias son humanitarias (víctimas de combates, hambre, epidemias, refugiados) pero sus causas son siempre políticas”, afirman los autores. La creciente subordinación de lo humanitario a intereses políticos, económicos o militares es cuestionada por Rey y De Currea-Lugo porque deja a un lado las necesidades de las víctimas para centrarse en las de los Estados. Se utiliza lo humanitario al servicio de las prioridades políticas y vinculado a condicionalidades de orden político y económico.

Los principios fundamentales de la acción humanitaria, como neutralidad, imparcialidad hacia las víctimas e independencia, y las contradicciones existentes entre los enunciados y la práctica, son sometidos en el libro a cuestionamientos respecto a su aplicabilidad y a su utilidad en el terreno. Asimismo, se destacan las desavenencias sobre la definición de lo humanitario entre ONG, gobiernos, Estados y organismos internacionales, y se plantea el testimonio como un nuevo elemento que se sumaría al binomio asistencia-protección, como una tarea destinada a favorecer a las víctimas y a las poblaciones amenazadas que requiere de un análisis de la situación particular.

El estado de los debates jurídicos,

enmarcado en el Derecho Internacional Humanitario, se expresa, por una parte, en posiciones contrarias a la normativización de lo humanitario; por otra, en la necesidad de normativizar cada una de las acciones; y, por último, en el enfoque pragmático que acepta la norma pero que no ve en ella la respuesta al problema humanitario. El libro de Françoise Bouchet-Saulnier *Diccionario Práctico de Derecho Humanitario* (Península, Barcelona, 2001) hace un recorrido minucioso de este derecho, que regula los métodos y los medios utilizados en los enfrentamientos bélicos y que protege a las personas y bienes afectados. Un debate adicional es el de la penalización de las violaciones al DIH, como lo ejemplifica el caso reciente de Afganistán, donde las mismas permanecen impunes.

Los principios operativos que rigen la acción sobre el terreno también son considerados. Se recogen cuestiones como la incorporación de la prevención a la acción humanitaria, acerca de la forma de evitar la promoción de elementos sociales propicios al conflicto, y la necesidad de fortalecer mediante las acciones humanitarias las potencialidades de la población favorables a la estabilidad y al desarrollo.

Asimismo, se hace referencia a la vigencia del principio *do no harm* sobre la acción, elaborado por Mary Anderson, coherente con la crítica sobre los efectos eventualmente negativos de la ayuda. Por último, se menciona la rendición de cuentas y la evaluación desde un enfoque integral en el que ayuda y desarrollo no son ni excluyentes ni lineales.

Rey Marcos y de Currea-Lugo presentan de forma clara y precisa

estas cuestiones sobre la acción humanitaria, sus transformaciones en las últimas décadas, y los desafíos éticos y operacionales a los que se enfrenta. Partiendo de un planteamiento correcto de las características de la ayuda tradicional hasta su nueva forma, contemplan las modificaciones del escenario internacional y como éste la ha afectado. Se trata de un libro de interés que contiene los elementos clave para comprender los cambios y desafíos de la acción humanitaria en la actualidad.

Elizabeth Rodríguez
Socióloga. Master en
Cooperación Internacional y
Gestión de Proyectos por el
Instituto Universitario Ortega y
Gasset. Colaboradora del Centro
de Investigación para la Paz (CIP)

Bibliografía

SUSANA FERNÁNDEZ HERRERO

Tribunal Penal Internacional

LIBROS:

- Annan, Kofi A., “Orden jurídico internacional y derechos humanos”, *Un destino común renovado. Memoria anual sobre la organización 2000*, Departamento de Información Pública de Naciones Unidas, Nueva York, 2000.
- Annan, Kofi A., “Orden jurídico internacional y derechos humanos”, *Un destino común renovado. Memoria anual sobre la organización 2001*, Departamento de Información Pública de Naciones Unidas, Nueva York, 2001.
- Bennis, Phyllis, “Antes y después: política exterior estadounidense en 2001”, *Anuario CIP 2002. De Nueva York a Kabul*, CIP/FUHEM, Icaria, Barcelona, 2002.
- Carrillo Salcedo, Juan Antonio, *La criminalización de la barbarie: la Corte Penal Internacional*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000.
- Fernández de Casadevante, Carlos y Francisco Javier Quel, *Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional*, Ariel, Barcelona, 1997.
- Fischer, Horst, Claus Crees y Sascha Rolf Lüdes (eds.), *International and National Prosecution of Crimes under International Law: Current Developments*, Berlin Verlag Arno Spitz, Berlín, 2001.
- Gil Gil, Alicia, *Derecho Penal Internacional*, Tecnos, Madrid, 2001.
- Jiménez Cortés, Claudia, “La responsabilidad del individuo ante el Derecho Internacional: hacia una sistematización de los delitos”, *Agenda ONU 1998*, Asociación para las Naciones Unidas en España, Barcelona, 1999.
- Lirola Delgado, Isabel y Magdalena Martín Martínez, *La Corte Penal Internacional: Justicia versus impunidad*, Ariel, Barcelona, 2001.
- Pigrau Solé, Antoni, “La Corte Penal Internacional posible”, *Agenda ONU 1998*, Asociación para las Naciones Unidas en España, Barcelona, 1999.
- Pigrau Solé, Antoni, “Elementos de Derecho Internacional Penal”, *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1997*, Tecnos, Madrid, 1998.
- Quel López, Francisco Javier y María Dolores Bollo Arocena, “La Corte Penal Internacional: ¿un instrumento para la impunidad?”, *La protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001.

Susana Fernández Herrero es historiadora y responsable del Centro de Documentación del Centro de Investigación para la Paz (CIP)

- Rights and Democracy y The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, *Corte Penal Internacional: Manual para la ratificación e implementación del Estatuto de Roma*, Vancouver, 2000.
- Sewal, Sarah B., Carl Kaysen y Michael P. Scharf (eds.), *The United States and the International Criminal Court*, Rowman & Littlefield, Lenham MD, 2000.
- Villagran Kramer, Francisco, *Los crímenes internacionales ante las Cortes penales internacionales y de derechos humanos*, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), San José (Costa Rica), 1996.
- Villarreal Corrales, Lucinda, *La cooperación internacional en materia penal*, Porrúa, México D.F., 1999.

ARTÍCULOS:

- “Jurisdicción penal internacional y Derecho Internacional Humanitario: los Tribunales para ex Yugoslavia y para Ruanda”, *Revista Internacional de la Cruz Roja*, noviembre-diciembre de 1997, vigésimo segundo año, Nº 144, monográfico.
- Joe Strark, “International Criminal Court”, *Foreign Policy in Focus*, abril de 1998, Vol. 3, Nº 4, pp. 1-4.
- Francisco Javier Quel López, “Algunas propuestas críticas al proyecto de creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente” *Meridiano Ceri*, junio de 1998, Nº 21, pp. 4-7.
- Human Rights Watch, “Un elemento de disuasión contra las atrocidades del futuro”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, 1998, Nº 65, pp. 35-65.
- Davis Armstrong, “Law, justice and the idea of a world society”, *International Affairs*, julio de 1999, Vol. 75, Nº 3, pp. 547-561.
- Carlos Slepoy Prada, “Impedir los crímenes de lesa humanidad”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, 1999, Nº 66, pp. 23-30.
- Human Rights Watch, “Después de Pinochet: cómo perseguir en el extranjero a los violadores de los derechos humanos”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, 2000, Nº 72, pp. 83-100.
- Knut Dörmán, “Preparatory Commission for the International Criminal Court: The Elements of War Crimes”, *Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross*, septiembre de 2000, Vol. 82, Nº 839, pp. 771-795.
- Julio Jorge Urbina, “La protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi et l’établissement d’une juridiction penale internationale”, *Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross*, septiembre de 2000, Vol. 82, Nº 840, pp. 857-885.
- Magdalena Martín Martínez, “Jurisdicción universal y crímenes internacionales”, *International and Comparative Law Review*, 2000-2001, Vol. 9, pp. 171-187.
- Xavier Deop, “La Corte Penal Internacional: un nuevo instrumento internacional contra la impunidad”, *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, 2000-2001, Nº 51-52, pp. 229-247.

- Lenard J. Cohen, “Post-milosevic serbia”, *Current History*, marzo de 2001, Vol. 100, N° 644, pp. 99-108.
- International Crisis Group, “Bosnia’s war criminal: getting away with murder”, *Current History*, marzo de 2001, Vol. 100, N° 644, pp. 120-123.
- Hugo Adrián Relva, “La jurisdicción estatal y los crímenes de Derecho Internacional” *Relaciones Internacionales*, mayo de 2001, N° 20.
- Pedro J. Tenorio, “Estatuto de la Corte Penal Internacional y Constitución”, *Revista de Derecho Internacional Político*, 2001, N° 51, pp. 57-103.
- Carlos Abin, “Corte Penal Internacional: la fuerza de la razón versus la razón de la fuerza”, *Revista del Sur*, agosto de 2001, N° 118, pp. 3-4.
- François Bugnion, “Droit de Genève et droit de La Haye”, *Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross*, diciembre de 2001, Vol. 83, N° 844, pp. 901-921.
- Robin Coupland, “Humanity: What is it and how does it influence international law?”, *Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross*, septiembre de 2000, Vol. 82, N° 840, pp. 969-989.
- Hélène Ruiz Fabri, “La Convention de Rome créant la Cour Pénale Internationale questions de ratification”, *Revue Internationale de Droit Comparé*, 2002, N° 2, pp. 441-463.
- María Barberá Fraguas, “Derecho Penal Internacional: el genocidio y otros crímenes internacionales. Autoría y participación: la responsabilidad del superior jerárquico, autoría inmediata”, *Actualidad Penal*, marzo de 2002, N° 11, pp. 253-275.
- Jelena Pejic, “Accountability for international crimes: from conjecture to reality”, *Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross*, marzo de 2002, Vol. 84, N° 845, pp. 13-33.
- Oscar Solera, “Complementary jurisdiction and international criminal justice”, *Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross*, marzo de 2002, Vol. 84, N° 845, pp. 145-171.
- Jorge Luis Collantes, “La Corte Penal Internacional: el impacto del Estatuto de Roma en la jurisdicción sobre crímenes internacionales”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC)*, 4 de julio de 2002.
- Michael Hirsh, “Bush and the World”, *Foreign Affairs*, septiembre-octubre de 2002, Vol. 81, N° 5, pp. 18-43.
- Kenneth Roth, “El rechazo de EEUU al Tribunal Penal Internacional”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, otoño de 2002, N° 79, pp. 127-135.
- “Caution about a Court: The Bush administration’s objections to the International Criminal Court”, *Jane’s Foreign Report*, 18 de julio de 2002, N° 2.696, pp. 1-3.

DOCUMENTOS:

- Forum Europe, *No puede haber paz sin justicia: argumentos a favor de un tribunal penal internacional permanente*, Bruselas, 1997.
- Naciones Unidas, *Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones*

Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, Estatuto de la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, 1998.

- Ferencz, Benjamín B., *From Nuremberg to Rome: Towards an International Criminal Court, Policy Paper 8*, Development and Peace Foundation, Bonn, 1998.
- Fraidenraij, Susana, *La Corte Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Seminario sobre Justicia Penal Internacional*, Universidad Iberoamericana, México, 2000.
- Naciones Unidas, *Millennium Summit Multilateral Treaty Framework: An Invitation to Universal Participation, United Nations 6-8 de septiembre de 2000*, The United Nations Reproduction, Nueva York, 2000.
- Amnistía Internacional, *Instituciones Nacionales de Derechos Humanos: recomendaciones de Amnistía Internacional para la protección y la promoción efectivas de los derechos humanos*, EDAI, Madrid, 2001.
- Program in Law and Public Affairs y Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction*, Universidad de Princeton, Princeton (New Jersey), 2001.

DIRECCIONES DE INTERNET:

- Amnistía Internacional - <http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/ICChome>
- Amnistía Internacional USA - <http://www.amnestyusa.org/icc/>
- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - <http://www.aprodeh.org.pe>
- Coalición por la Corte Penal Internacional - <http://www.iccnw.org>
- Council of Europe - <http://www.legal.coe.int/criminal/icc>
- Crimes of war project - <http://www.crimesofwar.org>
- Criminal Court Monitor Online - <http://www.icg.org/icc/>
- Cruz Roja -
<http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/c1256212004ce24e4125621200524882/52249b3cf66eca1303256be90049e320?OpenDocument>
<http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/22615d8045206c9b41256559002f7de4/642e89e74b3320bd4125663a0054e35b?OpenDocument>
- Editorial de Amnistía Internacional - www.edai.org/centro/infos.html
- El País - <http://www.elpais.es/multimedia/internacional/tpi.htm>
- Equipo Nizkor - <http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/>
- European Journal of International Law - <http://www.ejil.org>
- Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) / Centro de Investigación para la Paz (CIP) - <http://www.cip.fuhem.es/documentación/internet.htm>
- Human Rights Watch - www.hrw.org/spanish/cpi.html
- International Court of Justice - <http://www.icj-cij.org>
- International Human Rights -
<http://www.law.nwu.edu/humanrights/current/icc.html>

- Ko'aga Roñe'eta a Journal of Human Rights -
<http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html#l.%20Del%20crimen%20de%20guerra%20al%20crimen%20de%20>
- Lawyers Committee for Human Rights - <http://www.lchr.org/IJP/home.htm>
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá -
http://209.217.98.79/english/00_index_e.htm
- Naciones Unidas -
<http://www.un.org/law/icc/index.html> <http://www.un.org/icty/basic.htm>
- No Peace without Justice - <http://www.npwj.org/index.php?newlang=english>
- Northwestern University School of Law/Center for International Human Rights -
<http://www.law.nwu.edu/humanrights/current/icc.html>
- Prevenir Genocidio Internacional - <http://www.preventgenocide.org/es/>
- Red de información jurídica - <http://www.cajpe.org/rij/index.htm>
- Rights & Democracy/Droits et Démocratie – <http://www.ichrdd.ca>
- Universidad Andina Simón Bolívar – <http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/documentos/listadoarticulos/articulospci.htm>
- Washington Working Group on the International Criminal Court -
<http://www.wfa.org/issues/wicc/links.html>
- Women's Caucus for Gender Justice - <http://www.iccwomen.org>